

**Centro Cultural de la Cooperación Floreal
Gorini**

Director: Juan Carlos Junio



**Colección “Tesis de investigadores e
investigadoras del CCC”**

Martín Cortés

**Luchas populares y lógica estatal: entre la
autonomía y la institucionalización
Estado y conflicto social en la Argentina
contemporánea (2003-2007)**

Tesis presentada y aprobada con mención especial y recomendación para
publicación en la Maestría de Investigación en Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires en 2009

Directora: Dra. Mabel Thwaites Rey

ISBN: 978-987-33-1657-9

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Av. Corrientes 1543 (C1042AAB) - Ciudad de Buenos Aires - [011]-5077-8000 - www.centrocultural.coop

Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini: Prof. Juan Carlos Junio

Subdirector: Ing. Horacio López

Director Artístico: Juano Villafañe

Secretario de Ediciones y Biblioteca: Jorge C. Testero

Secretario de Investigaciones: Pablo Imen

Secretario de Comunicaciones: Luis Pablo Giniger

Publicado en la Biblioteca Virtual del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini

Av. Corrientes 1543 (C1042AAB) - Ciudad de Buenos Aires - [011]-5077-8000 -

www.centrocultural.coop

Año de publicación 2012

Algunos derechos reservados.

El presente trabajo se publica bajo una licencia Creative Commons Atribución - Share Alike 2.5

**Luchas populares y lógica estatal: entre la autonomía y la institucionalización
Estado y conflicto social en la Argentina contemporánea (2003-2007)**

Tesis de la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

Directora: Dra. Mabel Thwaites Rey

Autor: Martín Cortés

Resumen

El retroceso de las políticas neoliberales que caracterizaron a los gobiernos latinoamericanos en la década del noventa ha dado lugar a importantes reconfiguraciones en las relaciones entre Estado y Sociedad Civil en la región. Esto implicó el surgimiento de una multiplicidad de gobiernos que, con diferentes matices y niveles de radicalidad, supusieron posiciones críticas respecto del consenso neoliberal de la década pasada. En paralelo, desde el punto de vista de la sociedad civil, se han proliferado diversas formas de acción y organización colectiva de los sectores subalternos que expresaron distintos modos de resistencia y que configuraron el modo en que se desarrolló el conflicto social en América Latina. En el caso argentino, uno de los sujetos sociales más salientes fue el movimiento piquetero, construido sobre la base del trabajo territorial en las zonas periféricas urbanas.

En este marco, el propósito de este trabajo es analizar la relación entre Estado y conflicto social en Argentina durante el período comprendido por la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). Del mismo modo que en el resto de la región, en la Argentina se suscitaron variadas experiencias de organización que ciertamente han aportado aires renovados a las matrices de pensamiento emancipatorio. Los primeros y más salientes ejemplos, al menos en términos de las reflexiones que suscitaron, anclaron, en términos generales, en una fuerte crítica a la tradición leninista, en el marco del auge de formas de organización de nuevo tipo. Así, el sentido general de la protesta en la época asumió un carácter “anti-estatal”. Nuevamente al igual que en el subcontinente en general, apareció en Argentina un gobierno que emergía con un discurso de ruptura con la década anterior. Luego de la crisis que estalló en diciembre de 2001 y de la presidencia provisoria de Eduardo Duhalde, el gobierno encabezado por Néstor Kirchner trajo consigo una serie de transformaciones que supusieron un cambio de rumbo en la orientación general de las políticas estatales.

Ello supuso un reordenamiento del mapa de organizaciones de los sectores subalternos en lo que hace a su relación con la institucionalidad estatal. El hecho de que el gobierno recuperara y realizara, al menos parcialmente, reclamos sensibles y sustantivos que se venían planteando en los diferentes ámbitos de la sociedad civil (modificaciones en la Corte Suprema, avances en Derechos Humanos, cambios en la relación con los Organismos multilaterales de crédito, etc.) implicó un desafío para las diferentes organizaciones y movimientos que se reivindican confrontativos. En la década del noventa, las diferencias discurrían fundamentalmente por un orden metodológico (¿cómo llevar adelante la protesta?), pero el objeto de interpelación tendía a identificarse (el gobierno de Carlos Menem). Por el contrario, el kirchnerismo fundó un clivaje al interior de las organizaciones sociales en términos del apoyo o rechazo que las mismas

expresaron respecto de aquél, involucrando el apoyo y la incorporación de algunas de ellas al gobierno, así como su participación en diversas instancias de gestión estatal.

En este sentido, el propósito específico de esta investigación es analizar la relación que se establece entre los movimientos sociales y el Estado en la Argentina contemporánea. En términos generales, este trabajo apunta a dar cuenta de los modos en que el conflicto social es procesado por el Estado. Para ello, en primer lugar, se presentan algunos elementos teóricos que buscan establecer herramientas para comprender la naturaleza del Estado capitalista y la forma en que éste imprime una *lógica* al acontecer social, la cual funciona como un procedimiento de *institucionalización* del conflicto. Allí buscamos resaltar tanto la naturaleza de clase del Estado como el carácter *contradictorio* de los aparatos estatales, en tanto en ellos se plasman correlaciones de fuerzas sociales en conflicto. En este punto, atendemos también a la especificidad de las formaciones estatales latinoamericanas, a fin de precisar aristas particulares de la forma que este problema asume en la región. Luego, nos abocamos al caso argentino de los últimos años, donde abordamos las transformaciones en el mapa de movimientos piqueteros y seguimos particularmente la trayectoria de las organizaciones que han asumido una relación de apoyo o incorporación con el gobierno de Néstor Kirchner. En primer lugar, analizamos los modos en que dos movimientos que se reivindican parte de la tradición nacional-popular (el Movimiento Barrios de Pie y el Movimiento Evita), se incorporan al gobierno. Hacemos hincapié aquí en la dimensión simbólica de la relación que se establece, enfatizando en la *tradición* común que se construye, en desmedro de explicaciones ligadas con la noción de *cooptación*. Éstas, que ciertamente han dominado el escenario de las ciencias sociales (en particular de los análisis críticos) tienden a sacar conclusiones unilaterales y simplistas, por cuanto realizan un análisis *externo* (y, en cierto modo, moral) que no tiene en cuenta las determinaciones políticas y estratégicas de la acción de cada una de las organizaciones.

Una vez planteado el problema de la relación de afinidad, la investigación se adentra en la experiencia de gestión estatal del Movimiento Barrios de Pie, a fin de dar cuenta de los problemas políticos y burocráticos que se suscitan en el cruce entre la iniciativa de una organización popular y la lógica estatal. El propósito de esto es distinguir, al menos de manera analítica, los problemas ligados con la correlación de fuerzas que es posible imponer en el marco de los aparatos estatales de aquellos surgidos de la racionalidad burocrática que rige la actividad de dichos aparatos.

Finalmente, concluimos, a la luz de los problemas planteados, intentando contribuir al análisis del llamado “kirchnerismo” como fenómeno político contemporáneo, a la vez que planteamos algunas cuestiones relativas al problema de la tensión entre la autonomía de las organizaciones de los sectores subalternos y la institucionalidad estatal.

Summary

The retreat of neoliberal policies that had characterized Latin American governments during the nineties has led to significant reconfigurations in the relationships between state and civil society in the region. This has meant the emergence of a multiplicity of governments that, with different nuances and levels of radicalism, assumed critical positions regarding the neoliberal consensus of the past decade. In parallel, from the standpoint of civil society, various forms of collective action and organization of the subaltern sectors arose; they expressed different modes of resistance and

shaped the way in which social conflict unfolded in Latin America. In Argentina, one of the most salient social subjects was the *piquetero* movement, built on communitarian work in urban peripheral areas.

In this context, the purpose of this work is to analyze the relationship between the state and social conflict in Argentina during the period for the presidency of Néstor Kirchner (2003-2007). Just as in the rest of the region, in Argentina the proliferation of varied organizational experiences has certainly brought a breath of fresh air into emancipatory theories. The main and most salient examples, at least in terms of the debate that they enabled, were founded in what could be broadly be described as a strong critique of the Leninist tradition, in the context of the arise of new types of organization. Thus, the protest assumed a general "anti-state" character. Again, as in the subcontinent in general, a government would appear in Argentina upholding a speech that broke with the previous decade. After the crisis erupted in December 2001 and the interim presidency of Eduardo Duhalde, the government led by Néstor Kirchner brought a series of transformations that meant a shift in the general direction of government policies.

This implied the rearrangement of the map of subaltern sector organizations regarding their relationship with state institutions. The fact that the government recovered and performed, at least partially, sensitive and substantive demands that were being made in various fields of civil society (changes in the Supreme Court, progress in Human Rights, changing relationship with multilateral organizations such as the IMF, etc..) involved a challenge for the organizations and movements that claimed to be confrontational. During the nineties, the differences were mainly methodological concerning how to proceed with the protest, whereas the object of questioning tended to be the same (the government of Carlos Menem). By contrast, the new government inserted a cleavage within the social organizations in terms of whether to support or reject the government, which expressed itself through the incorporation of some of them to the government and their involvement in various levels of state administration.

In this sense, the specific purpose of this research is to analyze the relationship established between social movements and the state in contemporary Argentina. Overall, we aim to account for the ways in which social conflict is processed by the state. In order to go so, first, we shall display some theoretical concepts, seeking to establish theoretical tools to understand the nature of the capitalist state and the way it prints a *logic* to social events, which functions as a process of institutionalization of conflict. Here we highlight both the class nature of the state and the contradictory nature of the state apparatus, since the correlations of social forces in conflict are refracted in them. We also pay special attention to the specificity of the Latin American state formations, to identify the particular contours that this problem has in the region. Then, we focus on the case of Argentina in its recent years and look into the changes in the *piquetero* movement and particularly the path followed by the organizations that have assumed a supportive relationship or incorporation to the Néstor Kirchner administration. First, we analyze the ways in which two movements that claim to be part of the national-popular tradition (the Movimiento Barrios de Pie and Movimiento Evita), joined the government. We stress here the symbolic dimension of the established relationship, emphasizing the common *tradition* that is built, at the expense of explanations related to the notion of *cooptation*. These have certainly dominated the scene of social sciences (particularly for critical analysis) and tend to draw unilateral and simplistic conclusions, since they assume an *external* analysis (and in some ways, a moral

analysis) that does not take into account the political and strategic determinations of the action of these organizations.

Once considered the problem of the relationship of affinity, the research explores the experience of the Movimiento Barrios de Pie in state administration, in order to account for the political and bureaucratic problems that arose at the intersection of the initiative of a popular organization and the state logic. Our purpose is to distinguish, at least analytically, the problems associated with the correlation of forces that may be imposed under the state apparatus from those emerging of the bureaucratic rationality that governs the activities of the latter.

Finally, we conclude, in light of the problems posed , trying to contribute to the analysis of the "kirchnerismo" as a contemporary political phenomenon, while we also consider some issues regarding the tension between autonomy of subaltern organizations and State institutionality.

Índice

(0) Presentación –7

(1) Estado y conflicto social en el capitalismo –12

Estado y Sociedad –14 Sujetos políticos –16 (I) Estado capitalista: relación social antagónica y forma institucional contradictoria –17 (II) El Estado: homogeneización de lo heterogéneo –19 Institucionalización, o ¿Cómo el Estado pone el conflicto en sus propios términos?-21 El Estado en América Latina -24

(2) El Estado en la Argentina 2001-2007: Luchas populares, entre el neoliberalismo y el kirchnerismo –31

Izquierda tradicional: el pasado en copa nueva -36 Organizaciones de nuevo tipo: peligros y asimetrías –38 Cerca del gobierno: desafíos a la autonomía –39

(3) El Movimiento Barrios de Pie y el Movimiento Evita: formas del acercamiento –42

El Movimiento Barrios de Pie -42 El gobierno de Kirchner y el Movimiento Barrios de Pie –45 Gobierno en disputa-50 El Movimiento Evita: el gobierno produce sus propias bases -51 El Estado en disputa: estabilidad y cambio –56

(4) El conflicto social *en el* Estado: la gestión desde la perspectiva del MBP -58

La recuperación económica -59 La institucionalización en movimiento, los movimientos en la gestión -61

(5) Algunas reflexiones sobre el llamado “kirchnerismo” –79

El peronismo en el kirchnerismo: ¿vigencia de una identidad o farsa de la tragedia? –79 El gobierno como nudo de conflicto –83

(6) Conclusiones e interrogantes finales –87

Kirchnerismo y movimientos sociales –87 El problema de la autonomía –93

Bibliografía y referencias –99

Anexo: fuentes utilizadas -103

(0) Presentación

El ocaso de las políticas neoliberales en América Latina parece hoy tener su correlato en materia económica. Al surgimiento de una multiplicidad de gobiernos que –con diferentes niveles de radicalidad- se expresan críticamente respecto del paradigma que predominó en la región en la década del noventa, le correspondieron, en términos económicos, cambios difíciles de inscribir en un mismo horizonte en términos de “orientación”. En todo caso, tan sólo resulta claro expresar que no se trata de neoliberalismo, pero son muy disímiles y desiguales las experiencias actuales como para postular la existencia de un paradigma que haya sucedido al antes incuestionable modelo pergeñado en los grandes tanques de pensamiento del Centro de Occidente.

Pero la impredecible crisis que estalla en el núcleo mismo de la economía mundial permite pensar con aún más fuerza que la declinación del neoliberalismo es definitiva. Sin embargo, ello no significa un retorno vital de las teorías del derrumbe en sus múltiples variantes, sino más bien la apertura de un gran interrogante sobre los modos en que se está transformando y reconstituyendo el sistema capitalista. Y en ese punto debemos pensar en un elemento singularmente relevante que permite vislumbrar alternativas emancipatorias a la crisis actual y, en términos más generales, al capitalismo como modo de existencia de la sociedad humana: la capacidad de los sectores subalternos de producir una transformación radical de las relaciones de fuerza en virtud de un proyecto autónomo respecto de las clases dominantes y el Estado.

No se trata, naturalmente, de algo sencillo de comprender e identificar en el complejo devenir de los procesos históricos. Aún así, hoy podríamos decir sin temor a exagerar que América Latina es un gran “laboratorio” donde, en las últimas décadas –en oposición, justamente, a la hegemonía neoliberal en la región-, ha surgido una multiplicidad de experiencias de organización que ciertamente han aportado aires renovados a las matrices de pensamiento emancipatorio. Los primeros y más salientes ejemplos, al menos en términos de las reflexiones que suscitaron, anclaron, en términos generales, en una fuerte crítica a la tradición leninista, en el marco del auge de formas de organización de nuevo tipo, que hacían énfasis en prácticas políticas alternativas a la forma partido y sus diferentes dimensiones (centralismo, toma del poder, etc.). En este marco, se revalorizó el trabajo territorial -local- como ámbito en tensión con las

relaciones sociales capitalistas. De algún modo, los noventa podrían caracterizarse -en términos de formas de resistencia- como tendencialmente anti-estatales, quizá con su epicentro en la visibilización del zapatismo y su repercusión en el resto de América Latina. El concepto de *autonomía* como capacidad de hacer propia (un tiempo y un lenguaje propios y antagónicos a los tiempos y lenguajes del Estado) fue una de las claves de lectura del ciclo de luchas de la década.

De este modo, hacia finales de milenio se constituyó lo que Bensaïd (2007) denominó “ilusión social” o “momento utópico” de los movimientos sociales, consistente en una idea de autosuficiencia de la práctica específica de los movimientos y, en tal sentido, un rechazo a la idea de articulación política. Ahora bien, para el comienzo de la presente década, empiezan a aparecer los gobiernos que genéricamente podríamos denominar “post-neoliberales”. Sus matices no radican solamente en su grado de confrontación con la prédica neoliberal sino también con los modos en que se articulan con los movimientos sociales que, en buena medida, protagonizaron las luchas de los noventa. Sostenemos aquí que la complejidad del “laboratorio” latinoamericano está dada porque aquello que parece, a simple vista, antagónico o cuanto menos contradictorio, es en realidad parte constitutiva y constituyente del mismo proceso: el surgimiento y la radicalidad de las diferentes expresiones de resistencia en la década pasada, con su semblante “anti-estatista”, conforman, *junto a la* emergencia de gobiernos “progresistas”, un *espíritu* crítico del neoliberalismo en la región. Todavía más, debemos decir que el cuadro gubernamental latinoamericano actual es inexplicable sin la activación autoorganizada de los sectores subalternos en los noventa. Pero allí empieza la complejidad de la coyuntura: ¿De qué modo se transforman las aspiraciones populares cuando son “interpretadas” desde el Estado? ¿Por qué el Estado, lejos de reducir su influencia, asume centralidad en la condensación de las luchas sociales latinoamericanas? ¿Cómo pensar la emancipación en este contexto? ¿De qué manera se expresa hoy el viejo problema de la autonomía organizativa y política de los sectores subalternos?

En virtud de estos problemas, la presente es una investigación sobre el Estado, no tanto sobre los movimientos sociales. Específicamente, es un intento de analizar los modos en que el Estado “procesa” el conflicto social en las sociedades contemporáneas, con particular atención en América Latina, vale decir, en la forma que asume ese procesamiento en función de la singularidad del Estado y del conflicto social en la región.

De esta manera, los movimientos son “pre-textos” (en el mejor sentido posible de la palabra) para dar cuenta de lo que consideraremos la *lógica* estatal: un lenguaje que normativiza

las relaciones sociales y que se expresa de diferentes modos de acuerdo a cómo se inserte en la historia específica de un país y sus luchas. Elegimos los movimientos sociales porque, en el caso argentino, son uno de los emergentes más significativos de las luchas populares de los últimos años, desde los tiempos de incontestable hegemonía neoliberal hasta nuestros días, aunque hoy cada vez más comparten el escenario con expresiones de la más diversa índole. Asimismo, la elección de los movimientos radica en que ellos fueron también expresión de un fuerte cuestionamiento a la simetría que las organizaciones históricas de los sectores subalternos tendían a establecer con el Estado. Pero la coyuntura política resultó compleja y hasta paradójica para ese cuestionamiento. No sólo porque algunos movimientos se incorporaron a la gestión estatal, sino porque los gobiernos alzaron una voz estatal que recuperaba las banderas de los movimientos. Todo lo cual supone un enorme desafío a las posiciones “anti-estatales”. Los alcances de ese desafío, los modos de afrontarlo, los problemas que suscita en las organizaciones y la rediscusión de las estrategias a partir del nuevo escenario, son las cuestiones de orden político a las cuales este trabajo intenta hacer su aporte.

Cuando planteamos que analizaremos una *lógica*, intentamos despojarnos de hacer un juicio valorativo respecto de las posiciones políticas adoptadas por los movimientos afines al gobierno en oposición a los que se mantuvieron “a distancia” del mismo. No por un afán aséptico sino porque lo que pretendemos analizar no es tanto la opción política por apoyar o rechazar un gobierno como el modo en que el Estado se erige, en última instancia, como un proceso de canalización del conflicto social, dando cuenta de las bases sobre las cuales lo hace. En este sentido, el gobierno constituye tan sólo una parte de los aparatos estatales, con un direccionamiento político sobre ellos que lejos está de ser pleno. En todo caso, las consecuencias políticas en términos de fragmentación del campo popular sí serán tenidas en cuenta y, fundamentalmente, abordaremos el problema de la *autonomía* organizativa y política de los sectores subalternos como una cuestión a re-pensar a la luz del contexto actual.

En primer lugar, el trabajo plantea de manera exhaustiva el problema del Estado capitalista y, en particular, su relación con el conflicto social. Con eso pretendemos explicar la mencionada *lógica* estatal en términos de *institucionalización* del conflicto, o, dicho de otro modo, de su homogeneización bajo los parámetros estatales –los cuales se establecen en función de una historia singular del caso que se analice, de allí la importancia que le otorgamos a la especificidad del Estado en América Latina-. Parámetros que de todos modos son contradictorios

y atraviesan a la sociedad en su conjunto, por lo cual ninguna fuerza social puede “optar” por no estar en relación con el Estado y, al mismo tiempo, la relación establecida debe ser puesta en tensión de manera permanente para no ser diluido en la lógica mencionada. Así, el concepto de *autonomía*, adelantamos, opera no como aislamiento sino como *garantía* de sostenimiento de un proyecto propio de los sectores subalternos. Por todo esto, consideramos el par autonomía-institucionalidad como el eje que estructura los procesos políticos contemporáneos en Argentina y América Latina.

Luego, realizamos un abordaje histórico de la relación entre Estado y conflicto social en la Argentina, teniendo en cuenta el devenir de la resistencia desde los noventa (donde las diferencias al interior del campo popular respecto del gobierno y del Estado discurrían nomás por “cuestiones de método”) hasta la aparición del “kirchnerismo”, cuando se funda un clivaje dentro/fuera del aparato estatal como eje que fragmenta a buena parte de las organizaciones de los sectores subalternos. En este caso, el 2001 será tomado como una crisis de la lógica estatal en la medida en que se pone en tela de juicio su capacidad de regular el conflicto social y de ser el espacio *privilegiado* de gestión de la sociedad (reforzando, en este sentido, el crecimiento de expresiones “anti-estatales” al interior del campo popular). A la inversa, la hegemonía kirchnerista puede pensarse como la recomposición del lugar del Estado en el imaginario social. Una recomposición contradictoria y que revela huellas del conflicto que, veremos, son los espacios donde se estructurará un nuevo mapa de organizaciones populares en función de su posición al respecto.

Posteriormente, nos abocaremos al análisis de caso de un movimiento que, proviniendo del ala más radical de la protesta social –y callejera- en la década de los noventa, apoyó al proyecto gobernante de Néstor Kirchner: el Movimiento Barrios de Pie. Su incorporación al gobierno será analizada en una perspectiva comparativa con otro de los movimientos que constituyeron una importante base de apoyo popular del gobierno en cuestión: el Movimiento Evita. Su diferencia mayor, entre otras, radica en que el primero tiene una trayectoria importante dentro de la resistencia (se remonta a la corriente Patria Libre, protagonista de innumerables manifestaciones anti-neoliberales durante los noventa) y el segundo es más bien un producto de los tiempos del kirchnerismo. Sus estrategias son diferentes y su noción de autonomía, también. A partir de las cuestiones que se abren con el proceso kirchnerista, el objetivo de analizar estos casos es complejizar el problema de la relación entre movimientos sociales y Estado, a partir de

comprender que la afinidad radica más en tradiciones compartidas y espacios simbólicos que operan de manera compatible con los proyectos de las organizaciones que en “compra-venta de voluntades”, explicación que, más o menos maquillada, ha resultado confortable para buena parte de los análisis de izquierda del proceso post-2001, siempre bajo la poco explicativa figura de la “cooptación”. En este sentido, podríamos decir –admitir- que esta investigación comenzó siendo un estudio sobre la cooptación, y terminó siendo un argumento contra el concepto de cooptación tal como éste fue pensado en dicho contexto. Cabe aclarar que la presente investigación abarca el período presidencial de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007. Aún cuando hagamos referencia a momentos previos o posteriores –sobre todo en virtud de la trayectoria de los movimientos analizados-, el núcleo de nuestro problema es abordado en el mencionado recorte temporal.

Explicado el “acercamiento”, el siguiente capítulo da cuenta del núcleo del problema planteado. Si el anterior remite más bien a la relación entre los movimientos y el gobierno, en este apuntaremos a las consecuencias que ella funda en términos del vínculo con el Estado. Las experiencias de gestión estatal del Movimiento Barrios de Pie nos permitirán analizar específicamente el choque entre la *lógica* estatal y las voluntades transformadoras de una organización popular. Serán atendidas, en tal sentido, tanto la disputa política al interior de los aparatos estatales, como las dificultades derivadas de una racionalidad burocrática inherente a la administración pública.

Hacia las conclusiones, el trabajo avanza con algunas consideraciones críticas sobre el kirchnerismo a partir de los problemas planteados intentando contribuir a la comprensión de este fenómeno político, teniendo en cuenta también la escasez de análisis rigurosos sobre el mismo. Al mismo tiempo, introducimos –a modo de cierre- un balance de la relación analizada y una discusión sobre los modos de comprender, a la luz de la complejidad actual (no sólo coyuntural sino también la forma que ha asumido precisamente la relación entre Estado y conflicto social), el viejo problema de la autonomía.

(1) Estado y conflicto social en el capitalismo

Como marco general, este trabajo parte de la concepción clásica de Estado al interior del marxismo, presente en Engels (1970) y Lenin (1974)¹, como aparato que surge de la sociedad civil allí donde conviven clases con intereses irreconciliables, en pos de reconducir la violencia presente en ella, y permitir la propia subsistencia del tejido social *qua* capitalista. Amortiguar el conflicto no implica neutralidad sino cierta distancia de las clases en pugna. El propio Engels define al Estado como “capitalista colectivo ideal”, dando cuenta tanto de su carácter burgués como de su racionalidad diferenciada respecto de la lógica del capitalista individual. En un sentido amplio –soslayando sus formas históricas–, su rol es esencialmente conservador, se trata de mantener el *estado* de las cosas, de preservar los límites externos de la sociedad. En una sociedad sustentada en la dominación de clase, esto implica necesariamente una toma de posición, por la persistencia de dicha relación en el tiempo. Vale decir, el Estado vela por la reproducción de ambos polos de la relación capital-trabajo, pero en cuanto tales (el trabajo como *fuerza de trabajo* subsumida al dominio del capital), aún cuando esto pueda ir en contra de intereses inmediatos de la clase dominante². De esta manera, el Estado se constituye como una dimensión central de las relaciones sociales capitalistas, como la instancia propiamente política que asegura las bases para la reproducción de la sociedad. Asimismo, esta relación social se cristaliza en aparatos de Estado que expresan una correlación de fuerzas en el seno de la sociedad, por lo que no deben ser percibidos como un ente monolítico sino como un campo de disputa (Thwaites Rey, 2005)³. Una disputa que sin dudas es asimétrica, ya que, por lo dicho, no se trata de una instancia neutral a ser “ocupada”, sino de una dimensión de la sociedad capitalista que, por ello, es parte del problema de la dominación burguesa. Esta complejidad es central a la hora de desarrollar estrategias políticas que trasciendan lecturas simplistas de lo real, por lo que

¹ Citamos a Engels y a Lenin casi a modo de provocación por su *impertinencia* para los análisis académicos del Estado. Sin lugar a dudas los desarrollos más fructíferos para pensar críticamente el Estado –como pretendemos hacerlo aquí– están dispersos en múltiples obras de Marx. Para las aristas que necesitamos tocar en esta parte del trabajo, estos autores sistematizan y amplían en un sentido productivo lo postulado por Marx respecto del Estado.

² El análisis de Marx (2000), presente en el capítulo VIII del tomo I de *El Capital*, respecto de las leyes laborales es demostrativo de esta concepción. Allí el Estado, en pos de resguardar las condiciones generales de la acumulación atenta contra los intereses inmediatos de los burgueses individuales por extender la jornada de trabajo a fin de extraer una mayor plusvalía absoluta.

³ Esta cuestión puede graficarse con la desarticulación de la faceta bienestarista del Estado. En este caso, la izquierda aparece defendiendo aparatos estatales (seguridad social, etc.) que la derecha intenta desarticular. Comprendiendo de manera dialéctica al Estado, esta aparente paradoja no es tal.

constituye, en última instancia, el campo donde se inscriben las luchas sociales y, por ende, el objeto de nuestro trabajo.

De este modo, la distancia entre el carácter de garante de una relación y la identificación inmediata con una clase es de tamaño importancia para el tema que nos ocupa. En ese espacio se desarrollan las respuestas del Estado a una sociedad en permanente conflicto. Es allí donde aparecen las huellas de esa violencia que le dio lugar pero que debe ser negada para que el orden pueda postularse como tal.

¿Cuál es la relación del Estado con su violento origen? Antes, ¿en qué sentido puede hablarse de origen y no de permanente constitución o, más bien, institución de un orden? Esta es una primera cuestión crucial, al igual que con la tan mentada “acumulación originaria”⁴ en tanto separación del trabajador respecto de los medios de producción, el nacimiento del Estado no debe pensarse como un hecho concluido y enterrado por la historia, sino como un permanente ejercicio de dominación, en el que se define la propia forma de existencia de una sociedad. De esta manera, lo más importante de la concepción engelsiana no es tanto la ubicación del “primer” Estado en la lejana disolución de las *gens* sino la intensidad con la que es definido el vínculo intrínseco entre violencia y Estado, en la idea de la violencia como fundadora de juridicidad (desarrollaremos esto luego). En Marx (1967) esto también aparece cuando el Estado es definido como “síntesis de la sociedad burguesa bajo la forma de Estado”. Esto implicaría, en una primera lectura, un límite fundante en la relación que los sectores subalternos pueden establecer con aquél en su búsqueda emancipatoria.

En este punto cabe adelantar que la compleja y contradictoria relación entre Estado y protesta social (o, en un sentido más amplio, diversas expresiones de organización de los sectores populares) oscila, a grandes rasgos, entre la cooptación⁵ y la represión, en base al nivel de

⁴ Presentamos el ejemplo de la “acumulación originaria”, pues la interpretación de ese proceso tiene consecuencias políticas de primer orden a la hora de concebir el conflicto en la sociedad capitalista. Una noción meramente histórica supondría que la separación entre trabajadores y medios de producción es un hecho ya consumado (por ende un punto de partida), mientras que entenderla como un proceso permanente –la necesidad de producir y reforzar constantemente dicha separación- pone a la orden del día la violencia inscrita en propio desarrollo del capitalismo. Al mismo tiempo, procesos actuales como el despojo de derechos colectivos y bienes comunes, supone la reedición contemporánea de la “acumulación originaria”. Respecto de este tema pueden consultarse, entre otras fuentes, textos de David Harvey (2006) y de Massimo de Angelis (1999).

⁵ Adelantamos aquí que descartamos una noción vulgar de cooptación, que resulta un tanto maniquea para procesos que parecen tener un arraigo más profundo que la mera “seducción”. Este concepto sugeriría un elemento activo y uno pasivo, uno que coopta y otro que es cooptado. De este modo, supone una subestimación sobre este último, ya que no considera las razones inmanentes de su acción sino sólo en relación con el poder del otro. Proponemos aquí una idea más compleja de cooptación, no ya de un movimiento o actor particular sino del conflicto en términos

organización de los sectores subalternos y a las capacidades materiales y simbólicas del Estado de afrontar determinadas demandas que le son presentadas. En este sentido, la represión del conflicto social, que puede contener diversas estrategias, es también indicativa de una correlación de fuerzas determinada y, del mismo modo que la cooptación, de la forma en que un gobierno expresa una relación estatal con el conflicto social. De acuerdo con esto, afirmaremos que tanto la cooptación como la represión, constituyen formas de institucionalización del conflicto social, ya que dan cuenta del modo en que una demanda sectorial es canalizada en el andamiaje estatal, ya sea mediante su inclusión o su forzoso silenciamiento. Consideramos que en la forma en que estos dos mecanismos son desarrollados (cómo y a quién son dirigidos) y balanceados entre sí, descansa una importante medida de la relación que se establece entre el Estado y las diferentes expresiones de protesta social en un determinado momento histórico.

Una serie de reflexiones previas nos conducirán hacia los problemas aquí planteados, de manera de delinear supuestos teóricos que puedan sustentar su presentación.

Estado y Sociedad

La existencia del Estado como entidad diferenciada de la sociedad es posible en la medida en que el conflicto es parte de la misma. La violencia supone la existencia de fuerzas enfrentadas, el Estado supone la inscripción jurídica de dicho enfrentamiento. La política, de acuerdo a la fórmula en que Foucault (1992) invierte a Clausewitz, es la continuación de la guerra por otros medios. Este proceso (el nacimiento de la política como instancia específica) vuelve tolerable y legítima una violencia ya inscripta en lo social. Benjamin (1995) distingue entre la violencia

generales. Tal es el modo en que puede pensarse a partir del conocido trabajo de Oscar Oszlak *La Formación del Estado argentino* (1982). Allí, es condición para el nacimiento del Estado (hoy podríamos decir, para su constante reafirmación) la institucionalización de un orden, esto es, la capacidad de internalizar el conflicto social, apareciendo como única autoridad de la vida social organizada. Aunque pensados para los orígenes de la formación estatal nacional, estos desarrollos valen también para nuestro presente, ya que dan cuenta de invariantes en la relación Estado - Sociedad que en momentos de crisis y reordenamiento de los límites entre ambos, como estos últimos años, alcanzan una notoria evidencia. En este orden se inscribe la llamada “dimensión cooptativa” en la conformación del Estado, consistente en la captación de sectores dominantes del interior del país que coadyuvó a la consolidación del mismo. Algo de eso puede pensarse en nuestra actualidad. La captación de algunos movimientos piqueteros es la forma que asume la cooptación del conflicto social hoy. Philip Selznick (1997), un poco conocido estudioso norteamericano de la administración pública, define a la cooptación como el proceso de absorber nuevos elementos “en el liderazgo o en la política” como medio de evitar amenazas a la estabilidad o existencia del sistema. Algo semejante es lo que se da actualmente entre el gobierno de Kirchner y los movimientos piqueteros que, a su vez, produce modificaciones en el Estado en su conjunto, ya que modifica la fisonomía, el personal y el tipo de acción de sus aparatos.

históricamente reconocida como poder (el Estado) y la violencia no aceptada, aquella capaz de transformar, de producir nueva juridicidad. De esta manera, el Estado sanciona la violencia que no domina porque teme su carácter de creadora de derecho y fundadora de un potencial orden diferente. Buena parte de la teoría política moderna, entonces, es un “largo y prolijo ocultamiento de esta violencia como fundación y sostén del poder político” (Gruner, 1997: 38). Así, la violencia que es negada retorna concentrada en un “sujeto” específico que es el Estado.

La relación entre violencia social y Estado no es un pacto cerrado en el origen, sino más bien una permanente disputa. Intentaremos demostrar que esa disputa, por parte del Estado, consiste en la inclusión del conflicto social dentro de sus parámetros, de manera de evitar que aquél lo exceda. Por su parte, la lucha de los sectores subalternos implica un intento por trascender dicha forma y fundar nuevos modos de sociabilidad.

En el Estado moderno, la concentración de la violencia no es el único elemento que lo enfrenta a la sociedad como un órgano superior a ella. O, dicho de otra manera, aquella toma también la forma de instituciones con diversas funciones que hacen del espacio estatal el principal terreno de resolución de los conflictos de la sociedad civil que, de acuerdo a lo antes dicho, se tenderán a dirimir (salvo en casos de ruptura de la tensión, esto es, de revolución) siempre en un sentido de perpetuación de la sociedad y el Estado donde se producen. De este modo, la idea de que en el plano estatal se resuelven los problemas *generales* (esto es, abstraídos de su carácter de clase) de la sociedad, produce la apariencia de que sus instituciones se encuentran desvinculadas de determinaciones de clase.

Si el Estado presenta un carácter *general* frente a las *particularidades* de la Sociedad Civil, no puede desvincularse de que su soberanía es siempre representación de ésta. Sin embargo, no se trata de una representación transparente sino más bien de un proceso de alienación de la soberanía popular (Vega, 1984) y, por consiguiente, de una permanente lucha de las clases subalternas por la recuperación de la misma. Intentaremos ahora comprender de qué manera se constituye esta disputa.

Sujetos políticos

¿Cuál es el proceso de constitución de un sujeto político en una sociedad en conflicto? Partimos de que es -por su naturaleza- contradictorio, ya que la subjetivación implica la sumisión a una ley que la precede (la clase obrera se subjetiva en tanto explotada) pero al mismo tiempo el sujeto que surge cuenta, como tal, con posibilidades de transformación del orden existente. En el caso de la sociedad capitalista, esa ley es *el capital*, entendido como una relación social de dominio que otorga roles que la reproducen como tal. Ahora bien, en el orden político, este dominio está mediado por el Estado, que aparecerá como un conjunto de aparatos y normas a través de las cuales los sujetos son integrados y diferenciados en un mismo movimiento. De esta manera, éste aparece en una doble dimensión, como un órgano *superior* a la sociedad, con capacidad de dominio sobre ella y como un *orden* presente al interior de ella. Esto implica, a nuestros efectos, que el Estado está siempre presente en el conflicto social. Actúa para con él de manera visible pero también de manera imperceptible, siendo expresión institucional del mismo. Entonces, los sujetos sociales no “politizan” sus enfrentamientos sólo cuando se relacionan directamente con la disputa por el poder de Estado, sino que son expresiones ya políticas que reproducen por medio de su existencia un orden eminentemente conflictivo.

En este sentido, la relación entre el Estado y un movimiento social (o, en última instancia, cualquier actor que lo interpele) no debe concebirse en términos de exterioridad, sino como partes integrantes de la política como escenario de conflicto que se constituyen y transforman allí. Esa interacción no es simétrica, claro está, ni el carácter relacional atenúa las diferencias de poder, pero lo que aquí intentamos subrayar es la necesidad de pensar la relación entre conflicto social (en cualquier sentido que se lo tome) y Estado siempre como ya existente, y nunca como una opción.

En esta dirección, Lechner (1984) propone pensar a la sociedad, el sujeto, el Estado y la política como momentos de un mismo movimiento. Ese movimiento, agregamos, es el capital como relación de dominio, esto es, como frontera o límite al interior del cual estas categorías se articulan y sólo de manera ocasional rebasan. La distinción entre estos momentos en términos de sus peculiaridades es central para el tema de esta investigación. Los sujetos sociales se constituyen en tanto particulares. Esto implica la existencia de un otro como diferente (u opuesto,

términos dependientes de los grados de polarización y/o enfrentamiento al interior de una sociedad) y el alcance y delimitación de objetivos *propios* distintos de los *ajenos*. Aquí cabe pensar una diferenciación central entre la política y el Estado. La primera correspondería a una disputa por hacer prevalecer los mencionados objetivos. Sería, en tal caso, un momento inherente a la existencia de conflicto, aunque no necesariamente en términos de clases con intereses objetivamente contrapuestos. El Estado, por su parte, se constituye como generalidad. Esto no implica neutralidad en el plano de la política sino más bien una “síntesis” de aquel, una preservación de los términos en los que es planteado (la tendencia a la perpetuación de los sujetos que componen la disputa). Esta síntesis, consideramos, tiene como expresión práctica el movimiento que más adelante denominaremos *institucionalización*.

De manera que el Estado se erige como una suerte de *escenario* del conflicto social. Las peculiaridades de tal escenario son las que pretendemos analizar aquí. Pues no se trata de un mero lugar donde se desarrolla el conflicto, sino de un espacio determinante de la pugna que allí acontece. Establece límites para su extensión, tiempos para su procesamiento y el lenguaje en que se expresa. Así arribamos a lo que podríamos denominar la dimensión *simbólica* del Estado. Esta no es una instancia diferenciada de la dimensión conflictiva -o violenta- por *esencia*, sino que es más bien un modo de expresión de ella. Consiste fundamentalmente en la capacidad de la institucionalidad estatal de proponer una forma de procesamiento determinada del conflicto, acorde con su propia textura. Tal capacidad es la que denominamos *institucionalización*, pero antes de explicarla más detenidamente, es necesario plantear sucintamente (I) por qué el Estado aparece del modo que lo hace y (II) qué implica la institucionalización en términos generales, vale decir, cuál es su objeto y qué características tiene su funcionamiento.

(I) Estado capitalista: relación social antagónica y forma institucional contradictoria.

En primer lugar, es importante no emprender un análisis del Estado concibiéndolo como una entidad de naturaleza diferente a la sociedad en su conjunto. Por el contrario, el punto de partida debe ser su restitución en la totalidad social. Pues bien, si se trata de restituirlo, debemos dilucidar entonces la razón por la cual esto es necesario, vale decir: ¿qué características tiene la sociedad capitalista que hacen que el Estado aparezca como una instancia diferenciada de la sociedad civil?

Son múltiples los abordajes emprendidos –a partir de la obra de Marx- para dar cuenta de ello (ver, entre otros, Poulantzas, 1991; Holloway, 1994a; O’Donnell, 1984; Thwaites Rey, 2005). El punto de partida es el análisis genético de las relaciones sociales capitalistas, vale decir, la pregunta por el modo en que se constituyeron tal cual se nos presentan. En ese sentido, lo distintivo del capitalismo es que es la primera sociedad históricamente conocida donde las relaciones de dominación no son directas. Esto implica que no son relaciones inmediatas de sujeción, sino mediadas, en este caso, por el intercambio de mercancías. La dominación, al igual que en sociedades anteriores, está sustentada en la apropiación de trabajo ajeno, pero por primera vez no existe coacción al interior del proceso de trabajo para llevar adelante dicho fin.

En el capitalismo, el intercambio que se da en el plano del mercado (la venta de fuerza de trabajo) es lo que habilita la posibilidad de que la explotación acontezca en el ámbito de la producción. Ahora bien, el prerequisite para la producción capitalista es la existencia de hombres libres (vale decir, sin lazos de sujeción directa y sin medios para producir, de ahí su carácter de “doblemente libres”, tal como lo estableciera Marx) que se vean obligados a venderse como fuerza de trabajo en el mercado. Para ello es necesario un disciplinamiento tanto en un sentido “originario” (la separación entre productores y medios de producción, al estilo del célebre capítulo XXIV del primer tomo de *El Capital*) como de manera permanente (tal separación debe ser sostenida; en otros términos, debe asegurarse que los hombres acepten su condición de fuerza de trabajo y no pretendan excederla). De manera que el hecho de que no haya coacción al interior del proceso de trabajo no significa que la sociedad esté desprovista de dominación. Por el contrario, la violencia es concentrada en una instancia específica que aparece como separada del momento de la producción, pero que es tanto su requisito como su consecuencia, vale decir, es co-constitutivo. Tal instancia es el Estado. Llegados a este punto, podemos definir a éste como *un aspecto de las relaciones sociales (de dominación) capitalistas*.

Toda relación de dominación es, por definición, una relación de antagonismo y, por ende, una relación inestable, atada al devenir de la propia confrontación. Por ende, el Estado es también una relación contradictoria. Para aclarar esto es necesario plantear la cuestión en términos menos abstractos. El Estado en tanto relación social aparece de manera concreta bajo la forma de *instituciones* (Aparato de Estado), las cuales dan cuenta del carácter contradictorio de la misma. Las instituciones estatales son cristalizaciones materiales de las relaciones de fuerza a nivel social (Poulantzas, 1991). Vale decir, ellas expresan -institucionalmente, esto es, de manera refractaria y

bajo una lógica determinada: *institucional*- un conflicto que las excede. El Estado aparece como una entidad exterior a la sociedad porque estas instituciones toman una forma propia, objetiva (O'Donnell, 1984), son un producto de una relación contradictoria que a la vez la niega como tal, en la medida en que se sustentan sobre la abstracción de las desigualdades reales y la producción de una igualdad formal. La abstracción es, de este modo, una abstracción real o, en otras palabras, una ilusión verdadera: no es un problema de la conciencia de los sujetos -ver o no ver al Estado por encima de la sociedad-, sino el modo en que se configura la realidad en la sociedad capitalista -el Estado aparece por encima de la sociedad-.

(II) *El Estado: homogeneización de lo heterogéneo*

Según Bourdieu (1993:1): "...uno de los poderes mayores del Estado, [es] el de producir y de imponer las categorías de pensamiento que aplicamos espontáneamente a cualquier cosa del mundo y al Estado mismo". Alrededor de esta sentencia puede construirse el sentido del Estado como *poder simbólico*: su capacidad de reglamentar y dirigir la actividad social, vale decir de "estatizarla". Se produce de este modo una *manera de pensar* que determina los límites del contenido mismo del pensamiento (lo cual vale también para la práctica social en general). Lo que está por fuera, parece impensable, el Estado instituye un arbitrario cultural que termina por naturalizarse.

En el apartado anterior, reseñamos brevemente las razones -de orden "material", si puede establecerse tan sencillamente tal distinción- por las cuales el Estado *aparece* separado y por encima de la sociedad. Pues bien, en éste pretendemos dar cuenta de la fuerza simbólica que produce y reproduce tal separación. Si, como decía Marx, el Estado es "síntesis de la sociedad civil", lo es en la medida en que logra articular la heterogeneidad de ésta en un lenguaje común, esto es, en tanto tiene capacidad de homogeneizar simbólicamente una realidad caótica (con el fin de perpetuar la dominación, claro está, pero aquí no analizamos tanto el fin como los medios y mecanismos de la dominación) que involucra voces disonantes con el orden existente.

En este sentido, Bourdieu nos recuerda (1993:3) que la fuerza simbólica del Estado está dada tanto en su estructura y mecanismos (su "objetividad"), como en su capacidad para producir categorías de percepción y pensamiento (su reaparición en el orden "subjetivo"). El hecho de que nuestro propio pensamiento sea *estatal* es una razón de peso para que su objetividad aparezca

como un orden natural, es decir, como el único modo posible de resolución de conflictos en el orden social. De este modo, se instituye un proceso de *homogeneización* de la sociedad, un procedimiento que abona a tornar previsibles sus comportamientos: no casualmente a partir de ello nacen las ciencias sociales como tales, cuestión ampliamente trabajada por Foucault. Y precisamente el concepto de *gubernamentalidad* que este autor propone es también un modo de contribuir a la comprensión del problema aquí tratado. Abstrayéndonos de la constitución histórica del Estado (de su diferencia con la soberanía y otros modos del poder), nos detenemos en su característica central: “el fin del gobierno está en las cosas que dirige, en buscar la perfección, en la intensificación de los procesos que dirige, y en los instrumentos de gobierno que en vez de ser leyes serán tácticas multiformes” (1991:19): nace la “estadística” en el sentido etimológico de la palabra: “ciencia del Estado”.

Aunque Foucault no reduce la gubernamentalidad al Estado, sino que pone a éste como parte del entramado de aquella, esto no contradice el sentido último de la *lógica* que estamos analizando: la gubernamentalidad no es otra cosa que la homogeneización de una *población* sobre la base de múltiples mecanismos. El horizonte común de éstos es la *regulación* de la actividad social. Toda regulación supone una homogeneización, vale decir, la producción de un marco que contenga las acciones que se conciben como posibles, en última instancia la demarcación simbólica de aquello que tiene *sentido* (que puede ser pensado), y aquello que no. La *lógica* estatal puede ser pensada de este modo, como un proceso que establece los “bordes” de la actividad social: los caminos que ella puede tomar y, por ende, los que le están vedados.

En tal dirección se constituye lo que Bourdieu califica como un capital “propriadamente estatal”, producto de la concentración histórica de diferentes especies de capital. No es parte del objeto de este trabajo detenernos en ello, sino más bien en lo que implicó en términos de la constitución de una universalidad capaz de presentarse como superación de toda particularidad y, a partir de ello, con potestad para estructurar prácticas y representaciones sociales:

En nuestras sociedades, el Estado contribuye en una parte determinante a la producción y a la representación de los instrumentos de construcción de la realidad social. En tanto estructura organizacional e instancia reguladora de las prácticas ejerce permanentemente una acción formadora de disposiciones durables a través de todas las violencias y las disciplinas corporales y mentales que impone universalmente al conjunto de agentes (Bourdieu, 1993:4)

Institucionalización, o ¿Cómo el Estado pone el conflicto en sus propios términos?

Una vez establecidas algunas delimitaciones de la relación Estado-Conflicto Social en el modo de producción capitalista, y planteados los términos generales en los cuales el Estado *uniformiza* la sociedad, el problema de la institucionalización remite a las formas concretas que ésta asume. En este apartado intentaremos desarrollar el mencionado proceso estatal de mediación del conflicto social, dando cuenta de algunos de sus fundamentos y mecanismos centrales.

Denominaremos a estos mecanismos *formas de tratamiento*, ya que, nos parece, implican centralmente un proceso que puede dividirse (analíticamente, aunque no en el plano de lo observable) en una entrada, un tránsito y una salida, de manera que un problema presentado al Estado es, más allá de su parcial solución, siempre reconfigurado, tratado de forma tal que sus aristas más incompatibles con el orden existente sean modificadas o, en su defecto, amputadas.

El fundamento de la institucionalización lo debemos encontrar en las funciones inherentes a los aparatos de Estado. Si antes recorrimos consideraciones generales en torno al Estado como relación social constitutiva de la sociedad capitalista, aquí intentaremos trazar la especificidad de los aparatos de Estado en lo que al conflicto social refiere.

En primer lugar podemos afirmar que los aparatos de Estado cuentan con un rol preponderante en la reproducción de las relaciones sociales capitalistas (Althusser, 1997). En términos más concretos, sus funciones se orientan hacia la unificación del bloque dominante y la desorganización y división de las clases dominantes “polarizándolas hacia el bloque en el poder y cortocircuitando sus organizaciones políticas propias” (Poulantzas, 1991: 169). Esta actividad propia del andamiaje estatal se sustenta en la manera en que se enfrenta a la sociedad civil. La individualización propia de las relaciones de producción capitalistas (la concepción del hombre como elemento aislado, apéndice de la maquinaria en el proceso productivo) es el elemento en donde se enraíza la materialidad del Estado. Sus aparatos son moldeados para ejercer el poder sobre un conjunto así constituido, por lo que su marco no permite reconocer otras formas. De esta manera, cumple una función permanente de fraccionamiento de lo social. Desarrollaremos luego algunos conceptos sobre la administración pública que pueden leerse como la individualización en movimiento, es decir, practicada cotidianamente por el Estado.

Therborn (1997) plantea este problema en términos de *canalización*. El carácter de clase inscripto en los aparatos de Estado imprime una forma de mediación (no arbitraje sino ejercicio del poder de clase *a través* del Estado) del conflicto por medio de la cual el Estado tiende a normalizar las peticiones y protestas de las clases dominadas. Existen múltiples formas de mediación relacionadas con la capacidad del Estado de centralizar el poder de clase y, al mismo tiempo, de totalizar a las clases en su seno. A los efectos de nuestro trabajo, el desplazamiento o canalización aparece como la forma clave de lo que denominamos *institucionalización*. Se trata de la canalización de las demandas populares a través de instituciones y procesos que no provoquen rupturas en el orden dominante. De esta manera, se encuentran canales seguros para que las contradicciones no debiliten el dominio.

La forma propia de canalización del Estado capitalista es la constante creación de *alternativas intrasistémicas* al conflicto presentado. Así, las contradicciones son (re)conducidas hacia dilemas solubles dentro del orden existente. Este proceso no es de ninguna manera una desviación consciente por parte del Estado, sino que los propios canales institucionalizados de presentación de demandas suponen una serie de pautas siempre compatibles con el carácter de clase del Estado. Ahora bien, de lo que se trata es de canalización de energías populares, por lo que no debe concebirse a esto como un proceso cerrado. Se trata, más bien, de una permanente disputa en torno del plano de la normalización que el aparato estatal propone.

Para desarrollar este punto, Holloway (1994b) propone una interesante relación entre ciudadanía y administración pública. La teoría y la práctica de la administración pública tienen como supuesto el concepto moderno de ciudadanía, en el sentido de la igualdad formal y la individualización antes descrita, esto es, que la sociedad es una masa de ciudadanos (abstraídos de su condición de clase). De esta manera, contribuyen al proceso de fragmentación de la lucha de clases, ya que ésta es redefinida en términos de demandas ciudadanas.

Entonces, todas las prácticas transformadoras (se dirijan o no al Estado) son absorbidas y tratadas en estos términos. Si lo que ingresa al moderno entramado institucional es la lucha de clases, su producto principal es una masa indiferenciada de ciudadanos. De esto se trata la institucionalización del conflicto social. En el caso de cualquier conflicto puntual que plantee cuestionamientos (conscientes o no) profundos al orden existente, este verá sus aristas peligrosas amputadas y su núcleo normalizado por las diferentes dimensiones del Estado. Por caso, el sistema judicial no admite presentaciones colectivas y, si lo hace, nunca se da en términos de

clase. Tan solo reconoce grupos de individuos, y no relaciones clasistas que los preceden. De la misma manera, el sistema político supone una serie de normas y procedimientos que orientan las prácticas partidarias más hacia la búsqueda de votos ciudadanos que hacia la expresión o representación de un interés de clase.

Sin embargo, el problema del tratamiento no debe reducirse solamente a las demandas que recibe el Estado sino a la forma misma en que éste concibe la problemática social. Pensemos, por ejemplo, en los términos de la asistencia social propios del Estado y su relación con momentos de conflicto. Es fácilmente asociable el aumento en los montos de ayuda con la multiplicación de las protestas, conflictos y activación de los sectores populares (el ejemplo más cercano y concreto quizá sea la explosión de Planes Jefas y Jefes de Hogar los primeros meses de 2002). Al margen de que todo logro siempre debe ser pensado en términos de conquista y no sólo como concesión por parte de las clases dominantes, debe resaltarse que la ayuda social supone términos que por sí mismos tienden a la desarticulación de las organizaciones propias del campo popular. En otras palabras, prácticas que muchas veces no son dirigidas hacia el Estado (y otras que, siéndolo, no son reductibles solamente a un problema material), son reconfiguradas en términos de medidas cuantificables de la “necesidad” (la estadística y sus instituciones –como el INDEC en el caso argentino-, entonces, suponen ya una matriz de tratamiento del conflicto social). De esta manera, la búsqueda, sin duda material y atravesada por la crisis económica, que puede trascender la inmediatez y pensarse como producción de nueva subjetividad y transformación de relaciones sociales es reconducida hacia los términos propios del Estado.

Estos mecanismos, entonces, podrían englobarse en un doble movimiento propio de la práctica estatal, denominado por Holloway (1994b) proceso de *Individuación-Colectivización*. El mismo consiste en la disolución de un colectivo antagónico y clasista en átomos dispersos e indiferenciados para su posterior reunificación en agrupamientos de carácter no peligroso para el orden existente (los “ciudadanos” o la “nación” pueden funcionar en este plano). El núcleo del proceso es su adaptación a los términos de la sociedad actual. Un caso, polémico, de procesos de institucionalización de esta índole está dado por el recorrido del problema de los Derechos Humanos en nuestro país. Si en los principios de los ochenta suponía una problemática radical de fuerte cuestionamiento al orden social, muchos de sus términos y organizaciones fueron decantando hacia agencias como Secretarías de Derechos Humanos (hoy presentes en casi todos los planos de gestión pública del país). Esto no supone desmerecer lo que no debe ser concebido

meramente como concesión del Estado que busca aplacar una lucha antagónica, sino también como una conquista plasmada institucionalmente y, como tal, valiosa. En última instancia, se trata de comprender que la transformación de la institucionalidad estatal no puede ser el horizonte último de un proyecto emancipatorio, sino apenas parte de un recorrido que debe trascenderlo y plantearse en tiempos y lenguajes que pugnen por sustraerse del Estado en cuanto *lógica* de normalización -capitalista- de la actividad social.

El Estado en América Latina

Nociones como “centro” y “periferia” (más aún “desarrollo” y “dependencia”) remiten a problemáticas fundadas bien entrado el siglo XX. Y dado que la relación metrópoli-colonia no era en el siglo XIX la única forma de subordinación existente entre naciones (en América Latina era prácticamente nula en la segunda mitad del mismo), se podría afirmar que existía cierta “vacancia conceptual” para calificar este tipo de relaciones. Del mismo modo, es complejo acudir a un concepto que sintetice la posición en el mundo de los países latinoamericanos durante el siglo XIX, en el período que se abre con los procesos de independencia y se articula en la consolidación de los Estados nacionales.

Aunque no inmediatamente interesado en la región, Marx alude en los *Grundrisse*, a las “formaciones sociales secundarias”. Resulta un concepto sumamente ilustrativo: el desarrollo del capitalismo en regiones periféricas no responde a un proceso de desenvolvimiento de contradicciones sociales en sus territorios sino a una implantación *desde fuera*, lo que supone que varios determinantes específicos del modo de producción capitalista no están presentes y deben ser articulados de manera artificial (Salama y Mathías, 1986). En este marco, el Estado es el elemento saliente que garantiza la posibilidad de desarrollo capitalista, determinando su posición fundante en la totalidad social no solamente en aquel momento primigenio sino de manera permanente, más allá de matices históricos y geográficos.

Quizá la obra de René Zavaleta Mercado constituya un aporte pertinente para contribuir a una mejor comprensión de la especificidad de lo estatal en la conformación de las sociedades latinoamericanas. Buena parte de sus textos han tenido el objeto de “nacionalizar” el marxismo, esto es, arraigar la radicalidad de los planteos de Marx (y de alguno de sus “continuadores”, si se nos permite esa poco feliz expresión) en las realidades nacionales: “el marxismo como tal no ha

producido nunca una revolución. Ello ha ocurrido, en cambio, cuando el marxismo ha leído en la historia nacional la formación subterránea de la revolución” (Zavaleta, 1990a:159).

Para Zavaleta, el punto de partida de todo análisis -desde una perspectiva marxista tributaria particularmente del pensamiento de Lukács- debe ser la sociedad como totalidad orgánica. Allí, la distinción de niveles de análisis debe ser rigurosa a fin de evitar determinismos y confusiones lógicas con importantes consecuencias teóricas y políticas. En “Las Formaciones aparentes en Marx” (1988a), un interesante ensayo sobre el modo en que se estructura la realidad en las sociedades capitalistas, este autor establece la “simultaneidad entre base y superestructura”, planteando que no puede pensarse una primacía ontológica de la primera por sobre la segunda. No obstante, y considerando con Hegel que *cada momento de la realidad contiene o expresa la totalidad*, distingue dos dimensiones de análisis ligadas con niveles diferenciados de abstracción: el *modelo de regularidad* y las *sociedades en su historia*.

El proceso de homogeneización -mensurabilidad de los distintos trabajos- de las sociedades que involucra el desarrollo capitalista es el que permite hablar de modelos de regularidad o modos de producción, que por primera vez revelan la “unidad de la historia del mundo”. Ello implica, en términos de Lukács (1985), que la sociedad es ahora pasible de conocerse a sí misma. Por su parte, las superestructuras dan cuenta de una diversidad e incluso de una incomparabilidad en función de distintos derroteros históricos. Zavaleta plantea que el modelo de regularidad -el núcleo de las relaciones capitalistas de producción- da lugar a una serie de formaciones aparentes a nivel superestructural. Vale decir, al desarrollo capitalista “perfecto” le corresponderían determinadas formas (aparentes, mistificadas) ideológicas y políticas - democracia representativa, ideas de libertad e igualdad, etc.- que sin embargo están sobredeterminadas por la fuerza de la *historia local*. Al margen de una parte de la política que pueda pensarse como regularidad (por caso, la existencia de lo estatal como esfera diferenciada de la sociedad: no hay formación económica capitalista que no cuente con esta característica), existe lo que Zavaleta denomina una *acumulación especial* de la superestructura en cada caso específico (Zavaleta, 1988a).

Sin embargo, a la hora de analizar una sociedad concretamente -descendiendo en el nivel de análisis-, la fórmula parece invertirse: la estructura económica muestra las líneas de diversidad, es por definición heterogénea aún cuando esté uniformizada por la forma-valor, mientras que el Estado provee una unidad de tipo formal: aunque su verdad última es el

“monopolio de la fuerza”, su función es eminentemente ideológica y jurídica. Parafraseando a Marx, debe erigirse como “síntesis de la sociedad”, por ello tiene un poder simbólico tanto o más importante que la coacción física, pues articula en su seno la existencia misma de la sociedad como tal. El contenido específico de este poder simbólico es el lugar de privilegio donde opera, en palabras de Zavaleta, “la vertebración de la historia particular de cada formación económico-social” (1988a:226).

Si bien considerar a América Latina como una unidad o una formación económico-social es cuanto menos problemático⁶, a los efectos de este trabajo sí pueden plantearse algunas cuestiones en común que hacen a la constitución de los Estados nacionales en la región. Siguiendo nuevamente a Zavaleta (1988b), en América Latina el Estado no puede situarse vulgarmente en la “superestructura”, es más bien una activa fuerza productiva, la precondition para la producción de una base económica capitalista. Dado que la Nación no es, a diferencia de Europa, preexistente al Estado, tampoco aparece un mercado nacional como base para el nacimiento de éste. De hecho, tanto el mercado como la Nación (en términos de pautas culturales comunes) son, en tanto unidades, creaciones *ex novo* del Estado. Hasta la burguesía es prácticamente inexistente como tal en los momentos de conformación del Estado nacional. En situaciones “normales” el Estado es producto de la Nación, vale decir, del mercado nacional en constitución. No son procesos exentos de violencia (la violencia es, tal como escribió Engels, la “partera” de la nueva sociedad que brota de las entrañas del viejo orden), pero tampoco son productos directos de ella. En el caso de muchos Estados latinoamericanos, no es este el proceso. Pues no se trataba simplemente de abrir el camino a un proceso social conflictivo sino más bien de introducir determinadas condiciones externas al desarrollo endógeno de las formaciones sociales latinoamericanas. De allí la particular *productividad* de lo estatal en éstas. Allí la formación de la Nación -por parte del Estado- es una condición central para el desarrollo del capitalismo, por ende ambos conceptos adquieren una relevancia específica y por cierto mayor a la planteada en algunas obras del propio Marx. Si para éste la Nación oscila entre una *mera ilusión* y un *resto arcaico* (Mármora, 1986:84), para Zavaleta será, en todo caso, una *forma aparente* pero necesaria. Con lo cual existe un punto de coincidencia con lo planteado por Marx,

⁶ José Aricó (1999) también es consciente de este problema, por lo cual plantea la posibilidad de pensar América Latina como unidad en función de la dificultad de ubicar a la misma entre las metrópolis y los países coloniales. En tal sentido, justamente es la productividad de la esfera estatal la que permite construirla en tanto *objeto* de conocimiento.

y a la vez una profundización: esa ilusión es real, es una construcción estatal sobre la base de la acumulación de la historia local (donde por supuesto están involucrados los *restos arcaicos*) que se constituye como precondition para que la formación social en cuestión asuma una forma capitalista.

Zavaleta insiste en varios de sus textos en la particular pertinencia para América Latina de la frase de Marx que sentencia que “la mayor fuerza productiva es la colectividad humana”. En el capitalismo, la Nación es la forma específica por excelencia que asume esa colectividad humana. Pues bien, como decíamos antes, lo particular de América Latina es que la constitución de los Estados no es la culminación del proceso de nacionalización (vale decir, de la estructuración de la fuerza productiva *Nación*), sino uno de sus principales prerrequisitos. Sólo en virtud de los esfuerzos extra económicos del Estado se constituye el mercado nacional e incluso las clases sociales en la región⁷. También Arturo Roig señala esta cuestión, planteando que en América Latina la idea hegeliana de que el pueblo constituye su identidad en su relación con el Estado asume una inesperada validez: “lo nacional, que asimismo juega como principio de identidad, ha sido entre nosotros diríamos modelado por el Estado y muchas veces de un modo ciertamente violento, con los consecuentes conflictos que no han faltado nunca” (Roig, 2008:64). Si en Europa la violencia fue la partera del naciente orden capitalista, en América Latina tuvo directamente un rol, diríamos, *maternal*. La institución estatal del mercado nacional supuso la realización de nuestras propias “acumulaciones originarias”, involucrando en algunos casos - como el argentino- genocidios y etnocidios de los pueblos originarios de la región.

De manera que el Estado en América Latina no puede ser comprendido meramente por aquello que lo vincula con el modelo de regularidad capitalista. Es necesaria la apoyatura de la *historia* local para comprender que las formas específicas que asumió en la región, dieron por resultado lo que podríamos denominar un *Estado productivo*: en tanto fuerza productiva, el Estado constituyó un elemento central a la hora de articular las sociedades latinoamericanas como sociedades capitalistas, aún en su carácter dependiente. Según Zavaleta (1988a:239), “El carácter

⁷ En la génesis y consolidación del Estado en la región, su relación con las clases dominantes es prácticamente de identificación -en el caso argentino, Roca es militar, político y terrateniente; hoy su gesta en el “desierto” descansa en los billetes de cien pesos-. Zavaleta (1990b), eludiendo las posiciones fijas del debate instrumentalismo-estructuralismo, plantea que esta distinción debe ser pensada en términos de “momentos” de la historia de los Estados. Así, el siglo XIX es eminentemente un siglo instrumental, donde el Estado actúa en beneficio prácticamente inmediato de los intereses dominantes. Los procesos populistas del siglo XX darían cuenta de un momento “estructural”, más ligado con la posibilidad del Estado de internalizar en su seno las demandas de los sectores subalternos.

mismo de una nación queda sellado para siempre según quien sea el que concluya por dar cuerpo nacional a sus elementos regados e invertebrados”. El autor denominó *momento constitutivo* a aquella instancia donde se articula lo nacional alrededor de un centro que produce una interpelación eficaz en tal sentido. En América Latina, tal centro fue históricamente ocupado por el Estado -en estrecha relación con las clases dominantes-.

Así, el Estado en América Latina es ante todo contradictorio, es fuerte y débil en un mismo movimiento: en el primer sentido, tiene un peso decisivo en la articulación de la formación social en su conjunto: es una activa fuerza productiva, la precondition para la producción de una base económica capitalista. El Estado es productor y precondition del mercado, y luego garantía extra económica del funcionamiento correcto de los roles al interior de éste (Zavaleta Mercado, 1990a).

Esta “productividad social” del Estado no se liga solamente a las clases dominantes sino a la articulación de la sociedad en su conjunto, por ello también a los sectores subalternos, cuya identidad está atravesada por la constitución de lo nacional desde el Estado. Si bien este proceso fue históricamente posterior (ligado a los llamados “populismos”), no por eso es menos fundante del tipo de sociedad periférica, donde la idea de Nación, e incluso el Estado, aparecen como significantes centrales de las luchas sociales. Aricó (1982) explica el desencuentro de Marx con América Latina en parte como producto de estas cuestiones. Su herencia hegeliana, tanto en un sentido positivo como negativo habría determinado el campo de lo visible en sus análisis: en sentido positivo, Marx parece fuertemente influenciado por la idea de “pueblos sin historia” de su viejo maestro. Esto hace que los países de la región no sean analizados en profundidad sino como apéndices del capitalismo central. En un sentido negativo, el rechazo de Marx al Estado-centrismo hegeliano, le impide siquiera pensar en el Estado como posible productor de la sociedad civil, y no como mero producto “parasitario” de ella. El hecho de que el desarrollo del capitalismo en América Latina no sea endógeno, y sus consecuencias sobre las instancias que deben impulsarlo dadas dichas circunstancias, no son profundizadas por Marx, quien centra sus escasos papeles sobre la región en críticas, algo apresuradas, a los proyectos “estatistas” de Bolívar.

Asimismo, el Estado periférico cuenta con una debilidad estructural como producto del mismo proceso histórico. Allí lo político es una esfera privilegiada, decisiva en la reproducción de la dominación. Ello se debe a que las contradicciones propias de la sociedad capitalista no son

resueltas ni opacadas a otro nivel. Los debates de las décadas del sesenta y setenta (incluso hasta los tempranos ochenta) relacionaban el permanente “estado de excepción” (dictaduras militares y demás formas políticas autoritarias) de la región con esta problemática: la imposibilidad de resolución de conflictos inherentes a la sociedad capitalista en el ámbito de la sociedad obligaban a un permanente disciplinamiento coactivo. Aún cuando hoy haya que repensar esta cuestión a la luz de la “transición democrática”, las condiciones que estructuran la forma de existencia del Estado periférico persisten. Según el trabajo clásico de Tilman Evers (1989) la heterogeneidad estructural (coexistencia de diversas formas de producción) y la dependencia subordinada del mercado mundial -denominada por Sonntag (1977) “bidireccionalidad de la relación capital” por la fuerte presencia de capitales metropolitanos en las relaciones nacionales de clase- son las dos determinaciones centrales de las formaciones secundarias. Ellas producen un Estado que no sólo debe garantizar condiciones para la producción capitalista sino también imponerlas, bajo la presión de un capital extranjero que no precisa del desarrollo integral del país sino que persigue la obtención de ganancias en el corto plazo. De esta manera, conviven intereses dominantes difíciles de conciliar bajo la forma de un interés general, lo que da lugar a una paradoja: “de la imposibilidad de una política auténticamente “general” resulta una ampliación potencial de la autonomía estatal” (Evers, 1989:127, cursivas en el original), donde el Estado termina por ser la instancia privilegiada de disputa entre diversas fracciones burguesas.

Lo central de estos aportes para el trabajo que nos ocupa es la centralidad que el Estado asume como lugar de la disputa social, que entrelaza las disputas entre fracciones de capital y el antagonismo entre capital y trabajo. Es una pugna entre sectores dominantes en tanto las desfavorecidas burguesías locales apelan al marco nacional para legitimar sus pretensiones hegemónicas. De ese modo, se producen momentos históricos de interpelación a los sectores populares para reforzar su posición, sobre todo en tiempos en que la relación entre fracciones dominantes locales y externas alcanza picos de tensión. Y estamos, ante todo, frente a una disputa eminentemente simbólica, en el marco de la cual el Estado guarda para sí una enorme productividad en la centralidad histórica que asume en las luchas sociales en Argentina y América Latina. Sin embargo, ello supone también un momento fuerte de compromiso que dificulta la problematización en torno de la autonomía como garantía de los procesos de transformación social. En los Estados periféricos ocurre a menudo que los sectores económicamente dominantes no logran una representación política que los contenga, en buena

medida por la fuerza con que allí se producen enfrentamientos entre sectores burgueses locales y extranjeros. Cuando los segundos dominan en desmedro de los primeros, pocas veces logran construir una hegemonía civil, a ello también pueden atribuirse las constantes irrupciones del “partido militar”. Por su parte, las burguesías locales cuentan con una menor fuerza pero con una capacidad infinitamente mayor de interpelar a los sectores populares. La disputa por el poder político, entonces, supone la búsqueda de mayor independencia respecto de sectores foráneos, máxime en momentos en que los intereses de ambos parecen irreconciliables.

En suma, la productividad material y simbólica del Estado periférico es otra de las razones para comprender que las luchas populares en América Latina suelen tomar la forma de interpelaciones al Estado y difícilmente lo exceden en su forma, o, si lo hacen por momentos, la disputa es siempre la de rebasar o ser inscriptas en ese marco. En lo que sigue, analizaremos esta cuestión a la luz del caso argentino de los últimos años.

(2) El Estado en la Argentina 2001-2007: Luchas populares, entre el neoliberalismo y el kirchnerismo

Comenzamos aquí un abordaje histórico anclado en la experiencia argentina de los últimos años. Lo que intentaremos demostrar es que el kirchnerismo sutura la crisis de representación del propio Estado desatada en 2001. Suturar no es borrar ni volver a la situación inmediatamente anterior, sino –a la manera en que lo describimos antes- absorber la problemática bajo la forma estatal, esto es, reconocerla como “cuestión”⁸ e inscribirla en los marcos de la institucionalidad. Toda sutura lleva, entonces, las huellas del conflicto que le dio origen. Si nos remontamos un par de décadas atrás hacia la post-dictadura en la Argentina, podemos decir que en el kirchnerismo reaparecen desde un punto de vista estatal buena parte de las banderas históricas que se levantaron desde los sectores subalternos en dicho período. La cuestión de los derechos humanos, la Corte Suprema, la difícil relación con los organismos multilaterales de crédito, etc., son temas que las luchas populares instalaron en la agenda pública y que sólo la correlación de fuerzas construida luego del 2001 les permitió alcanzar un status institucional. Pero allí no termina el problema, más bien, allí comienza. Por medio de estas banderas, el Estado recuperó la iniciativa en términos de mediación privilegiada del acontecer social en la Argentina.

Recordemos que los meses que siguieron a diciembre de 2001 se caracterizaron por una alta participación social directa, diferenciada tanto de los actores tradicionales como del Estado. La brecha fundante de las sociedades modernas entre Estado y sociedad se veía debilitada o al menos cuestionada. A pocos días de asumir (enero de 2002), el propio Presidente provisorio Eduardo Duhalde afirmaba: “con las asambleas en la calle no se puede gobernar”⁹. Si bien estos picos de participación tendieron a reducir su protagonismo, la *normalización* de la situación no fue sencilla y contuvo momentos de gran tensión social, como la masacre de Puente Pueyrredón¹⁰

⁸ Tomamos aquí la figura de Oszlak y O’Donnell (1976) de la “cuestión socialmente problematizada” como el asunto que toma carácter público y respecto del cual los diferentes actores sociales (entre ellos -y principalmente- el Estado) deben tomar una posición y actuar en consecuencia para su “resolución” (cualquiera sea).

⁹ Este tipo de sentencias abundaban tanto en boca del entonces presidente como de varios de sus ministros, y son fácilmente hallables en los diarios de febrero y marzo del 2002. Esto no quiere decir que Duhalde aludiera a una situación de “doble poder” o algo semejante. En todo caso, se trata más bien de una crisis de iniciativa del Estado como regulador de las relaciones sociales más que de una amenaza concreta y posible de su superación práctica a manos de las asambleas y demás fuerzas sociales activas en aquellos tiempos.

¹⁰ Con ese nombre se denominó al asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 26 de junio de 2002, en el marco de una feroz represión a una protesta de una importante cantidad de organizaciones piqueteras. Tanto el gobierno de Eduardo Duhalde como los principales medios de comunicación difundieron, en un principio, un supuesto enfrentamiento entre agrupaciones piqueteras

en junio de 2002, que aceleró los tiempos electorales frente a una sociedad que no parecía tolerar la recomposición represiva de los mecanismos estatales.

El problema pendiente del Estado era, entonces, la recuperación de su rol monopólico de la gestión social y en esa dirección puede leerse el surgimiento de la figura de Néstor Kirchner, presentado como ajeno a las políticas neoliberales de la década previa e intentando hacer propios los reclamos que la sociedad en movimiento había puesto sobre el tapete. Sin embargo, no debe leerse esto en términos *conspirativos* (“la clase dominante pone a Kirchner para recuperar legitimidad”) sino justamente enmarcado en la *lógica estatal* de la que venimos hablando.

Si la llamada “crisis de representación” que estalló en el 2001 debilitó profundamente la capacidad de los actores políticos tradicionales (partidos y sindicatos) de canalizar las demandas de los sectores subalternos, el entonces amplio espectro de agrupaciones piqueteras (tuvieran o no relación con organizaciones tradicionales) intentó, de alguna manera, llenar ese vacío, mediante la organización de trabajadores desocupados. Sin embargo, no logró formar un espacio político que les permitiera imponer temas propios en la agenda pública y, menos aún, logró presentarse a sí mismo como una alternativa de poder.

En este contexto aparece el gobierno del Presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003, con un 22% de caudal de votos y una fuerte dependencia de la estructura política del presidente anterior, Eduardo Duhalde. Al mismo tiempo, tanto el primer mandatario como la mayoría de funcionarios y grupos afines y cercanos al gobierno provienen de sectores tradicionales de la política partidaria argentina, en muchos casos ligados al gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y, con ello, al proceso de privatizaciones e implementación de políticas de corte neoliberal en el país. De manera que el gobierno no sería un emergente propio de los procesos de autoorganización y resistencia surgidos en la década de 1990 y fortalecidos (y visibilizados) a partir de diciembre de 2001, sino más bien un actor externo a ellos que ha tomado como propias algunas de sus demandas, ya que incluso su partido de proveniencia fue, en aquellas jornadas, uno de los blancos predilectos del rechazo popular.

Ya en sus primeros meses, el gobierno comenzó a sustentar la fuerte legitimidad, de la que gozó durante todo su ejercicio, en recuperar algunas de las consignas y demandas que las jornadas

como causa de los decesos. A los pocos días, producto de importantes movilizaciones y de imágenes capturadas por medios independientes, se supo que Kosteki y Santillán fueron ultimados por efectivos de la Policía Bonaerense en la Estación Avellaneda del Ferrocarril Roca. Para testimonios y mayor información sobre ese hecho, y acerca de la criminalización de la protesta social en la Argentina ver Buhl y Korol (2008)

de diciembre de 2001 habían instalado. Así, ha habido importantes cambios en la Corte Suprema, una política progresiva en el ámbito de los Derechos Humanos y un cambio de rumbo, al margen de cómo se lea, en lo que atañe a la relación con los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial).

Sin embargo, lo novedoso del proyecto político que asume el gobierno en 2003 aparece ligado a su permeabilidad respecto de los reclamos del movimiento popular. Para cualquier expresión organizada de la izquierda, en el sentido más amplio de la palabra, resulta sencilla la postura a tomar frente a políticas como las que predominaron en la década de 1990. Allí los debates y diferencias discurrían, acaso, por los métodos de resistencia a las mismas. Algunas corrientes se recluyeron en el trabajo barrial, otras intentaron resistir de manera visible en las calles, etc. Pero la nueva coyuntura resultaba hartamente más comprometedor, ya que la recuperación “oficial” de algunos reclamos históricos de estos actores obligaba a agudizar el análisis para no caer en posiciones rígidas que limiten la capacidad de interpelar políticamente, es decir, para no caer en el aislamiento discursivo (generalmente bajo la forma de una iracunda diatriba que denuncia una lisa continuidad -e incluso identidad- entre presente y pasado) respecto del acontecer social.

En los siguientes apartados abordamos particularmente la novedosa relación que se establece entre el gobierno y los movimientos sociales, donde sostenemos que el importante apoyo que aquél mantiene está dado por la efectiva recuperación (parcial o, mejor dicho, institucional) de la energía social liberada en diciembre de 2001, tanto en forma como en contenido. En contenido, en tanto buena parte de los reclamos directos de quienes protagonizaron las ya célebres “históricas jornadas” son de algún modo parte fundamental de la agenda estatal, aun cuando nuestro análisis pretende dar cuenta, precisamente, de qué ocurre con aquellos reclamos una vez que pasan por el Estado (¿Cómo se transforman? ¿Qué sucede con su radicalidad inicial?). En cuanto a la forma, las apariencias confrontativas del kirchnerismo también pueden deber su génesis a un momento social de profunda conmoción y belicosidad que el Estado debe tratar de algún modo, aunque más no sea para recuperar su lugar de privilegio en la dirección de la sociedad argentina, que se vio amenazado por los picos de participación social de aquellos meses que siguieron a diciembre de 2001. La fortaleza del gobierno no radica solamente en la opinión pública, la imagen positiva y demás elementos cuantitativos, sino también en el apoyo político de una cantidad importante de sectores activos del campo popular,

muchos de ellos provenientes del arco piquetero (los llamados “piqueteros oficialistas”). Este apoyo fue una preocupación permanente del gobierno, que llevó adelante políticas activas para reafirmarlo y perpetuarlo. Las mismas tuvieron por efecto tanto el alineamiento de determinados sectores como la división de otros a partir de los desacuerdos respecto del carácter del proceso político. Nuestro propósito es el análisis de dichos efectos poniendo particular atención en el problema de la autonomía que los movimientos mantienen respecto del Estado, considerando que ella es la que puede permitir distinguir entre procesos de transformación real y de recomposición hegemónica, ya que de ella depende, como intentaremos demostrar, la capacidad de las organizaciones de los sectores populares de imponer sus propios proyectos y de no ser absorbidos por, en los términos en que Antonio Gramsci aludía a la “revolución pasiva”(2003), elementos tradicionales. La autonomía será leída, entonces, como una tensión que permita sostener esa profundización del proceso y mantener una dinámica que evite su estancamiento y hegemonía definitiva por parte de las clases dominantes.

De este modo, la afinidad entre determinadas políticas gubernamentales y algunos sectores del movimiento popular en general ha significado modificaciones en el mapa de las organizaciones de los sectores populares, implicando quiebres, divisiones, fusiones, etc., en buena medida a causa del posicionamiento respecto del gobierno.

Una cuestión central en este punto es cómo leer la apropiación gubernamental de importantes reclamos históricos del campo popular. En este punto consideramos acuciante no abandonar la dialéctica frente a tentaciones maniqueas. Las medidas oficiales identificadas con luchas que marcaron las últimas décadas no son una mera concesión que busca apaciguar la protesta, sino que constituyen también una conquista producto de la acumulación de fuerzas en esta disputa. Como expresamos en el marco teórico, sólo una concepción dialéctica de Estado, que conciba sus aparatos (lo que incluye leyes y medidas, desde luego) como cristalización de correlación de fuerzas en el orden social permite pensar la complejidad de la relación entre las luchas sociales y su dimensión estatal.

De manera que lo que aparece luego del 2003 es una puja en torno a la movilización social y, fundamentalmente, a su direccionamiento. Varios autores coinciden en caracterizar las políticas del gobierno de Kirchner como desmovilizadoras y desarticuladoras, particularmente hacia el arco de movimientos piqueteros: Svampa y Pereyra (2004) hablan de “relaciones peligrosas”, teniendo en cuenta la sutileza del gobierno de Kirchner para combinar las diversas estrategias

posibles destinadas a “integrar, cooptar, disciplinar y/o aislar al conjunto del movimiento piquetero” (pág. 212). Por otro lado, Schuster (2004) lee las políticas del gobierno como una “estrategia desmovilizadora”, a partir de acciones de gobierno que retoman parcialmente reclamos de diferentes movimientos y organizaciones que obligan al arco piquetero a tomar una posición al respecto, y que tienen por efecto el aislamiento de los sectores más combativos y la negociación con los más dialoguistas. Rajland y Campione (2006), por su parte, también analizan las políticas gubernamentales en términos de desmovilización, agregando el rol de la ayuda social y la incorporación de sectores del movimiento piquetero a una coalición en torno a la figura presidencial como importantes factores que fragmentan el mapa de estas organizaciones. Asimismo, Borón (2005) diagnostica una fragmentación del movimiento piquetero a partir de políticas asistencialistas y de cooptación sobre referentes de importantes sectores del mismo.

Estas posiciones parecen tener de común un marcado hincapié en la dimensión *cooptativa* de las políticas oficiales más que en la producción de consenso social, quizá haciendo una lectura unilateral -desde la posición del gobierno- y que, por ende, no ahonda en la experiencia concreta que los distintos sectores sociales atraviesan. Consideramos que no se trata solamente de políticas de desmovilización sino también de una *movilización selectiva*. Como habíamos adelantado, el apoyo de sectores del movimiento popular fue fuertemente impulsado desde el gobierno, buscando un efecto de identificación, más que la mera incorporación y/o acallamiento. Volveremos luego sobre las dimensiones que articulan a determinadas organizaciones sociales con el proyecto político del gobierno.

Antes, hagamos una alusión a la reconfiguración del campo popular a partir de los posicionamientos en relación con el gobierno kirchnerista. A la hora de caracterizar los movimientos piqueteros, varios autores coinciden en que pueden ser distinguidos en tres ramas, de acuerdo a su matriz ideológica y tradición fundante: Schuster (2004) los denomina como vertiente sindical, partidaria y autonomista. Svampa y Pereyra (2004), por su parte, los ordenan como *populistas*, de origen peronista o nacionalista de izquierda y relacionados con el modelo organizativo sindical, *izquierda tradicional* (ligados a partidos de izquierda, incluso conformados, en muchos casos, como “brazos piqueteros” de los mismos) y la llamada *nueva izquierda*, con cierta relación con la tradición autónoma que podría remontarse a diversos trabajos de base que incluyen comunidades eclesiócristas tercermundistas en las décadas del sesenta y setenta, así como tomas de tierras y diferentes instancias de articulación local comunitaria en los ochenta. Esta

tradición se ha visto actualizada por los debates dentro del marxismo en torno al poder y el Estado, que han privilegiado la construcción de territorios autónomos por sobre la confrontación directa con el poder estatal. Estas tipologías quizá requieran una actualización a la hora de pensar una *sociología* de los movimientos piqueteros, pues la fisonomía de cada una de las corrientes se ha ido modificando y, además, pueden encontrarse múltiples expresiones organizativas que no responderían de manera clara a ninguna de las corrientes planteadas.

Sin embargo, el objetivo de las próximas páginas no está planteado en el sentido de trabajar sobre las tipologías ya existentes de los movimientos piqueteros, sino en construir un mapa de acuerdo a sus posiciones respecto de la orientación política del gobierno de Kirchner. Para ello, el modo más apropiado de distinguirlos es similar a las planteadas por Schuster y Svampa y Pereyra, aunque no idéntica.

A continuación caracterizaremos brevemente las tres corrientes de acuerdo a su relación con el Estado a partir de las políticas oficiales, si bien profundizaremos en la “populista”, ya que consideramos que allí se condensan dimensiones centrales de la lógica estatal como un permanente intento por absorber y “normalizar” el conflicto social contra sectores subalternos que pretenden exceder ese límite en la construcción de un proyecto alternativo. Esta corriente nos parece la más apropiada para analizar aquí en tanto en ella se expresa el lugar de encuentro entre la *lógica estatal* y la *historia propia* de las luchas sociales en la Argentina.

Izquierda tradicional: el pasado en copa nueva

La izquierda tradicional argentina, sobre todo la de origen trotskista, concibe la lucha revolucionaria desde un punto de vista leninista tradicional, donde el partido de vanguardia es el elemento avanzado de la clase obrera que la prepara para la conquista del poder político y su elevación como clase dominante. En tal esquema, los movimientos piqueteros surgidos hacia el final de la década pasada no podían sino ser una anomalía. Y, como tal, la reacción ante estos fue tardía. Sólo cuando su centralidad como sujeto antagónico quedó confirmada, comenzaron a surgir los movimientos piqueteros ligados a los partidos. A tal punto estos grupos son creaciones directas de éstos frente a una coyuntura que excedía sus formas clásicas de comprender la política, que su escasa creatividad impidió, en algunos casos –PO (Partido Obrero), MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores)-, fundar un espacio con siglas diferentes a las del

partido. Pero no es sólo una cuestión nominal. Políticamente, los espacios piqueteros no son considerados en sí mismos sino en relación con la adopción de la dirección política del partido. Es decir, el rol central y la vitalidad de las masas en los procesos de transformación social está estrictamente supeditada al control organizativo e ideológico de la dirección política (Mazzeo, 2004). Las derivas de la izquierda partidaria frente al fenómeno piquetero y, en general, a la reconfiguración de las organizaciones de los sectores subalternos en los últimos años, no es tema específico de este trabajo. Alcanza con señalar aquí que el modo en que el nuevo cuadro fue leído supuso antes una multiplicación de mezquindades que la construcción de espacios de coordinación de luchas. En los escasos ejemplos de esto último¹¹, tendieron a primar disputas entre partidos en torno de quién “encabeza” la lucha, lo que supuso de hecho el escaso o nulo reconocimiento de cada organización a las luchas llevadas adelante por alguna de las otras.

Esta izquierda incluyó también al MIJD (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados) identificado con la mediática figura de Raúl Castells y, parcialmente, al MTL (Movimiento Territorial de Liberación), ligado al Partido Comunista¹², que como bien lo expresara Mazzeo (2004), aparece atrapado entre algunas nociones novedosas como las de construcción de poder popular y su vinculación con una de las organizaciones más expresivas de la izquierda tradicional argentina.

Todos estos grupos se han posicionado frente al gobierno como el ala “dura” de la oposición, remarcando una y otra vez los ejes de continuidad entre el actual mandatario y los anteriores. Parados en esta lectura, tienden a ser aislados del humor social general. Además, el carácter “extremo” de sus acciones termina por resultar cómodo para el propio gobierno, en la medida en que le permite caricaturizar las críticas que le son dirigidas¹³. Así, más de una vez, se ha visto coincidir a figuras como Jorge Altamira y Raúl Castells con Mariano Grondona y Jorge Ávila¹⁴ en su caracterización negativa del gobierno.

¹¹ Tal es el caso del Bloque Piquetero, que agrupó desde septiembre 2001 a cerca de una decena de organizaciones – entre ellas el Polo Obrero-, pero que terminó por disolverse de hecho en 2007, envuelta en disputas intestinas alrededor de la fuerza relativa de cada uno de sus componentes.

¹² Esta tipología remite más bien a los momentos fundacionales del kirchnerismo. Hoy, tanto en el PC como en el MTL hay discusiones internas respecto de la posición a tomar en relación con el gobierno, con sectores más cercanos al proyecto kirchnerista y otros más críticos.

¹³ Sobran ejemplos de polémicas que algunos miembros del gobierno de Néstor Kirchner, principalmente el entonces Ministro del Interior Aníbal Fernández, impulsaron y mantuvieron a través de los medios con diferentes organizaciones de izquierda partidaria.

¹⁴ Nombramos a estas figuras sólo con el propósito de ejemplificar. Jorge Altamira es el Secretario General del Partido Obrero y su cara pública más visible. Lo propio es Raúl Castells para el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. Por su parte, Mariano Grondona es un periodista históricamente vinculado con los sectores

De esta manera, la opción del gobierno para con ellos es su marginación, que combina la caricaturización, el desdén por sus acciones y dosis refinadas de represión. Esta última no toma la forma de violencia abierta como lo hacía en la década pasada, sino que tiende a instalarse a través de la criminalización de la protesta (procesamientos de militantes por diferentes causas). Vale la aclaración de que no son éstos grupos los únicos destinatarios de las políticas represivas, que también tuvieron y tienen un peso importante sobre los sectores de tendencia autónoma¹⁵.

Una lectura similar del gobierno aparece en otras organizaciones que podrían constituir, en términos de origen, forma organizativa y tradición, otra corriente. Se trata de los grupos de raigambre guevarista, tales como el Movimiento Teresa Rodríguez -hoy fragmentado- y otros espacios centrados en el trabajo territorial –Movimiento 26 de Junio, Unión de Trabajadores Piqueteros, entre otros-, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En términos de formas de construcción se distinguen de las organizaciones de tipo partidarias, brindando una mayor relevancia al desarrollo político de las bases. Sin embargo, no ahondamos tanto en ellas pues su caracterización del gobierno de Kirchner -objeto específico de esta tipología- se inscribe en la línea de la izquierda tradicional.

Organizaciones de nuevo tipo: peligros y asimetrías

Las diferentes organizaciones ligadas a la denominada “nueva izquierda” constituyen quizá el caso más delicado. Han sido las que más han sufrido divisiones y rupturas a partir de la llegada del kirchnerismo. Quizá, por no contar con la organicidad de los partidos ni la fuerza política de los movimientos de corte sindical, su situación es más frágil por cuanto cuentan con menos recursos simbólicos y materiales para resistir la fuerza desarticuladora del gobierno. Tanto la fuerza como la debilidad de estos movimientos radican en que se constituyeron como una forma de rearticular lazos sociales en contextos de profunda devastación. Como debilidad, las necesidades materiales constituyen un eje difícil de trascender, lo que torna a las organizaciones vulnerables a la potencia disgregadora de la ayuda estatal, que trae siempre con ella distintas

más conservadores y reaccionarios de la política argentina, al menos en los últimos cuarenta años. Jorge Ávila es una de las más prominentes cabezas del neoliberalismo académico argentino.

¹⁵ Existen innumerables casos de procesamientos ligados con la protesta social. Quizá uno de los más paradigmáticos sea el de José “Pepino” Fernández, referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi (Salta), una de las primeras organizaciones piqueteras del país, que surge en la década del noventa al calor de la desocupación producida en la región por la privatización de YPF. “Pepino” tiene en su haber más de noventa causas judiciales.

formas de condicionamiento. De allí que la necesidad de autogestionar esos aportes del Estado de manera comunitaria sea una de las banderas más características de estos espacios. Como fortaleza, las relaciones que se constituyen en los ámbitos propios de estos movimientos tienden a ser prefigurativas de aquella sociedad que se pretende construir, de manera que medios y fines no aparecen brutalmente escindidos como en la izquierda tradicional. Esto último permite una mayor reflexividad sobre la tensión entre la autonomía como proyecto estratégico y las instancias estatales como nudos contradictorios (Thwaites Rey, 2004).

Desde fines de los años 90 hasta nuestros días se han formado múltiples Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Muchos de ellos estuvieron agrupados en los MTD Aníbal Verón. Sin embargo, ya para finales del año 2003, comienzan las divisiones a raíz de las distintas posiciones respecto del gobierno. Asimismo, un pequeño grupo de MTDs (Guernica, Solano y Allen) se alejan asumiendo posiciones de mayor identificación con la tradición autonomista propiamente dicha, muy presente en las discusiones contemporánea al interior de la izquierda no partidaria.

Un boletín del MTD Aníbal Verón de principios de 2004 dice sobre la llegada del gobierno de Kirchner: “sabíamos que era un gobierno inteligente que no nos pegaría con represión pero sí con su política”. Hasta el final de 2003, el MTD Aníbal Verón confluyó en algunos reclamos con el Movimiento Barrios de Pie y otros grupos que luego se acercaría cada vez más a las posiciones del gobierno. Las divisiones y desencuentros al interior del campo popular crecerían hasta producir fisuras que hoy parecen definitivas.

Actualmente, algunos de esos espacios se han reconfigurado hacia el Frente Popular Darío Santillán (donde el significante y la idea de construcción de *poder popular* tiene mucho peso), con una presencia relativamente importante en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, así como con trabajos políticos que ya exceden el campo de los trabajadores desocupados.

Cerca del gobierno: desafíos a la autonomía

Con mayor o menor reserva, las organizaciones de tipo sindical o “populista” se acercaron al gobierno. Exceptuando a la CCC (Corriente Clasista y Combativa), -de todos modos en el límite entre lo sindical y la izquierda tradicional por su ligazón al PCR (Partido Comunista

Revolucionario, de tendencia maoísta)-, que ha fluctuado y finalmente retiró su apoyo al gobierno, el entero arco de movimientos de esta vertiente ha ido asumiendo posiciones cada vez más comprometidas con las políticas oficiales, proveyendo en muchos casos de funcionarios a oficinas relevantes del Estado, mayormente en áreas vinculadas a políticas sociales.

Dado que este trabajo tiene como uno de sus propósitos discutir en torno a la noción de autonomía, debemos hacer un recorte respecto de las organizaciones cercanas al gobierno, ya que algunas directamente no presentan dicha idea como una cuestión a problematizar. Tal es el caso del Movimiento Evita, que también analizaremos, por encontrarse en el límite entre ser una creación de algunos sectores del gobierno y un movimiento preexistente que toma la decisión política de alinearse. Sus objetivos políticos están vinculados con la ocupación de espacios de poder en cualquiera de sus instancias, con reminiscencias simbólicas más ligadas a las pugnas intestinas del peronismo que al proyecto socialista de Nación de los sectores más radicalizados del movimiento.

Quizá la FTV (Federación de Tierra y Vivienda) y el Movimiento Barrios de Pie sean los sectores más propiamente identificables como movimientos piqueteros con un pasado relevante en la resistencia a las políticas neoliberales y una posterior identificación con el gobierno de Néstor Kirchner, con la consiguiente integración al mismo. Pero también aquí cabe una diferencia no menor. La FTV, como la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos) que conforma, es un paraguas de una multiplicidad de organizaciones no necesariamente coincidentes ni en el programa ni en la práctica. Coexisten, de hecho, organizaciones anticapitalistas con otras de visiones más cortoplacistas y temporizadoras con el integracionismo. La FTV fue precursora de los piquetes en la zona de La Matanza, del mismo modo que luego lo sería de los llamados “piqueteros oficialistas”. Su incorporación a las posiciones del gobierno fue casi sin condiciones ni miramientos y con un alineamiento discursivo muy fuerte, siempre visible en las explosivas declaraciones de su principal referente, Luis D’Elía.

A continuación, nos adentraremos en las diferentes dimensiones involucradas en la relación entre Estado y movimientos sociales. Tomaremos el caso del Movimiento Barrios de Pie, perteneciente a esta última “familia”, en virtud de su acercamiento al gobierno de Néstor Kirchner a pocos meses de iniciada su gestión. El caso elegido responde a la hipótesis de que, dada su historia y tradición –que a continuación desarrollaremos-, su decisión de incorporarse a la

gestión estatal es particularmente productiva para analizar las formas específicas que asume la lógica estatal a la hora de intentar absorber el conflicto social y ponerlo en sus términos. Para dar cuenta de ello, emprenderemos el análisis teniendo en cuenta dos dimensiones del problema, que distinguiremos solo de manera analítica, aunque no por ello pueden ser discernibles en el terreno de la práctica concreta del movimiento. Por un lado, la dimensión simbólica, donde analizaremos la trayectoria de la organización y de su relación con el gobierno, a fin de inscribirla en una opción estratégica ligada con una identificación simbólica que abreva en la posibilidad de inscribirse en una tradición en común.

Además, el análisis de la incorporación del MBP al gobierno nos permitirá despojarnos de algunos conceptos simplistas –ya mencionados- como la *cooptación* para explicar las transformaciones en el mapa de movimientos en los últimos años. En este caso, incorporamos también el caso del Movimiento Evita, para complejizar incluso las formas de acercamiento que han existido entre diversas organizaciones populares y el gobierno, y las consecuencias sobre la relación entre aquellas y el Estado.

Luego, abordaremos la dimensión material de la relación. Con ella nos referimos a las políticas concretas con que el gobierno aborda la problemática del conflicto social. Esto implica dar cuenta de las políticas generales de desactivación del conflicto (crecimiento económico, disminución del desempleo, etc.) en un primer orden y, luego, de las formas concretas que asumen las políticas hacia los movimientos sociales, vale decir, los espacios reales de gestión que se promueven para éstos una vez que la afinidad política está construida.

Estas dos dimensiones en su conjunto nos servirán para pensar de manera más concreta el problema de la institucionalización, ya que podremos atender tanto a la centralidad que el Estado asume en las luchas sociales como a la problemática de la gestión estatal desde la perspectiva de una organización popular, con el fin de reflexionar, en ambos casos, en torno de sus implicancias políticas y teóricas.

(3) El Movimiento Barrios de Pie y el Movimiento Evita: formas del acercamiento

El Movimiento Barrios de Pie

El Movimiento Barrios de Pie (en adelante MBP) nació en diciembre de 2001 a partir de una confluencia de factores. Por un lado, la Corriente Patria Libre (en adelante CPL) considera por entonces prioritario sistematizar y profundizar sus diversos trabajos territoriales, vislumbrando que la organización de desocupados sería, en los años sucesivos, un elemento fuerte para lograr una presencia política relevante al interior del campo popular. Por otra parte, se articulan un conjunto de movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupados -con diferentes tipos de vinculación a CPL- que venían desarrollando variados trabajos en muchos barrios de diferentes provincias de la República Argentina. Durante el 2002, el MBP se asentó en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y en doce provincias de la Argentina.

En los distintos barrios en los que se encuentra, el MBP organiza comedores populares, merenderos, huertas y panaderías comunitarias, emprendimientos laborales, apoyo escolar y alfabetización, talleres de educación popular, bibliotecas populares, campañas de salud y formación de agentes de salud, talleres sobre violencia familiar, actividades vinculadas con la cultura y la comunicación, entre otras. Entre sus proclamas programáticas se reivindican significantes históricos de la tradición nacional-popular: “una Argentina con justicia social, en la que se permita y se promueva la participación democrática de todo el pueblo, para que podamos decidir sobre nuestro destino, libres de la dominación de intereses ajenos a las necesidades de las mayorías”¹⁶.

Los orígenes de la organización pueden rastrearse varios años antes de su conformación como tal. Parte de su estructura de trabajo barrial y su línea política general se montan sobre las múltiples iniciativas abiertas por la CPL, referente político del Movimiento¹⁷. La historia de ésta

¹⁶ Movimiento Barrios de Pie: “Qué es y qué hace el Movimiento Barrios de Pie”, www.barriosdepie.org

¹⁷ La relación entre el Movimiento Barrios de Pie y la Corriente Patria Libre es similar, aunque no idéntica, a la existente entre las agrupaciones piqueteras dependientes de Partidos de Izquierda y éstos últimos. La diferencia radica en que el trabajo barrial es una tradición muy arraigada en la Corriente Patria Libre, mientras que en los otros casos, las organizaciones piqueteras fueron creadas por los Partidos una vez que se evidenció su potencialidad política. En este sentido, mientras sí puede decirse que CPL es la expresión partidaria o política de Barrios de Pie, no puede decirse que la existencia de éste último sea solamente un “brazo barrial” del primero. En 2005, tanto el MBP como CPL se integraron a “Libres del Sur”, un movimiento que agrupó a algunas organizaciones más del “nacionalismo popular” y que se expresó claramente en apoyo del gobierno de Néstor Kirchner.

puede darnos una idea sobre las prácticas y discursos que acercaron al movimiento al gobierno de Néstor Kirchner.

CPL surge a partir del nucleamiento de antiguos militantes del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) de la provincia de Córdoba. Si bien allí tal organización acarrea una tradición muy cercana al nacionalismo revolucionario (incluso al peronismo), de ningún modo puede hablarse de que el origen de CPL sea peronista. Durante los años noventa, su principal bandera fue la reivindicación del Che Guevara y, en menor medida, de Mario Roberto Santucho, es decir, una recuperación de la tradición de la lucha armada revolucionaria de las décadas del sesenta y setenta. Durante toda la década de 1990, el trabajo barrial de la organización se acercó crecientemente a la CTA, en aquel momento ferviente opositora de las políticas del gobierno de Carlos Menem. Esto se profundizó de tal manera que hacia el año 1999, la juventud de Patria Libre comenzó a trabajar en los barrios como “Juventud de la CTA”. Para esa misma época, las tendencias de la organización proclives a acordar con sectores del peronismo de izquierda eran cada vez mayores. El acercamiento de los principales referentes de la organización, Humberto Tumini y Jorge Ceballos a núcleos de este espectro político consumó el proceso. Así, en 1997 y 1999, CPL se presenta a elecciones en el Frente de la Resistencia junto con Jorge Reyna y un grupo de viejos militantes de la organización Montoneros.

En 2001, como decíamos, se constituye orgánicamente Barrios de Pie, con una mayor independencia respecto de la CTA y, fundamentalmente, de la FTV de Luis D’Elía, organización más directamente vinculada a la anterior. En la medida en que la oposición al gobierno era indudable (tales los casos de De La Rúa, y en menor medida, de Duhalde), el MBP compartió múltiples acciones directas e instancias de coordinación con una multiplicidad de agrupaciones piqueteras de izquierda, incluso las vinculadas a los Partidos de filiación trotskista.

Quizá el horizonte del Movimiento, ya desde sus antecedentes y durante toda su trayectoria como tal, sea la idea fuerza de la “liberación nacional”, entendida fundamentalmente en oposición a un enemigo externo, encarnado en esta época en las instituciones financieras internacionales y las potencias extranjeras. La idea de un desarrollo nacional autónomo parece ser el objetivo político, que décadas atrás se encarnaba en el proyecto del socialismo nacional, idea no tan presente en las banderas de nuestros días.

A partir de documentos ligados con los momentos fundacionales de CPL, surge más claramente la inscripción de la misma en la corriente del nacionalismo “popular” o

“revolucionario”, aunque con un espíritu claramente socialista en sus objetivos últimos. CPL apuesta a la construcción de un “Movimiento Nacional”, también llamado “Frente de Liberación Nacional y Social” (coloquialmente denominado como “Frente Popular”). Esta idea se articula sobre la concepción de que la contradicción, más cara al marxismo, *capital-trabajo*, se encuentra en los países periféricos como la Argentina, sobredeterminada por la contradicción entre Imperialismo y Nación (“liberación o dependencia”, en términos de la militancia), que toma la forma de primera contradicción a ser resuelta. De ello se deduce que para el logro del socialismo es necesario plantearse una “estrategia de transición” con un componente de amplitud que puede involucrar sectores de la burguesía nacional. Se admite incluso que tal frente puede, en un principio, no estar hegemonizado por los sectores populares, que darán la disputa en su seno.

En las entrevistas con referentes del MBP¹⁸ en la actualidad, estos planteos programáticos reaparecen, y de algún modo dan lugar a sustentar las políticas actuales de la organización respecto del gobierno de Néstor Kirchner. La apuesta política del movimiento no es vista como una matización de sus primigenios principios programáticos, sino más bien como su *realización*. Esta idea tiene su basamento en una distinción entre “método de análisis” (marxismo) e “identidad” (nacionalismo popular). En este sentido, las prácticas de acercamiento al gobierno se justifican por un “anclaje” del método en la realidad, vale decir, por las *mediaciones* entre teoría y práctica. A la hora de intentar establecer un balance del acercamiento del MBP al gobierno analizaremos qué sucede con este esquema.

De esta manera, es en el núcleo de la soberanía nacional, en torno a significantes muy afines a reivindicaciones históricas del peronismo que el gobierno de Néstor Kirchner pretendió actualizar, que se puede rastrear el hilo de compatibilidad entre éste y el MBP, lo que permite dar inicio a mecanismos de incorporación. Es en su perfil ideológico y político (no simplemente en la “ideología” en sentido llano, como mero conjunto de creencias, sino fundamentalmente en la tradición en la que se inscribe el movimiento –la idea de liberación nacional-) donde puede rastrearse la relación de afinidad entre un gobierno y un movimiento social. En este sentido, debe evitarse el comprender la relación de afinidad como un acto de “traición” o de transformismo, en la medida en que no se trata sencillamente de un cambio en los horizontes políticos de un movimiento, sino de la convicción de que buena parte de dichos horizontes son reconocidos e

¹⁸ Para todo lo referente a las entrevistas y fuentes utilizadas para la investigación, ver anexo, al final del trabajo.

incluso transitados por un gobierno. La profundización de la afinidad se articula al ritmo en que la relación se hace más sustantiva y comienza a contemplar mecanismos de dependencia material.

El gobierno de Kirchner y el Movimiento Barrios de Pie

La conmemoración del estallido social de diciembre de 2001 realizada cuatro años más tarde presentó claras distinciones entre los grupos que apoyaron al gobierno de Néstor Kirchner y aquellos que sostenían posiciones críticas a su respecto. De hecho, los primeros realizaron su acto el día 19, tajantemente separados de cualquier medida general que se tomara al día siguiente. Los organizadores del acto del 20, entre los que resalta como uno de los más relevantes el MBP, expresaron: “Hoy tenemos un gobierno que se preocupa por el pueblo porque es producto de la lucha popular”, al tiempo que remarcaron la importancia de la integración regional latinoamericana¹⁹, leída en términos de articulación entre los diferentes gobiernos de la región.

Esto significa que, a poco más de dos años de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, podía verse una identificación casi plena con su orientación política. Lo que intentaremos desglosar ahora es cómo se fue construyendo dicha empatía, a partir de observar los planos simbólicos y materiales sobre los que se sustenta.

En primer lugar, como fue mencionado, la afinidad surge del discurso “nacional” del gobierno, construido fundamentalmente en oposición a la década de los noventa e intentando retomar banderas “clásicas” del peronismo. En este sentido, tal como lo expresa la declaración recién citada, el propio gobierno es visto como producto de la lucha de los sectores populares contra el modelo neoliberal, de allí que movimientos como el MBP ni siquiera se conciban como externos al gobierno, sino como parte de su base social. Aquí cabe aclarar una circunstancia que refuerza esta cuestión. La llegada de Kirchner al gobierno estuvo caracterizada por cierta debilidad y dependencia política (tanto por el escaso 22% que obtuvo en las elecciones como por su innegable rótulo de “candidato de Duhalde”²⁰), lo que lo urgió a construir un esquema que

¹⁹ Clarín, 20/12/2005.

²⁰ Luego de la crisis de diciembre de 2001, Eduardo Duhalde asumió en enero de 2002 la presidencia provisoria, logrando estabilizar y recomponer el sistema político-institucional. Quedó demostrado, de ese modo, que los resortes de poder real en la Argentina estaban íntimamente ligados con su figura. Sin embargo, dada su impopularidad, no podía ser él mismo el candidato a presidente en 2003, lo que no excluyó una enorme influencia de su parte para ungir al candidato justicialista que ganaría la elección, Néstor Kirchner.

contemplara una base propia de poder, en el cual jugaron un papel importante los piqueteros “oficialistas”²¹.

Así, a lo largo de los primeros meses de gobierno, el apoyo fue cada vez más explícito, al tiempo que crecía el enfrentamiento con el duhaldismo y se tomaban diversas medidas que recuperaban algo de los reclamos que estallaron en 2001. Aquí debe subrayarse el efecto que produjo la política de derechos humanos y cierto discurso de enfrentamiento para con los organismos multilaterales de crédito y otros tenedores de deuda argentina. A partir de estos elementos, las mencionadas organizaciones comenzaron a revisar las duras caracterizaciones que tenían del gobierno, en tanto mero continuador de las políticas de Eduardo Duhalde.

Quizá uno de los momentos cumbre del acercamiento entre el MBP y el gobierno de Kirchner haya sido el acto celebrado en Parque Norte en junio de 2004 como parte de la articulación de los espacios “transversales” de apoyo al Presidente. En el documento central de dicho acto, con presencia de altos funcionarios del gabinete del Poder Ejecutivo, pueden leerse sentencias como las siguientes:

Porque somos conscientes de que el rumbo emprendido [por el gobierno] se inscribe en la confrontación histórica con el imperialismo y las clases dominantes que sustentan sus intereses en nuestro país. En esta contienda, hoy como ayer, coincidimos con Evita en que a la fuerza brutal de la antipatria, le oponemos la fuerza popular organizada

Más abajo se lee:

Nos anima el propósito de poner la movilización y la organización popular en función de impulsar con éxito cambios económicos y sociales más profundos y duraderos. Cambios que sólo podremos alcanzar si somos capaces de construir unidad de concepto y acción entre el gobierno y las fuerzas populares (...)(“Por una Patria para todos”, documento a discutir en el Acto público del 21 de junio de 2004, Parque Norte, Buenos Aires, citado en Svampa y Pereyra, 2004).

Se trata de la misma época en que se comienza a dar una creciente incorporación de diferentes cuadros del MBP a cargos gubernamentales. Aún cuando el caso de Jorge Ceballos²² es emblemático por ser el referente del movimiento, el proceso no se agota, ni por lejos, allí. En

²¹ No es tema de este trabajo indagar en la composición de dicho esquema, pero está claro que los piqueteros “oficialistas” constituyen solo una parte, con cierto peso en el disciplinamiento del resto de los sectores populares. Pero esto no implica que ellos hayan sido los más favorecidos por el gobierno de Kirchner.

²² Jorge Ceballos asume en 2004 la Dirección Nacional de Asistencia Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Volveremos sobre esto cuando analicemos la experiencia de gestión del Movimiento Barrios de Pie.

2006, por ejemplo, en cumplimiento de acuerdos pre-electorales, el área de políticas sociales de al menos tres municipios de la provincia de Corrientes quedó a cargo de la organización, situación que no sólo implica la adquisición de cargos sino, sobre todo, la posibilidad de incidencia en áreas de decisión política muy vinculadas a programas concretos de asistencia social (en el próximo capítulo analizaremos más detenidamente las experiencias de gestión del MBP). Situaciones similares ocurren en varias provincias más del territorio nacional. Es difícil estimar un número, a nivel nacional, provincial y municipal, pero puede arriesgarse que más de una centena de funcionarios de diverso orden eran parte del MBP o, en su defecto, de Patria Libre.

En palabras de un referente de Patria Libre, hoy en Libres del Sur, el proceso de acercamiento del MBP al gobierno tiene varias aristas: intenta expresar la capacidad del campo popular de arrancar concesiones a un Estado más permeable que el de la década anterior, intenta aprovechar el capital simbólico que Kirchner acumula en aquellas cosas con las que el movimiento coincide (disputa con FMI, militares, etc.). En este caso, no es tan relevante para el movimiento si las posturas del gobierno son retóricas o reales, lo definitivo es la brecha que se abre para plantear estos temas como elemento de trabajo sobre el campo popular.

El caso del MBP expresa la tensión entre las posibilidades que abre un gobierno “progresista” y los límites que encierra. Para analizar y realizar un balance de esta compleja relación podríamos tomar dos elementos: por un lado, las posiciones de los propios actores y, por el otro, los efectos más generales de las políticas del gobierno en relación con los movimientos sociales; tanto sobre el propio MBP como sobre los vínculos y la capacidad de coordinación en el seno del campo popular. En el primer caso, tanto los documentos consultados como las entrevistas realizadas expresan una clara conformidad con las opciones políticas tomadas por el movimiento. Se coincide en que la organización ha crecido en peso y presencia en el campo popular y que su integración al gobierno “nos hace más conocidos, despierta simpatías y genera atractivo”. Al mismo tiempo, se subraya la experiencia que se está acumulando en términos de gestión en puestos de gobierno. En tal sentido, las proyecciones son optimistas y hablan de un posible “salto” cualitativo para los años venideros.

Con relación al segundo elemento de análisis planteado, son los propios entrevistados y documentos quienes dan cuenta de dos problemas centrales que se juegan en la relación con el gobierno: la *autonomía* y la *relación con otros actores del campo popular*. En el primer caso, se coincide en que se trata de un elemento central de toda construcción popular pero que, al mismo

tiempo, debe ser rediscutida a la luz de los sucesos contemporáneos. La autonomía es, de alguna manera, *inscripta* en la relación con el gobierno: “estamos ocupando espacios desde la gestión de este gobierno, con el que coincidimos en un montón de cosas y en otras no. Creemos en la autonomía que hay que tener para saber plantear lo bueno y lo malo. Somos parte pero somos autónomos porque decimos qué es lo que nos parece”. La autonomía es pensada dentro de una problemática que no se cuestiona *per se* la disputa *en* el gobierno ni el problema del Estado, sino los márgenes de oscilación entre la iniciativa propia y la adscripción a las políticas oficiales.

Como vimos, la afinidad aparece ligada a la recuperación de ciertas banderas por parte del gobierno que producen identificación en consignas del movimiento y del campo popular en general. A partir de allí, se revisan las consideraciones previas acerca del Estado y, dando por iniciada una nueva etapa, se apuesta por pelear desde el interior del mismo, considerando que allí hay mayor potencialidad que manteniéndose a distancia. En tal sentido, el eje adentro/afuera del Estado del cual buena parte de la izquierda es acusada de sobrevalorar es desplazado por un eje funcional/no funcional, donde la lucha que involucra asunción de cargos ejecutivos e identificación con el gobierno puede ser más disruptiva y constructiva que posiciones extremas o de aislamiento “anti-institucional”. Así, la autonomía será una cuestión de acuerdos o desacuerdos con tal o cual medida de gobierno. En línea con esta perspectiva, puede leerse, por ejemplo, la oposición del MBP tanto a la reelección del Gobernador Rovira en la provincia de Misiones como a la elección del rector de la Universidad de Buenos Aires, ambos eventos en los que el gobierno estaba interesado²³. En resumen, la autonomía es la que se puede imponer, vale decir, está supeditada a la correlación de fuerzas y el MBP considera que su construcción tiene como proyecto crecer en tal sentido, aún cuando requiera momentos en que su integración al gobierno parezca casi total e incluso produzca dificultades políticas ligadas con la asimetría desde la cual se buscan construir transacciones con el gobierno. Ejemplo de esto fue la salida de Ceballos del Ministerio de Desarrollo Social luego de que su candidatura a intendente en el municipio de La Matanza no fuera refrendada por Néstor Kirchner, quien inclinó su favor a un postulante propio del aparato justicialista tradicional (vale aclarar que una vez pasadas las

²³ El gobierno de Néstor Kirchner apostó en la provincia de Misiones a una reforma constitucional que permitiera la reelección del gobernador Rovira. Esto supuso un rechazo generalizado que aglutinó a la oposición y que involucró a parte de los aliados del gobierno, entre ellos el MBP. En el caso de la UBA, frente a los reclamos generalizados de democratización del cogobierno universitario –que contaban, nuevamente, con el frente universitario del MBP entre sus impulsores-, el gobierno apoyó la elección del rector Rubén Hallú en el marco de una cuestionada asamblea universitaria.

elecciones, que obviamente favorecieron al candidato justicialista, Ceballos volvió a su antiguo cargo por ofrecimiento de la nueva presidenta Cristina Kirchner, del que saldría nuevamente en 2008 cuando el MBP retira su apoyo al gobierno).

Este último punto nos lleva a la cuestión de la situación general del mapa de movimientos sociales y el modo en que el gobierno opera en tal sentido. La relación del MBP con otros sectores políticos considerados de izquierda se ha visto modificada de manera sustantiva a partir de su afinidad con el gobierno. A la luz de los años que siguieron a diciembre de 2001, es claro que el campo de organizaciones populares en un sentido amplio ha recorrido múltiples fragmentaciones, algunas ligadas con una cultura política ya arraigada en la izquierda argentina y muchas otras con los posicionamientos políticos y las relaciones establecidas con el gobierno: si bien los propios entrevistados admiten que “Kirchner rompe el campo popular”, consideran que eso se debe a las definiciones que hay que tomar. Y dados los presupuestos políticos y la tradición del MBP, la apuesta fue por el acercamiento al gobierno, a partir de la convicción de que allí se podía operar de manera más certera en pos de los objetivos del campo popular y no sólo de su propia organización. De manera que la relación con la izquierda va debilitándose, al punto de constituirse como una entidad externa: la “izquierda” pasa a ser una categoría que define otros actores y que suele caracterizarse por ver las cosas “blanco o negro”, esto es, por llevar adelante una política que si es de oposición es homologable a la oposición de derecha al gobierno. Al margen de que, tal como lo analizamos anteriormente, algunos sectores de la izquierda -sobre todo partidaria- confluyan en sus críticas al gobierno con voceros de la derecha neoliberal, es curioso que sea el MBP, que incluso compartió en muchas ocasiones la calle con esos sectores, el que recoja esta crítica. Vale decir, es de suponer que el propio gobierno plantee la situación en estos términos, pero cabría preguntarse si no hay algo en el orden de la autonomía de las organizaciones populares que se está sacrificando cuando se hace empatía con ese discurso. Sobre todo, teniendo en cuenta que a partir de allí se inaugura una fragmentación en el seno del campo popular que supone incluso la disputa de los espacios simbólicos (“disputar a la izquierda las calles”, según reza un documento de la organización) y que, en conjunto, reduce la capacidad general de movilización de los sectores subalternos.

Gobierno en disputa

Los documentos, discursos públicos y entrevistas a miembros de la organización permiten pensar en un eje directriz de las prácticas de la organización en los últimos años. Se trata de la idea de que el gobierno de Kirchner abre una etapa de disputa por inscribir transformaciones de la correlación de fuerzas sociales a nivel estatal, lo que al mismo tiempo tendría una potencial repercusión en la sociedad en su conjunto. La centralidad del Estado como articulador de la formación social –tal como vimos, con su particular expresión en América Latina- es, en este punto, un elemento central de la lectura del MBP respecto de la coyuntura actual. En ese sentido, dar cuenta de ello produce efectos mucho más fortalecedores para las organizaciones que empalmen sus políticas en esta dirección que para aquellas que se preservan sosteniendo críticas respecto del carácter “retórico” de los cambios emprendidos por gobiernos de tinte “progresista”. Tal es el caso del MBP, que reconoce esto sobre una base que podría plantearse en dos planos: por un lado, la idea de “construir unidad de concepto y acción entre el gobierno y las fuerzas populares”. El MBP se sitúa a sí mismo como parte de esas fuerzas populares que se asumen como necesarias para la concreción efectiva de los proyectos transformadores que el gobierno pueda pretender. Por otro lado, aparece la cuestión de orden estratégico: los propios entrevistados se describieron “sorprendidos” por el discurso confrontativo que asumió Néstor Kirchner en los primeros meses de su gestión (la organización había llamado a votar en blanco). El hecho de que el gobierno retomara reclamos muy fuertemente planteados en los últimos años por el campo popular –derechos humanos, Corte Suprema, relación organismos internacionales- pareció abrir la posibilidad de profundizarlos y trabajarlos de cara a la sociedad. En torno de esto último es donde se constituye la idea del “gobierno en disputa”.

Más allá de la coincidencia en las reivindicaciones, es preciso subrayar que la posibilidad misma de la afinidad con el gobierno es más profunda: se funda en la existencia de una tradición compartida. Aquí se observa un peso muy fuerte de la dimensión simbólica de toda lucha social. La “liturgia” *nacional y popular* propia de los discursos de gobierno es el punto de partida para producir las condiciones de posibilidad de la relación misma. Desde allí renacen las concepciones políticas más ligadas al peronismo revolucionario de la década del setenta (volveremos sobre esta similitud en el capítulo cinco): el gobierno es vivido como un ámbito privilegiado de la disputa

social. Incluso sus diferentes miembros expresarían proyectos políticos en pugna, por lo que resulta imprescindible la participación popular para torcer esa disputa hacia posiciones progresivas. De modo que la lectura política del MBP expresa una concepción del gobierno como un espacio de *condensación* de las contradicciones que pocos años antes se sostenían entre el Estado y las organizaciones populares en el seno de la sociedad civil, como entidades ajenas entre sí. En este punto, quizá aparece una lectura que no enfatiza en los límites de la disputa al nivel del Estado y sí en sus potencialidades. Además, cabría preguntarse por las condiciones históricas específicas de esta disputa en relación con épocas anteriores, tanto en el plano internacional (¿qué márgenes brinda el Estado para la construcción del “proyecto nacional”?) como en lo relativo a la movilización social (¿en qué medida puede construirse una movilización social que efectivamente *tuerza* el rumbo del gobierno hacia posiciones más radicalizadas?). Obviamente, se trata de preguntas abiertas, cuya respuesta no es otra que el devenir de la propia lucha, pero que fueron estructurantes de buena parte de la disposición del mapa de movimientos sociales en la Argentina²⁴.

El Movimiento Evita: el gobierno produce sus propias bases

El Movimiento Evita (en adelante ME) tiene su origen en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Evita, surgido en 2002 en el marco de la aparición de múltiples organizaciones de ese tipo, frente a la acuciante necesidad de los trabajadores desocupados de organizarse en el contexto de la profunda crisis que estalló en 2001²⁵. Dentro de la importante cantidad de MTD's que surgen, el ME es quizá el único que se reivindica abiertamente peronista, más allá de que muchos contaban con militantes que venían de experiencias peronistas, cuando tal cosa tendía a ser identificada con “la vieja política” que era responsable de la debacle en que se encontraba sumido el país. Sus cuadros más renombrados –Emilio Pérsico y Santiago Martorelli- habían atravesado los noventa en la organización *Quebracho*. Rompiendo con esa experiencia y sumando a otros espacios como *Resistir y Vencer* y *Malón*, ambos con trabajo territorial desarrollado en el conurbano bonaerense, configuran el MTD Evita y luego el ME.

²⁴ Cabe recordar aquí que la presente investigación llega centralmente hasta el año 2007, por lo cual no analizamos en profundidad la salida del kirchnerismo del MBP. De todas formas, haremos alusión a esto en los próximos apartados.

²⁵ Si bien las organizaciones de desocupados preceden al 2001, momento en que adquirieron mayor visibilidad, es a partir del estallido que se multiplican sensiblemente.

Estos diversos grupos políticos tienen como características comunes la identidad peronista y, al mismo tiempo, la clara separación respecto del derrotero del peronismo en los noventa, inscribiéndose allí en la resistencia a lo que denominan la “cooptación”²⁶ del grueso del PJ por parte del neoliberalismo menemista. Más atrás en la historia, algunos de sus dirigentes provienen de Montoneros en la década del setenta (incluida la contraofensiva durante la dictadura, en el caso de Pérsico) y un paso por la renovación peronista en los ochenta. También confluyeron otros dirigentes con trayectorias algo diferentes, como es el caso del “Chino” Navarro, que pasó por la experiencia del Partido Intransigente.

En el año 2003, con la asunción de Kirchner, se produce una profunda transformación en el MTD Evita, que da lugar al nacimiento del ME. En función de la nueva coyuntura, se considera que es necesario insertarse en la discusión política que comenzaba a expresarse en términos estatales; así se construye la idea del ME, donde el MTD pasa a ser un frente de masas (territorial) que además comienza a exceder el trabajo con desocupados, ligándose también a las diferentes formas de trabajo precario que proliferan en el país en el marco de la recuperación de la crisis. Se constituyen otros frentes en virtud de diferentes conflictos que son leídos como constitutivos de la época, principalmente Mujeres y Juventud.

Aunque, estrictamente hablando, la organización no es conformada desde el kirchnerismo, su más importante salto organizativo (del MTD Evita al ME) está estrechamente ligado con aquél. No sólo por la lectura política de la etapa, sino por los contactos concretos con figuras del naciente gobierno que operan activamente para la conformación del movimiento como parte de la estrategia general de construcción de apoyos en organizaciones populares. Tanto Oscar Parrilli, Secretario General de la Presidencia y encargado de las relaciones con los movimientos sociales, como Carlos Kunkel²⁷, conocido de Emilio Pérsico de la militancia común en Montoneros, tienen incidencia en la conformación del ME y en su perfil autodefinido como “ultrakirchnerista”: la idea del ME respecto del kirchnerismo es que éste puede contener y superar el armado del peronismo sobre la base de una amplitud de fuerzas populares heterogéneas que lo apoyen. Al

²⁶ Al igual que con el concepto de cooptación para explicar la relación entre movimientos sociales y kirchnerismo, de poco sirve para dar cuenta del giro neoconservador del PJ en los noventa. Más que explicar como el neoliberalismo “compró” voluntades entre los dirigentes justicialistas, sería mejor comprender por qué ellas estaban “en venta”, todo lo cual nos lleva a pensar en la necesidad de ahondar en las causas de la *hegemonía* neoliberal de los noventa más que en la “traición” de algunos personajes de la política. Para un interesante desarrollo de este problema, véase Bonnet (2008)

²⁷ Carlos Kunkel ocupó la Subsecretaría general de la Presidencia entre 2003 y 2005, cuando asumió como diputado nacional. Fue, desde el año 2001, una de las figuras más cercanas a Néstor Kirchner en su armado político.

mismo tiempo, el horizonte del ME es el del kirchnerismo, pues se considera que la posibilidad de que las organizaciones populares avancen está *supeditada* a que el gobierno avance, ya que no existen alternativas más dinámicas por fuera del gobierno²⁸. De allí que, en palabras del propio Emilio Pérsico, “El Movimiento Evita se armó para dar esta batalla, cuando se acabe haremos otra cosa”. Esto significa que lo que estructura al ME como tal es la disputa que el gobierno expresa en términos estatales. Aún cuando se reconoce que no se participa de las decisiones políticas estratégicas (en términos electorales, es claro que los movimientos sociales no son la carta principal del kirchnerismo), se considera que se debe participar como base de apoyo en términos de contribución a la búsqueda de una salida popular a la crisis política desatada en la Argentina en el ocaso del neoliberalismo.

Para desarrollar este último punto es importante detenernos por un momento en la caracterización que el ME hace de la etapa política abierta en el 2001, a fin de comprender su posición respecto de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Para el ME, con el ocaso de las políticas neoliberales y el dispositivo político que sustentaron, se abrió en la Argentina una “etapa de transición política”, donde la cuestión crucial es dirimir el problema del poder en el país, hoy en disputa. En este sentido, el salto “hacia la intervención política” (esto es, de MTD Evita a Movimiento Evita) está pensado para incidir en el direccionamiento de las políticas de Estado y construir herramientas de organización para el campo popular. El apoyo incondicional al gobierno se sustenta en la convicción de que éste favorece efectivamente la construcción de una correlación de fuerzas más favorable a los sectores populares por medio de múltiples medidas que son acompañadas por el ME en tanto se consideran de carácter popular.

Esto no impide ver al propio movimiento que los sectores “más dinámicos” (vale decir, los movimientos y organizaciones populares) al interior del kirchnerismo no han avanzado tanto como se hubiera esperado, en parte por limitaciones propias y en parte porque el “clima” de la sociedad en general fue cada vez menos propenso a este tipo de discursos. Aún así, la función principal que el ME se asigna en su lectura coyuntural es la de dar la disputa por la orientación de la salida de la transición política en la Argentina hacia posiciones más favorables a los sectores populares, para lo cual el sostenimiento y apoyo incondicional del gobierno es interpretado como un punto de partida. Aunque se espera que el “saldo” sea más organización para los sectores

²⁸ Dijo Emilio Pérsico en un discurso de mayo de 2006: “El Movimiento Evita es indivisible, compañero presidente, de las políticas de Estado. Este Movimiento no tiene destino si a usted le va mal presidente, si a los argentinos les va mal. Porque nuestra estrategia es la estrategia central del gobierno” (Revista Evita, Año II, número 7)

populares, lo cierto es que las preocupaciones del ME como tal están centradas en apuntalar el proyecto actual, como elemento que permita revertir la fragmentación del campo popular y reinstalar la cuestión de la política “antes de pensar en la revolución”. En este sentido, el núcleo de dirigentes (más “ideologizado” que el movimiento en general) admite que no se trata de una organización “de izquierda”, precisamente porque la tarea de la época no es pensar en la superación del capitalismo sino en una serie de transformaciones estructurales que contribuyan a construir una correlación de fuerzas más favorable a los sectores populares.

En este camino, la configuración del ME contó, además de con las fuerzas provenientes del MTD Evita, con la incorporación de dirigentes nacionales de diversas provincias y con distintas trayectorias, contando hoy con algunas vice-gobernaciones y jefaturas de gabinete comunales. Se estructura así lo que será abiertamente una estrategia de disputa por lugares en el Estado, intentando exceder las áreas de desarrollo social tradicionalmente cedidas a organizaciones de origen popular. En un sentido general, el propósito es más bien la construcción y crecimiento de la propia organización y la lucha por orientar las políticas estatales hacia los sectores populares en general y sus organizaciones.

En su rol de organización decididamente oficialista, el ME ha acompañado todas las iniciativas del gobierno, especialmente aquellas ligadas con la disputa al interior del peronismo. En este afán por conquistar posiciones de poder en el Estado, la mayor experiencia fue la de Emilio Pérsico en el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el año 2005, como vice-jefe de gabinete del gobernador -entonces kirchnerista- Felipe Solá. La importancia de ese cargo no radica solamente en su considerable peso relativo en la gestión sino en que le dio proyección nacional al Movimiento, permitiéndole crecer en varias jurisdicciones a partir de su experiencia en la provincia. Crecimiento que se sostuvo al menos hasta el año 2007, cuando comenzaron a revelarse algunos problemas que a continuación mencionaremos. Pero antes de ello, es importante subrayar que la participación en 2005 en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires está íntimamente ligada con la cruzada contra el duhaldismo que entonces se propuso Néstor Kirchner.

En ese mismo sentido, aunque sea un tiempo después, debe leerse el apoyo incondicional del ME a la idea de Kirchner de “recuperar” el PJ, apoyo que por cierto lo distancia enormemente del MBP, cuyas críticas más fuertes y virtual retirada del kirchnerismo estuvieron estrechamente ligadas con su rechazo a la “pejotización del proceso”:

El compañero Néstor Kirchner se dispone a transformar el Partido Justicialista para ponerlo al servicio del Proyecto Nacional y para convertirlo en el centro del dispositivos de articulación con otras fuerzas políticas y sociales dispuestas a acompañarnos en la ciclópea tarea de cambiar las estructuras económicas, institucionales, sociales y políticas que nos llevaron a la decadencia. La transformación del peronismo y la recuperación del partido será un avance decisivo en la reconstrucción del Movimiento Nacional²⁹ (“El Movimiento Evita en la reorganización del Partido Justicialista, Documento de la Mesa Federal del ME, 15 de febrero de 2008)

Con el acompañamiento sin condiciones de Pérsico en particular y del ME en general a Kirchner en el re-encuadramiento del PJ, se entra en una situación algo compleja y paradójica, en la medida en que la disputa del ME en los barrios tenía que ver con rescatar la identidad peronista desde una diferenciación con la estructura tradicional del PJ.

Al mismo tiempo, se asume que la necesidad del PJ está ligada con una imposibilidad de los sectores “más dinámicos” de construir herramientas políticas superadoras que sirvan de base de apoyo del gobierno. De ahí que se admita la necesidad de “neutralizar”³⁰ al PJ como posible oposición al gobierno, teniendo en cuenta que se trata de la principal estructura política del país y que, por ende, también allí puede disputarse poder. Todo lo cual no quita que el ME sea consciente de que el PJ no es la organización que va a encabezar un proceso de transformación en el país, pero se considera su encuadramiento como una condición necesaria para la estabilidad del proyecto (luego profundizaremos en la lectura que el ME realiza de la idea de “estabilidad” y “cambio” al interior del kirchnerismo).

Como decíamos, el recurso al PJ como estructura política se cruza con un momento de reflujo en el crecimiento de los movimientos sociales kirchneristas, a partir de la creciente dificultad de éstos de capitalizar políticamente las iniciativas y los espacios que el gobierno abre. A la vez que los movimientos participan cada vez menos en la elaboración de esas iniciativas, el humor social no les permite sacar provecho de ellas. Un entrevistado definió esto del siguiente modo: “El problema es que el sujeto político en la Argentina es el gobierno: tiene iniciativas y

²⁹ Aunque en el próximo apartado nos referiremos más en detalle a las diferencias entre el ME y el MBP en su caracterización del proceso y en particular del resurgimiento del PJ, cabe adelantar que el MBP tiene una posición absolutamente contraria a la aquí esgrimida por el dirigente del ME. Para aquél, el retorno de Kirchner al PJ es prácticamente la carta de defunción del proyecto nacional y popular que los convocó en 2003. La Juventud de Libres del Sur suele cantar en sus últimas manifestaciones: “No queremos un partido, un partido liberal, queremos un movimiento nacional y popular”.

³⁰ En una visita de Néstor Kirchner a la Biblioteca Nacional en el marco de una asamblea del Espacio Carta Abierta, éste formuló algunas ideas sobre la reorganización del PJ muy afines a esta noción de neutralización: “Tengo que confesarles que la decisión de asumir como presidente del PJ fue por un pedido de Cristina. ¿Se imaginan lo que pasaría hoy si otro fuera el presidente?” (En Diario Página/12 del 14 de julio de 2008)

voluntad política, pero si no acumulás con el gobierno no tenés nada, no hay saldo para las organizaciones”. Aunque el kirchnerismo sigue constituyendo el rumbo estratégico del ME, es poco lo que queda para la organización en sí (y en general para las organizaciones), con un gobierno que hegemoniza de manera casi unilateral la iniciativa política, vale decir, que primero lanza medidas y luego construye o espera los apoyos para sostenerlas³¹.

Frente a estas cuestiones, y en tanto movimiento con una estructura de poca organicidad, el ME se encuentra en un momento de relativa crisis, en virtud de que toda la diversidad que se podía enmarcar en su interior hasta el 2007 tiende, dos años después, a exceder los lábiles bordes del espacio político del ME. Así, conviven posiciones encontradas, por ejemplo, en relación con diversos armados al interior del PJ, y en las posiciones ligadas con algunas jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires (donde partes diferentes del ME apoyan y critican, respectivamente, al Gobernador Scioli). Los vaivenes del kirchnerismo no ayudan a evitar la desagregación del movimiento, por lo que algunos de sus dirigentes consideran que el proceso puede agravarse de no encontrar un lugar fuerte para reubicarse al interior del proceso político actual. Aún así, desde su perspectiva, el balance es más que positivo, en tanto el ME ha mostrado un notable crecimiento en los últimos años, no sólo en números o en recursos, sino en la disputa política que le permitió participar –aunque no de manera protagónica– en la escena principal de disputa de poder en la Argentina.

El Estado en disputa: estabilidad y cambio

Vimos que el ME considera al kirchnerismo como una etapa de transición política donde la característica central es que las políticas del gobierno garantizan la oportunidad de disputar el Estado en mejores condiciones y fortalecer desde allí a las organizaciones populares³². Traducido en términos de estrategia política, esto implica que no hay un proyecto propio que se considere autónomo (aunque más no sea relativamente) del gobierno, sino que se parte de la necesidad de fortalecer al gobierno porque eso es fortalecer a la propia organización. Asimismo, esta visión

³¹ Si bien, como sostuvimos antes, la fortaleza del gobierno se sustenta en recuperar banderas históricas de las luchas sociales de los últimos años, lo cierto es que lo hace no bajo la forma de “ceder” a la presión de tal o cual sector sino como una iniciativa propia que en todo caso luego es reconocida por diferentes actores u organizaciones. De ese modo se configuraron políticas como las de derechos humanos o las estatizaciones de empresas privatizadas.

³² En el mismo discurso, antes citado, de Pésico se puede leer: “El Estado es el compañero presidente y cada gorda nuestra que revuelve la olla en los barrios. Todo eso es el Estado en la concepción nuestra y ustedes son parte de ese Estado, por ustedes es que tenemos fe”.

supone un nivel de pragmatismo que permite acuerdos tácticos con sectores que difícilmente puedan considerarse parte del “campo popular”, pero que son considerados cruciales para sostener la estabilidad del proceso en curso (tal es el caso de varios sectores del PJ con los que el ME ha acordado).

El ME utiliza una interesante figura para graficar su lectura política de la actual coyuntura (su sencillez se debe a que tiene por objeto poder trabajarse en todos los frentes de la organización): la tensión que atraviesa el kirchnerismo, irresoluble por el momento se estructura entre la *fuerza de la estabilidad* y la *fuerza del cambio* . La primera está ligada con la “gobernabilidad”, esto es, con la necesidad de apoyo en las estructuras existentes con el mero objeto de que el proceso no se caiga. La segunda, por su parte, se sustenta en la posibilidad de que el proceso sea empujado hacia lo que puede constituirse desde el campo popular. Obviamente, el Movimiento Evita se sitúa en la segunda de las fuerzas, pero, al mismo tiempo, esta caracterización le permite acompañar algunas opciones que toma el kirchnerismo que, para otros espacios –como el caso del MBP en relación con el PJ-, son difíciles de asimilar. En última instancia, la garantía que el ME esgrime es que siempre que las dos fuerzas fueran más o menos equivalentes, Kirchner optó por la del cambio.

(4) El conflicto social en el Estado: la gestión desde la perspectiva del MBP

Hasta aquí hemos analizado los condicionantes de la afinidad entre determinados movimientos u organizaciones sociales y el gobierno de Néstor Kirchner. Hicimos especial hincapié en la dimensión “simbólica” que permite construir el acercamiento. Pero, consideramos que para dar cuenta de los modos en que el Estado *institucionaliza* el conflicto social, es necesario tener en cuenta diversas dimensiones de la relación que se establece entre aquél y las organizaciones populares: por un lado, la mencionada dimensión simbólica, que permite el acercamiento de las organizaciones a la gestión estatal en el marco de un determinado proyecto de gobierno, lo que supone atender a los rasgos que permiten una identificación entre ambos, vale decir, la posibilidad de inscribirse en una misma historia o tradición política. Al mismo tiempo, y en estrecha relación con la anterior, existe una dimensión que podríamos denominar material, sustentada en primer lugar en las políticas concretas que posibilitan la relación de afinidad y, luego, en los recursos materiales que circulan desde el Estado hacia las organizaciones.

En esta sección analizaremos esta segunda dimensión. Asimismo, nos introduciremos en la arista del problema que alude a las formas específicas en que se produce lo que llamamos institucionalización: esto es, los mecanismos concretos de funcionamiento de las lógicas políticas dentro del aparato estatal, que dan cuenta del modo en que el conflicto social es canalizado *por* y reconducido *a través* del Estado. Allí tendremos en cuenta las lógicas de gestión estatal (y de construcción política en relación con ellas) vinculadas con el grado y las posibilidades de desarrollo, para las organizaciones populares, de capacidades de crecimiento e intervención en el sentido de sus propósitos políticos.

Cuando nos referimos a las políticas concretas con que el gobierno aplaca el conflicto social y, al mismo tiempo, fortalece su relación con determinadas organizaciones populares, debemos tener en cuenta dos “niveles” donde las mismas se desarrollan. El primero, amplio, alude a una estrategia general de crecimiento económico y del empleo en la Argentina luego de la crisis de 2001. La misma tiene por efecto necesario una desactivación del conflicto social, aunque más no sea por el alivio inmediato del humor popular que supone la mayor disponibilidad de trabajo, aún cuando remarcaremos algunos aspectos fallidos y/o pendientes de dicha recuperación. El segundo nivel está ligado con políticas específicas hacia los sectores sociales activos, en el marco de lo que mencionamos como movilización selectiva y no como mera “desmovilización”. Aquí se incluye las implicancias en términos de cargos, tareas, recursos y

agencias estatales de la incorporación de organizaciones populares, donde tomaremos el caso del MBP. La repercusión de los cargos en la lógica de construcción política, así como su impacto en las prácticas al interior del movimiento constituirán el puente entre este apartado, donde analizamos las políticas de descompresión del conflicto (desde la estrategia general de crecimiento hasta la incorporación de sectores políticamente activos) y el próximo, donde damos cuenta del problema de la gestión estatal desde la perspectiva de un movimiento social.

La recuperación económica

Diciembre de 2001 implicó un quiebre en las luchas de los sectores populares en la Argentina. Podría decirse que allí entró en crisis un retroceso que se remonta a la última dictadura militar. El estallido se da en el marco de una profunda crisis que supone enormes tasas de desempleo y una sostenida recesión que llevaba ya tres años. En este contexto, las periferias urbanas constituían indudablemente una reserva de trabajadores desocupados que, en algunos casos y a partir de diferentes determinaciones, tendieron a organizarse y dar lugar al auge de los Movimientos de Trabajadores Desocupados. La gran virtud de éstos fue la iniciativa de generar, en el marco de la crisis del trabajo como regulador de la vida social, formas autogestivas de sostenimiento de la comunidad, en la mayor parte de los casos sobre la base de la ayuda estatal recibida en virtud de la lucha por conseguirla y gestionarla de manera autónoma.

Ahora bien, la capacidad de estas organizaciones de expresar un potencial político que marca la historia reciente de la Argentina, no les permitió, sin embargo, desligar su fuerza organizativa del condicionante material inmediato que les había dado semejante proyección: la cuestión de la falta de trabajo. En la medida en que se produjo una parcial recuperación del empleo, la proporción de personas que permanecían en las organizaciones por convicción política (no ya por la necesidad) fue considerablemente baja y las actividades de estos espacios tendieron a diversificarse y, al mismo tiempo, a perder fuerza y presencia pública.

En este sentido, la estrategia general de crecimiento implementada en la Argentina a partir de 2002 y principalmente durante el gobierno de Néstor Kirchner, supone una forma de descompresión del conflicto social a partir de una política general que no apunta solamente a los sectores movilizadados sino más bien a la recomposición del consenso al nivel de la sociedad en general.

Para colocar esto en términos de algunas cifras significativas: durante el gobierno de Néstor Kirchner, la creación neta de puestos de trabajo asciende a más de tres millones, implicando, además, un incremento del empleo registrado del 27,7% acumulado entre 2003 y 2007. Por su parte, la explosión de planes asistenciales en el marco de la crisis fue dando paulatino paso a un crecimiento en empleo formal, contándose cerca de 700.000 trabajadores que pasaron del Plan Jefes y Jefas de Hogar a algún tipo de trabajo regular (Tomada, 2007).

Tomando la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Atorresi, Berhó, Zelarayoun, 2006) es posible ver que entre mayo de 2003 – cuando asume la presidencia Néstor Kirchner- y mayo de 2006 el empleo relevado creció un 26%. Pero otros dos datos resultan todavía más relevantes para el tema que nos ocupa:

-De los nuevos puestos de trabajo generados en los tres años mencionados, la mayor proporción está en los no calificados, con casi un 40% del total.

-El 80% de los nuevos puestos generados durante el período corresponde al denominado “empleo efectivo”: además de registrado, por tiempo indeterminado. De esta manera, está caracterizado, por una importante estabilidad.

Aunque esta información denota cambios en condiciones fundamentales de la experiencia cotidiana de los sectores populares, también es importante reseñar algunos datos que dan cuenta de la ausencia de transformaciones estructurales en los patrones de acumulación y distribución de la riqueza en la Argentina. Algunos trabajos del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (Lozano, Rameri y Raffo, 2007a; 2007b) remarcan indicadores que debilitan los efectos positivos de la creación de puestos de trabajo. Por caso, los altos índices de subocupación, empleo clandestino y sobreocupación, con el empleo en negro todavía rondando el 40% de la población. Al mismo tiempo:

La reducción de la desocupación es muy inferior al aumento que ha tenido el nivel de actividad económica. Así, mientras el PBI se expandió un 14,7% comparando los niveles de actividad actuales con los del año 1998, la desocupación sólo se redujo entre ambos años 3,9%. Lo expuesto es el resultado de la vigencia de un modelo caracterizado por colocar naturaleza en el mercado mundial, abastecer con bienes y servicios el consumo de los sectores medios-altos y de altos ingresos y comprar en el exterior lo que aquí no se produce. La ausencia de estrategias que replanteen las condiciones de desigualdad vigentes articulando el consumo popular con la puesta en marcha de un nuevo perfil productivo y un nuevo esquema de especialización, es lo que explica la diferencia entre el mayor aumento de la actividad económica y el menor descenso en el desempleo (Lozano, Rameri y Raffo, 2007a: 2).

La persistencia de condiciones de funcionamiento de la economía que no suponen una ruptura radical con los últimos treinta años es también comprobable atendiendo los datos sobre la relación entre crecimiento y distribución de la riqueza. Mientras el 30% de la población de mayores recursos se apropia del 62,5% de los ingresos generados, el 40% de la población con ingresos más bajos alcanza la escasa proporción de 12,8%. De modo que “en el marco de la recuperación de la actividad económica, las condiciones de funcionamiento de la economía local (elevada concentración y extrema desigualdad) no se modifican” (Lozano, Rameri y Raffo, 2007b:2).

Planteados estos datos y hechas las consideraciones sobre lo que implican en términos generales, podemos arriesgar sus efectos sobre los barrios periféricos que constituyeron la base de organización de los movimientos de desocupados. Desde el punto de vista del propio Humberto Tumini³³, principal referente de Libres del Sur a nivel nacional, la creación de riqueza que supuso el crecimiento continuo durante cinco años, aún cuando reconoce que la distribución no haya supuesto transformaciones profundas, tuvo por consecuencia que “prácticamente en todos los núcleos familiares pasó a haber por lo menos una persona que consiguió trabajo”. Así, frente a la mengua en la relevancia social de la problemática de la desocupación, las fuerzas que pretendían traducir políticamente esa problemática tendieron a sufrir procesos de reflujo en el marco de los cuales sus voces perdieron potencia. En el caso específico del MBP, veremos cómo esta cuestión atraviesa también sus decisiones de incorporación a la gestión.

La institucionalización en movimiento, los movimientos en la gestión

Así, con la disminución relativa del problema de la desocupación y su traducción política, también se planteará en el seno de las organizaciones populares la necesidad de rever las cuestiones tácticas ligadas con los sujetos sociales que se pretende interpelar. En el caso del MBP, esto también confluye con las tensiones prácticas y las discusiones internas que supone la incorporación a diversas áreas de gestión estatal, tanto en el plano nacional, como en el provincial y municipal.

El principal objetivo de este apartado es analizar la experiencia de gestión del MBP atendiendo a los problemas y tensiones que surgen de la novedad implicada en que una

³³ Entrevista realizada por Marcelo Gómez en diciembre de 2008. Disponible en www.libresdelsur.org.ar

organización popular acceda a cargos, recursos y tareas del Estado, tradicionalmente vinculadas con la burocracia permanente y con sectores políticos generalmente ligados a actores territoriales pero no a movimientos sociales, sino a las estructuras punteriles propias de la política argentina de las últimas décadas. De hecho, desde la percepción de los miembros del MBP (y de las organizaciones populares afines al kirchnerismo en general), su presencia en el aparato estatal supuso una novedad y una disputa respecto de las formas tradicionales de gestión. El carácter abiertamente político y la pretensión transformadora de los militantes que trabajan en los espacios institucionales se opondría al letargo o la complicidad de los agentes estatales clásicos, al menos de las últimas décadas: tanto los “expertos” –cuyo saber técnico es denunciado como inherente al vaciamiento del Estado en los noventa-, como los “burócratas” o “administrativos” –caracterizados por la falta de compromiso con el trabajo en el Estado- y, por último, quienes forman parte de la “política tradicional” –más específicamente del PJ o el “duhaldismo”- constituyen una parte fundamental de aquello que se pretende transformar al interior de la gestión estatal.

De este modo, para el MBP, se puede distinguir un motivo político general para el acceso a la gestión, pero también propósitos específicos muy ligados con su experiencia como organización territorial. En el primer caso, el sustento político está dado por lo ya dicho: se inscribe en su estrategia de integrar un frente o proyecto nacional, aún a sabiendas de que ni su organización ni sectores afines lo hegemonizan. En la medida en que el kirchnerismo, en particular en sus primeros años, es leído como un *gobierno en disputa*, se decide participar del mismo y apuntalar la dimensión popular del proceso.

Pero, en términos de su propósito específico en las áreas asumidas, los objetivos centrales estarán dados por la necesidad de transformar la relación entre Estado y territorio. Sobre la base de las experiencias propias de construcción territorial, se apunta a que –en términos de un militante de MBP con experiencia en el programa “Promotores territoriales”- “el Estado llegue al territorio y el territorio al Estado”. El nudo de esta concepción se halla en la posibilidad de multiplicar y potenciar la participación popular en las decisiones estatales, apuntando a transformar tanto la forma como el contenido de las políticas públicas, especialmente las políticas sociales y educativas, áreas en que el MBP tuvo mayor presencia en distintos niveles gubernamentales. Lo interesante es que la incorporación, una vez dada la afinidad política con el gobierno, es leída desde el MBP como una continuidad con el trabajo territorial. En este punto,

coincidimos con Perelmiter (2009), quien propone una secuencia de tres ideas que componen la narrativa que da sentido a la incorporación a la gestión de políticas sociales: *paralelización del Estado, oficialización de los movimientos y territorialización del Estado*. La primera remite a aquellas tareas de contención social que los movimientos afrontaron en los años más agudos de la crisis y que, de algún modo, supusieron un parcial remplazo práctico de las tareas que el Estado no afrontaba. La segunda está ligada con el reconocimiento estatal de esa práctica, vale decir, con la incorporación de esa experiencia a la gestión de las políticas sociales. La última está dada por el que aparece como el aporte específico que los movimientos podrían darle a la gestión: la llegada al territorio de un modo novedoso, no ya a través de estructuras clientelares locales sino con un espíritu militante y un permanente incentivo a la participación popular.

De modo que se constituyen dos dimensiones relativamente diferenciadas en la relación del MBP con la gestión estatal. Por un lado, en términos políticos generales, en tanto se coincide con aspectos centrales del rumbo tomado por el gobierno y se considera estratégicamente apropiado integrarse a él, la aceptación de cargos es posible y deseable. Por otro lado, en términos específicos, se espera que la gestión potencie las prácticas del movimiento sobre la base de su experiencia ya existente. El campo propiamente intra-estatal supuso para el MBP un espacio desde el cual desarrollar políticas de acuerdo a sus propósitos como organización, apuntando a abrir un campo de disputa en los modos en que las políticas sociales y educativas se proyectan y ejecutan. Veremos, de todos modos, que la segunda dimensión termina por estar supeditada a la primera, ya que, en última instancia, la profundidad de esta disputa es subsidiaria de una correlación de fuerzas capaz de imponer transformaciones sustantivas en los modos de gestión estatal y en los actores que históricamente estuvieron a cargo de las políticas sociales. Retomaremos esta cuestión cuando atendamos al balance que los militantes del MBP hacen de la experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social.

El caso más saliente de gestión del MBP fue sin dudas la experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde la organización primero estuvo a cargo -por medio de Jorge Cevallos, uno de sus principales referentes- de la Dirección Nacional de Asistencia Comunitaria, entre 2004 y 2006, y luego de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular hasta el año 2008, con un “interregno” en 2007 a causa de la inhibición que el gobierno impuso a Libres del Sur para que presentara la postulación de Ceballos a la intendencia de La Matanza, en una lista “colectora” de la candidatura presidencial de Cristina Fernández de

Kirchner³⁴. Sin embargo, no es la única experiencia de gestión, por el contrario, existen múltiples casos a niveles provinciales y municipales. Además de aludir a la Subsecretaría conducida por Ceballos, tomaremos un caso de los más trascendentes para la organización, tanto por su duración como por la magnitud de los recursos manejados y el relativo “éxito” en algunos de los objetivos que el MBP se planteó a la hora de asumirlo. Se trata de la experiencia en educación llevada adelante entre 2005 y 2007 en la provincia de Buenos Aires. En ella encontraremos condensadas las intenciones políticas de la organización popular en la gestión de los recursos estatales y las potencialidades y límites que éstos traen aparejados.

Tal como mencionamos anteriormente, los orígenes de esta experiencia deben buscarse en las prácticas de la organización anteriores tanto a la gestión como, incluso, al gobierno de Néstor Kirchner. En este caso particular, remiten a los trabajos de alfabetización que el MBP venía llevando adelante en diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires, particularmente en el Partido de La Matanza³⁵. El mismo se realizaba a través del programa cubano “Yo sí puedo”. Entre 2003 y 2004, se avanza de manera sustantiva con la alfabetización en barrios, siempre sobre la base de un trabajo militante con escasos recursos. Los resultados eran alentadores en la medida en que accedían importantes cantidades de gente excluidas de los ámbitos escolares tradicionales, aun los de adultos. Pero el límite estaba dado por la imposibilidad de cumplir las expectativas de que las personas continuaran sus estudios o terminaran la escuela. Así es como se comienza a presionar al gobierno nacional para que oficializara el programa y lo dotara de recursos para extenderlo y multiplicarlo. Esto se realiza junto con otros espacios que llevaban adelante tareas de alfabetización y que además compartían posiciones de apoyo al kirchnerismo naciente.

De este modo, en el año 2004 se logra la creación de un programa propio del Ministerio de Educación de la Nación, frente a la negativa de aceptar, tal cual se proponía, un programa proveniente de Cuba y totalmente manejado por movimientos sociales. El Ministerio

³⁴ El peso sustantivo de Alberto Balestrini –candidato a vice-gobernador de la Provincia de Buenos Aires- en el armado de dicho distrito no solamente explica la negativa a Libres del Sur a llevar a Cristina Fernández como candidata a presidenta, sino que también sirve como ejemplo de la disputa desigual que el MBP intentó llevar adelante contra los resabios de “duhaldismo” y el “pejotismo” en el kirchnerismo. Disputa que hoy es unánimemente dada por perdida por el movimiento y que explica su alejamiento del gobierno en 2008.

³⁵ Uno de los distritos más importantes para la organización es el de La Matanza. Allí no sólo hay desarrollos territoriales avanzados sino que también es relevante la presencia de Libres del Sur en el orden sindical, particularmente entre los maestros, cuestión que será importante en el caso que estamos analizando.

confecciona, de este modo, el programa “Encuentro”³⁶ y abre, además, un espacio de coordinación entre los movimientos que participarían del mismo: coordinados por Mary Sánchez como representante del gobierno, son parte del mismo el MBP, el Movimiento Evita, la FTV y el Frente Transversal. Por medio de convenios con municipios, este espacio permitía que los movimientos participaran de la alfabetización en diversos lugares del país. Según Marcelo, uno de los referentes del MBP en este proyecto:

El grueso, el ochenta por ciento, de la gente que se alfabetizó lo hizo a través de los movimientos sociales, que eran los que le daban vida, porque llegábamos hasta el último de los barrios y teníamos voluntarios, cosa que ningún gobierno provincial tenía

La experiencia que estamos relatando conjugará los elementos que antes mencionábamos en cuanto a la concepción de su participación en la gestión que guía al MBP: la existencia de una práctica del movimiento que precede a su relación con el Estado, la búsqueda por potenciarla a través de ese vínculo y la certeza de que buena parte del proyecto se juega en la “territorialización”, esto es, en que los recursos y programas estatales lleguen al territorio a través de la experiencia militante de la organización.

Es la provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno del entonces kirchnerista Felipe Solá, la que tomará con más fuerza y apoyo este programa. Se suscribe en 2005 un acuerdo entre la provincia y el ministerio por medio del cual la primera reconoce la necesidad no sólo de alfabetizar sino de completar la educación de los alfabetizados. Al mismo tiempo, se reconoce el plus que los movimientos pueden aportar a la iniciativa por cuanto se plantea que es insuficiente la apertura de vacantes y que es necesario coordinar un programa para que la oferta llegue a todos los barrios, tarea que facilitarán los movimientos, por lo que será nuevamente la idea de que “el Estado llegue al territorio” la que orientará las tareas específicas de la participación del MBP en la gestión de este programa. Así, los movimientos plantearán que debe haber una política de “ir a buscar” a los estudiantes, y no una mera apertura de vacantes. En palabras de Marcelo: “un ejército de militantes en el territorio que te permita contactar hasta la última de las personas que no haya terminado la primaria”.

³⁶ Si bien el programa Encuentro apunta también a herramientas básicas de alfabetización, resulta más dificultoso que el “Yo sí puedo”, porque las clases no están grabadas como en éste último, donde solamente es necesario un “facilitador” que coordine la actividad. Mientras que en el “Encuentro” se trabaja sobre la base de métodos de gráficos, disparadores y una participación más activa del coordinador, por lo cual el voluntario tiene que contar con una instrucción mayor. Esto supuso algunas trabas para los militantes territoriales de los movimientos sociales.

Aunque el acuerdo se lanza con Mario Oporto como ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, poco tiempo después asume Adriana Puiggrós, cuya gestión recuerdan los militantes del MBP como sumamente abierta para sus iniciativas. Es en ese contexto que el programa se cristaliza en la Dirección Provincial de Políticas Socio-Educativas, nuevamente coordinada por Mary Sánchez y con la participación de los mismos movimientos, a modo de réplica del área del Ministerio de Educación de la Nación.

Lo interesante de esta experiencia es que la misma da cuenta de las complejidades que supuso para el MBP el hecho de lidiar con la burocracia estatal en un proyecto que toma la forma de una política oficial. Como señalábamos anteriormente, estas aparecen bajo dos formas diferentes: en términos políticos, por la fuerza de la iniciativa a nivel gubernamental (esto es, la voluntad política de quienes toman las decisiones clave de que el proyecto se lleve adelante), en términos administrativos, por los problemas que surgen en términos de “competencia” con la burocracia permanente y de trabas propias de la gestión estatal.

Pues de lo que se trataba era de encarar de manera conjunta, entre los movimientos sociales y las agencias de educación de adultos de la provincia de Buenos Aires el diseño y la planificación de políticas de alfabetización y finalización de la escuela. Una de las grandes apuestas del MBP en este sentido, fue que los programas respetaran la dinámica de los talleres que se venían haciendo desde los movimientos antes de que se tomara esta iniciativa desde el Estado. Eso supuso algunas diferencias con las formas tradicionales de la educación para adultos, principalmente una menor cantidad de tiempo y días de clase y la centralidad de que se realicen en los barrios y no en centros alejados del territorio: “buscábamos mantener la estructura de lo que hacían los movimientos pero potenciarlo con los recursos del Estado, que si no los pone al servicio de *una causa boba*”. Nuevamente es el territorio el que define el sentido y la valoración del destino de los recursos del Estado.

Ahora bien, todo esto supuso muchas discusiones al interior de la Dirección Provincial de Políticas Socio-Educativas y, sobre todo con la rama de adultos del Ministerio de Educación de la Provincia. El MBP esgrimió “que los docentes tienen que tener un perfil distinto, planteamos que había que hacer una capacitación, que tenía más que ver con lo ideológico, que con lo pedagógico”. ¿Qué implicaba esto? Era necesario, desde la perspectiva de los movimientos, transformar la práctica pedagógica de la educación de adultos sobre la base de su experiencia, esto es: “El logro fundamental había sido la cercanía, ir al barrio, dar la clase en una silla de tres

patas, eso era lo que queríamos incorporar. Había que llevar a los docentes a los barrios, eso fue la capacitación ideológica”. Así, confluyeron en el programa cuarenta docentes de movimientos sociales y cuarenta de la rama de adultos, para ser capacitados en este nuevo programa. En todos los casos se trataba de docentes en ejercicio que eran invitados a desplazarse hacia éste: mientras los cuarenta de los movimientos asumen las tareas, menos de la mitad de la rama de adultos lo hace. Se presentaron en este plano una serie de trabas de orden burocrático que dan cuenta de la dimensión del problema de la gestión estatal, aún cuando existe la voluntad e iniciativa política para llevar adelante políticas sostenidas por organizaciones populares.

Por un lado, apareció una cuestión en el límite entre lo ideológico y lo burocrático; dice Marcelo: “¿Cómo se tradujo toda esta discusión entre los docentes, en el gremio?: “vienen los piqueteros a quitarnos el trabajo””. Aquí se combina el problema de la competencia entre actores y agencias al interior del Estado como expresión de una lucha política con prejuicios de orden más coloquial. En cualquier caso, lo que evidencia es una traba para la construcción al interior del aparato estatal, que se complementa con el problema de la “inercia” que caracteriza a las formas tradicionales de gestión estatal: “Yo creo que hay una falta de proyecto en los agentes del Estado, no creen en el proyecto de país. Vos ves la cantidad de compañeros trabajadores del Estado que lo hacen sin ningún entusiasmo, entonces vos ves que esa figura del trabajador del Estado como un vago, que no hace nada, lamentablemente en algunos casos se da porque no hay compromiso con el proyecto”. Tras esto aparece uno de los objetivos de los más entusiastas militantes del MBP y de buena parte de los movimientos que participan de esta experiencia: devolverle al Estado una (supuesta) misión pública hoy degradada y sumida más bien en una mezcla de inercia burocrática y manejo político conservador. Volveremos luego sobre esto.

Esta experiencia confluye con debates internos a la organización y algunos cambios de orden táctico en relación con los sujetos sociales en pugna. Mencionábamos anteriormente lo que implicó la caída de la desocupación en términos de la proyección política de las organizaciones que centran sus reivindicaciones en el ámbito territorial. Esta cuestión aparece muy fuertemente en el MBP. Si buena parte de su crecimiento entre el 2001 y el 2003 estuvo dado por el trabajo con desocupados, a partir de la recuperación económica propia del gobierno de Néstor Kirchner esta estrategia de crecimiento entra en crisis. Según los entrevistados, son los propios referentes barriales de la organización los que comienzan a conseguir trabajo, en muchos casos formal y en blanco:

Empezamos a pensar que tenemos que ir a una transformación como movimiento, de ser un movimiento de desocupados, teníamos que pasar a ser un movimiento de ocupados y desocupados y que, teníamos un doble desafío: construir una herramienta política que reflejara nuestro crecimiento, porque ya estábamos dentro de un gobierno y de una disputa social, por reivindicaciones, pasábamos a una disputa política, por cargos, lugares en las listas, etc. Por eso armamos Libres del Sur. En la provincia, decimos que tenemos que dar un paso en educación y trabajo

Desde aquí puede leerse en una doble dimensión el paso que la organización da como profundización de la experiencia de la Dirección Provincial de Políticas Socio-Educativas. Tanto por la necesidad de trascender la problemática de la desocupación como por la convicción de buscar crecimiento al interior del gobierno, el MBP le pide al gobernador Felipe Solá, en 2006, una dirección provincial exclusivamente para la organización. Específicamente, se trata de la Dirección Provincial de Educación y Trabajo, lo cual supone un desafío para el movimiento, tanto en su afianzamiento de lazos políticos con Solá y Puiggrós como en el abordaje de la problemática del trabajo en relación con la educación, vinculando de ese modo la cuestión educativa, largamente atendida por la organización con la problemática del trabajo, inscripta en la lectura de los cambios coyunturales en términos de sujetos sociales, con un descenso relativo de los desocupados en paralelo a una creciente importancia de la cuestión del trabajo en diversas dimensiones, que serán las que intentarán abordarse desde el nuevo espacio institucional al que se accedió.

Por su parte, el gobierno provincial accede en la medida en que también le resultaba útil afianzar relaciones con los movimientos sociales y, en el caso específico de la mencionada dirección, la misma se encontraba a cargo de un espacio político que respondía al duhaldismo y que, además, tenía vínculos con el Opus Dei. Adriana Puiggrós tenía un interés particular en renovar esa área y la presión del MPB fue, en ese sentido, funcional a sus pretensiones.

En agosto de 2006, asumen en esta Dirección Laura Velasco (coordinadora de educación de MBP), Mónica Perello y Marcelo Toledo, todos relevantes cuadros políticos de la organización. El propósito de la Dirección está centrado en la educación técnica, contaba en 2006 con un fondo anual de 64 millones de pesos destinados al reequipamiento de escuelas técnicas de la provincia. En la medida en que la educación técnica atravesó una fuerte crisis a partir de la desindustrialización propia de la década del noventa, se daban, frente al crecimiento en la demanda de empleo, faltantes sostenidos de personal capacitado. Esto implicó un importante

desafío para la organización: el área era relativamente nueva, el movimiento tenía experiencia en territorio y alfabetización pero ciertamente no la tenía en educación técnica. Se trataba de capacitar en oficios a los que estaban por fuera del trabajo formal: desocupados, cooperativas, movimientos, etc. La disputa estaba dada porque esos recursos solían ir a sectores de la iglesia y algunos grandes gremios que tenían a su cargo estas tareas y que las encaraban con un perfil político asistencial más tradicional.

Por otro lado, el equipo era pequeño y en lo que iba del ejercicio anual, la Dirección tenía un alto índice de sub-ejecución presupuestaria, por lo que estaba por perder parte de su presupuesto. Nuevamente, el perfil con que el MBP encarará esta tarea será el de fortalecer la relación entre Estado y territorio: la estrategia se centrará en que el programa “llegue a todos lados”, sobre la base de un armado de referentes en cada barrio que pudiera potenciar la participación de cada centro en la gestión del programa. Anteriormente, las ofertas de re equipamiento simplemente aparecían en la página web de la dirección, de modo que sólo accedían las escuelas con más experiencia que son, además, las que suelen estar apadrinadas por empresas privadas o sindicatos y sus necesidades son menores. Por esta “inercia burocrática”, en términos de los entrevistados, seguían siendo beneficiados los que estaban en mejores condiciones. Por ello, el objetivo fue de nuevo el de llegar más lejos en el territorio y aumentar la participación. Los obstáculos, asimismo, fueron nuevamente de orden político y burocrático: la gestión saliente instaló la desconfianza hacia la organización: “¿qué saben los piqueteros de esto? Se van a robar todo, porque no saben nada. La gestión que se fue instaló el miedo entre los que laboraban ahí”. En términos burocráticos, nuevamente aparece el problema de la falta de identificación de los agentes estatales con el proyecto político, con la inercia que ello produce.

La disputa es entonces por “romper la inercia”, e instalar el problema del proyecto transformador al interior del aparato estatal: esto supone lidiar con los agentes “indiferentes”, pero también con quienes están políticamente en contra. En palabras de un entrevistado:

A nosotros nada nos daba igual. El Estado es un espacio en disputa, nosotros éramos una pequeña fuerza en eso: entre los restauradores (en la provincia hay mucho duhaldismo), los que hacen la plancha, los que no les importa, etc. Hay que juntar masa crítica para combatir esto, pero son pocos los lugares que se abrieron y poca la fuerza para pelear ahí adentro.

Esto último nos da pie para analizar también el problema de la relevancia política de los espacios que se abren para movimientos sociales y el poder real con que cuentan para dar esas

disputas. Antes de ello, abordaremos algunos aspectos de la experiencia de gestión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS).

Tal como fue dicho, esta experiencia comienza pocos meses después de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación. La incorporación a la gestión está ligada con una caracterización política de la que ya hablamos, y de la cual vale subrayar aquí la idea de la posibilidad de disputar no solamente en el seno del gobierno, sino de plasmar en el aparato estatal una presencia que represente los intereses de los sectores populares. Ello estaría dado, en el plano de las políticas sociales, por tres elementos que se pretenden transformar respecto de lo que se venía haciendo en ese campo desde el MDS: universalidad, participación, territorialización. Las conclusiones, adelantamos, son que ninguno de los tres se alcanzó, al menos de manera novedosa.

Durante los años de permanencia de la organización en el MDS (en la Dirección Nacional de Asistencia Comunitaria hasta la creación de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular), impulsó y participó de diversos programas que apuntaban precisamente en dicha dirección. El relato de los entrevistados que participaron en esta experiencia es bastante más pesimista en sus conclusiones que el caso antes relatado de la provincia de Buenos Aires. Si allí, a pesar de los diferentes escollos y trabas políticas y burocráticas, se resaltaba que hubo una llegada real a los sectores populares en los programas manejados, en el caso del MDS se subrayan tanto el escaso margen de maniobra en términos políticos -y, en consecuencia, el fracaso de las iniciativas emprendidas, al menos en relación con las expectativas políticas que despertaban en función del proyecto de la organización- como las dificultades para lidiar con la burocracia del MDS.

De hecho, existieron una multiplicidad de programas³⁷ que tuvieron llegada y un éxito relativo en el cumplimiento de sus metas pero que resultaron relativamente irrelevantes en términos de los propósitos políticos de la organización: por caso, las llamadas “Prácticas de Oficios Populares”, que involucraron diversas instancias de formación y capacitación (para mujeres desocupadas, personas con discapacidad, personas en contexto de encierro, formación en saberes ligadas con experiencias comunitarias, pueblos originarios, etc.), diversas experiencias de educación popular y, en términos generales, una variedad de programas que apuntaban a

³⁷ Los programas son tomados de los Informes de Acciones de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular entre 2006 y 2008 y de las entrevistas con los miembros del MBP que allí trabajaron.

fortalecer a las organizaciones comunitarias de los barrios, ya sea mediante la reconstrucción de su historia (“Contalo Vos”), la capacitación de sus dirigentes (“A Paso de Vencedores”) o intentando incorporarlas a los espacios de resolución de las problemáticas locales (“Promotores territoriales”). Todos estos programas son relatados como experiencias interesantes de contacto con el territorio pero absolutamente insuficientes respecto de las expectativas que la incorporación a la gestión había generado en muchos de los militantes de la organización. Dice Rolando:

Vos caés en una estructura con características determinadas y creés que con tu accionar podés darle dinamismo a eso. Al principio organizamos en el territorio con actores de ahí foros llamados “Gestión, participación popular y nuevo Estado”. Eso te muestra con elocuencia la expectativa. Vos llegaste con ese pedo en la cabeza, te das cuenta que esto es un monstruo, que vos tenés una oficinita acá, en un edificio de 22 pisos que funciona así hace un montón de años. Mezcla de empleados sin ganas con restos de duhaldismo, menemismo, alfonsinismo, dictadura... Ahí es donde vos caíste con tu pedo de “gestión, participación popular y nuevo Estado”. Por más oportunidad política y esperanzador que haya sido el primer momento de los K, tenías un límite que los excedía a ellos, a su voluntad política, que es esta historia de la institución. Eso te va marcando un margen de acción. Al final nos reíamos: “te acordás de los foros de “Nuevo Estado”?”

Precisamente en relación con la apuesta política, quizá el caso más interesante es el del programa “Promotores Territoriales para el cambio social”. Definido por Sebastián como “un fiasco, el gran fiasco del Estado, la gran mentira que les hicieron a las organizaciones sociales”, su objetivo era crear y fomentar una inmensa red de promotores territoriales en todo el país que articulara las organizaciones e instituciones existentes en cada barrio de modo de diagnosticar las problemáticas específicas y atenderlas de manera participativa. Surgido en el 2004, su objetivo político velado –y que entusiasma enormemente a los movimientos sociales- es el de disputar el territorio con el PJ tradicional, en momentos en que éste no respondía a Néstor Kirchner. Las organizaciones populares cercanas al gobierno serían, en ese sentido, un elemento crucial en la construcción de apoyo popular, de modo que podrían acrecentar su influencia en el proyecto kirchnerista y encarnar de manera sustantiva la voz de los sectores populares en su interior.

De este modo, el proyecto implicó una amplia convocatoria a organizaciones sociales afines al gobierno que incluía también la idea de que los programas del ministerio “bajaran” a través de los promotores, evitando a las tradicionales estructuras punteriles locales ligadas con el duhaldismo. Sin embargo, las elecciones del 2005 son marcadas como un punto de quiebre para el programa (y para el proceso en general). Paradójicamente, el arrasador triunfo de Cristina

Férrnandez de Kirchner sobre Hilda “Chiche” Duhalde en la candidatura a senador por la Provincia de Buenos Aires no supuso otra cosa que el paso de las estructuras antes duhaldistas al dominio de Kirchner. Allí empieza, para los entrevistados del MBP, el liderazgo “de hecho” del PJ por parte del entonces presidente. Frente a ello, el gobierno habría tomado la opción política de dejar de disputar con esa estructura y, por el contrario, comenzar a apoyarse mayormente sobre ella como garantía de gobernabilidad, en lo que dio en llamarse coloquialmente “pejotización”³⁸.

El efecto sobre el programa “Promotores” fue, para las organizaciones, muy problemático. Si bien el proyecto continuó y su estructura se sostuvo, resultó mucho más débil de lo esperado en tanto “renovación” de las políticas sociales. El programa implicaba diagnósticos territoriales, incluyendo actores locales y problemáticas específicas, en todo el país, formulados de manera participativa con las organizaciones como ejes ordenadores en sus territorios. A partir de allí podría procederse a atender de forma más eficiente las cuestiones locales acercando el territorio al Estado y viceversa: “Se hicieron convocatorias enormes y muy buenas, pero después no arreglamos ni un foquito de luz, porque los recursos terminaron pasando por donde siempre pasaron históricamente. En el barrio quedamos muy mal parados porque convocábamos desde el Estado, pero con el prestigio ganado durante años como organización”.

En este plano, se subraya el problema político dado por la falta de iniciativa transformadora por parte del kirchnerismo: “las prácticas pasan a ser las mismas del PJ pero rodeadas de un chamullo progre”. Allí, la experiencia resulta incluso contraproducente, porque si bien la organización logra potenciar su voz en los barrios a partir de su participación en la gestión estatal, cuando no puede cumplir con las expectativas generadas pierde más que por la mera “promesa no cumplida”, ya que en esa apuesta también se ha puesto en juego la historia de la organización en el territorio.

Volvemos aquí a las dos dimensiones que atraviesan la experiencia de gestión para el MBP, y para las organizaciones populares en general: la disputa política y la racionalidad burocrática. La primera involucra la capacidad del propio movimiento de crecer al interior del

³⁸ Como señalamos anteriormente, cuando explicamos la afinidad simbólica y la opción estratégica del MBP por el kirchnerismo, la cuestión de la ruptura con el gobierno como objeto de análisis queda fuera del marco temporal de la presente investigación. Sin embargo, la “pejotización” (priorizar la estructura peronista tradicional por sobre las fuerzas alternativas que apoyaban el proceso) de la construcción política del kirchnerismo es presentada como su principal razón. Como vemos aquí, antecedentes de ella pueden rastrearse claramente desde el año 2005 y tuvieron su correlato en materia de gestión de las áreas que la organización tenía a cargo.

gobierno y, a su vez, la iniciativa de éste para darle espacio y apoyo en los ámbitos de gestión. La segunda incluye desde las falencias y problemas propios para gestionar hasta la existencia de una serie de mecanismos y estructuras que dificultan sensiblemente el trabajo de la organización en el ámbito estatal. En tanto organización, el MBP no ha realizado un balance riguroso que permita explicar los escasos resultados -en relación con lo esperado- de su participación en el MDS, por lo cual de acuerdo a los diferentes entrevistados pesa más o menos cada uno de los factores a la hora de caracterizar las dificultades con que el movimiento se encontró en la gestión. Si bien todos aluden a ambas dimensiones, son diferentes los énfasis resaltados.

En general, ante todo se rescata la experiencia atravesada en tanto aprendizaje para el movimiento, no así para los objetivos propios de los programas asumidos:

Podemos tener un balance positivo de *nuestra* participación, que nos sirvió como organización más allá del balance general que es malo. Fue bueno como experiencia concreta, pudimos ser parte de un “proyecto nacional”, o algo que se le parezca, que era la estrategia nuestra. Pero, para mí, este Estado está podrido, de los cimientos, hay que tirarlo abajo y hacerlo de nuevo. Es imposible hacer entrismo desde espacios de poder mínimos. O se entra con poder o se construye algo nuevo

Reaparece aquí el énfasis puesto en los límites políticos dados por la carencia de espacios de *poder real* para el MBP, así como para cualquiera de las organizaciones populares que apoyaron al gobierno. En este sentido, se consideran defraudadas las expectativas que generó el gobierno de Néstor Kirchner en sus primeros años. Si en un principio se considera que era una expresión positiva del proceso social que tiene su pico en el 2001, esta visión se trunca en la medida en que el lugar otorgado a los movimientos sociales es totalmente secundario, el proceso de construcción política se concentra en la figura del Presidente y las organizaciones populares (“la cara nueva”) son postergadas. En términos específicos de la gestión de políticas sociales, eso hace que no se transforme la situación real de los sectores populares –beneficiarios de las mismas- ni los modos en que los recursos se distribuyen.

Cabe poner esta cuestión en perspectiva con la figura del “gobierno en disputa”, cuya importancia para la estrategia de la organización ya subrayamos. La misma supone que el MBP sería expresión de los sectores subalternos en una disputa dada al interior del gobierno, a su vez expresión general de una disputa existente al nivel de la sociedad. Pues bien, aquí no solamente se considera que tal lucha se ha perdido, sino más bien que no ha podido darse de manera real: “La correlación de fuerzas de nuestra cosmovisión con las otras era desfavorable”. Como dijimos,

esta “cosmovisión” está ligada centralmente con la apertura de la participación y la territorialización de las políticas sociales. Sin la iniciativa política necesaria, no pudo quebrarse la lógica asistencialista que rige tradicionalmente las prácticas del MDS.

En términos generales, entonces, se coincide con que faltó la iniciativa política del gobierno para romper los modos tradicionales de gestión y abrir espacios reales a los movimientos. Ahora bien, ello no implica que no haya habido escollos o dificultades propiamente administrativos o burocráticos, ligados con los problemas implicados en que la gestión de un área determinada del Estado sea asumida por organizaciones populares.

En este sentido, algunas de las cuestiones que reconocen los entrevistados están relacionadas con la falta de experiencia propia pero también con cuestiones que excedían la voluntad y la capacidad de la organización. En el primer caso, aparece dado por la dificultad para manejarse en el marco de actores heterogéneos que supone el MDS, tanto –en términos de autoridad- por arriba como por abajo. Aquí el problema no sólo surge de la existencia de múltiples instancias de oposición a las políticas propias sino simplemente por la necesidad de coordinación. “Aprender a conducir gente que no está encuadrada en la organización”, aún cuando sus ideas o proyectos son afines, no resulta nada sencillo. Asimismo, el problema se presenta en tanto es necesario un proceso de aprendizaje de las técnicas de gestión propias del MBP. Técnicas que no son, por supuesto, meros conjuntos de saberes sino sobre todo estrategias de gestión de los equipos propios del ministerio, con la heterogeneidad antes mencionada:

Los primeros tres que entraron en la dirección contaban que eran tres en una oficinita y que nadie les daba pelota. No sabíamos cómo se hace. Al mismo tiempo, algunas coordinaciones que estaban por debajo no nos respondían políticamente o tenían línea directa con la secretaría. Entonces muchas veces respondían a eso y no a lo que pedías vos

Aquí la falta de experiencia aparece vinculada con otra cuestión que es central para nuestro análisis: el problema propiamente burocrático-político al interior del Estado. Más coloquialmente, la tradicional idea de la “máquina de impedir”. En términos de la experiencia del MBP, esto se traduce en que a la poca iniciativa política transformadora del gobierno y al escaso poder *real* con que contaban las organizaciones populares para modificar las formas de gestión debe sumarse la lógica burocrática que tiende a dominar la acción cotidiana de los agentes estatales.

Aunque su distinción del problema político es de orden analítico, no es menor la especificidad de este problema. Aún cuando de hecho puede ser expresión de cuestiones políticas es importante resaltar su singularidad, ya que sobre ese fondo se palpa de manera práctica la naturaleza del Estado: “En el ministerio cada espacio de poder se defiende con todo. Si no da la orden la ministra no llegaba nada; nos demoraban expedientes, nos hacían de todo. Nadie quiere ceder la iniciativa”. Pero, y esto es lo particular de la gestión estatal, aún con iniciativa política los resultados no son los esperados. De hecho, los entrevistados coinciden en los elogios a Alicia Kirchner en términos de la apertura a las organizaciones que supuso su gestión. Incluso es precisamente ese carácter más abierto y participativo de la gestión del MDS el que produce resistencia en la burocracia permanente del Estado. No sólo por los “resabios duhaldistas” que allí pudiera haber, sino simplemente por la incomodidad que suponían los cambios en la gestión, así como por el escaso compromiso de los agentes con el proyecto político en curso, ya señalada por los entrevistados respecto de la experiencia en la Provincia de Buenos Aires. Allí aparece un “techo” vinculado con circuitos administrativos muy difíciles de agilizar. Encarnados quizá en la burocracia de planta permanente, tampoco se agotan allí, sino que la exceden en la medida en que se presentan como una serie de reglas y procedimientos impersonales que frustran muchos de los proyectos de la organización: “Por ejemplo, municipios donde querías impulsar algo nuevo (tipo Lanús o Quilmes, donde se había derrotado al duhaldismo) y te encontrás con que los municipios tienen deudas con el ministerio y no se puede hacer nada...”

Por otro lado, la falta de compromiso de la media de agentes estatales aparece una y otra vez. Por caso: “Muchos trabajadores sociales intentaban mejorar su salario en función de los viáticos, más allá de cualquier compromiso con la política que se llevaba adelante”. O, de manera más terminante, casi a modo de exabrupto: “este Estado está re podrido, hay que derrumbarlo y hacerlo de nuevo, acá nadie quiere laburar, los tenés que echar a todos: los funcionarios son pejotistas, los burócratas no quieren hacer nada y los técnicos creen en los técnicos, no en otra cosa”. Cuando la organización asume el desafío de la gestión lo hace desde la idea de cambiar el enfoque de las políticas sociales. Dice Rolando: “Teníamos dos objetivos: transformar el Estado y fortalecer la organización. Eso determinaba con quiénes articulábamos: aspirábamos a darle un rol a las organizaciones, fortalecer la participación y la organización comunitaria”. Lo interesante es que Rolando, como trabajador social, contaba con experiencias de trabajo en el Estado pero por fuera de la organización. Las diferencias parecían muchas pero no eran tantas: “Es diferente

el concepto y el enfoque. En otros lugares es sólo tu buena voluntad pero sos parte de un engranaje que te supera”. El problema de los obstáculos de la gestión es que la organización misma termina siendo parte de ese engranaje, lo que nos lleva al último elemento de este apartado: los efectos de la experiencia de gestión sobre la organización.

El mismo Rolando dice: “si a vos te come la dinámica del Estado, terminás reproduciéndola. No es casualidad que nos hayamos ido. Corrés el riesgo de pejetizarte con el gobierno. Si no podés balancear, terminás teniendo un mero rinconcito, y no sirve para nada. Cuando vimos que éramos eso, nos fuimos”. Volvemos aquí a la cuestión de las expectativas no realizadas en la experiencia de gestión. Pero se agrega el problema de cómo la organización lidia con esos escollos. En general, se coincide en que el hecho de ser una organización con años de historia y una cohesión interna importante ayudó a evitar la posible desarticulación dada por los problemas que la gestión iba suscitando.

Frente al interrogante por las prácticas que han debido modificarse a partir de las necesidades de la gestión, se mencionan más bien transformaciones de orden logístico, pero pocas en un sentido político fuerte. Dado que la estructura del MBP consta de diversas áreas de funcionamiento, sucedió de hecho que el área de gestión creció en importancia, dado que desde allí se coordinaban las distintas experiencias en los diferentes niveles gubernamentales. Asimismo, sucede que por necesidades políticas la gestión puede aparecer, por momentos, en tensión con la construcción de organización. Tal fue el caso de Marcelo, referente del área sindical de la organización, que debió dejar sus tareas de construcción en el sindicato de maestros de La Matanza para dedicarse a la mencionada experiencia de la Provincia de Buenos Aires: “tu cantera de militantes no es infinita. Cuando tenés que abordar tres o cuatro tareas simultáneamente, ese era el mayor problema: los frentes, la militancia, la gestión, etc. Por momentos hubo que elegir entre gestión y construcción”.

Ahora bien, lo realmente interesante es el desafío político implicado. Al respecto, Marcelo dice: “hay una tensión política que subyace todo el tiempo: ¿hasta dónde ser parte de la gestión te condiciona políticamente? Nosotros decimos que somos independientes, si nos tenemos que ir, nos vamos”. El problema aquí estaría dado por la pérdida de autonomía (cuestión que ya tratamos) y el miedo a ser, en términos de los entrevistados, cooptados. Esto se daría cuando las críticas son silenciadas sólo con el objetivo de mantener las posiciones de gestión: “La tensión se sostiene si tenés una organización fuerte, te cooptan si te callás las críticas o si un tipo termina

respondiendo a la gestión tradicional y no a la organización. A nosotros nos salva tener una organización muy cohesionada ideológicamente”. Reaparece entonces la *reserva* del MBP para atravesar la experiencia de gestión. Esto es importante porque muchos de los grupos que entraron fueron efectivamente desarticulados o perdieron algunos de sus referentes (nombrados funcionarios) en tanto dejaron de responder a la organización.

De ese modo, el choque entre las expectativas iniciales y la realidad efectiva no hicieron mella en el núcleo de la organización: “Vinimos con nuevas prácticas y nos encontramos con las prácticas tradicionales contra las que peleamos, por eso es dialéctica la relación. Como fuerza, pudimos mantenernos bien por las discusiones internas y la cohesión de la organización, pero hubo otras fuerzas que las destruyeron”.

El balance de la experiencia tiene, entonces, dos dimensiones: una relacionada con lo que deja para la organización y otra más vinculada con las consecuencias de la gestión en términos de llegada a los sectores populares y de transformación del Estado. Cabe aclarar, una vez más, que no existe un balance orgánico de la experiencia de gestión por parte de la organización, por lo cual nos basamos en los diversos testimonios de quienes participaron de la misma. En el primer caso, es relativamente positiva: “Los cargos pueden funcionar para referenciar a los dirigentes, opinan con otra legitimidad. Les da proyección pública para ser candidatos, etc.”. Además, se resalta la experiencia misma de gestionar en el Estado como una cuestión que aporta a la construcción de la organización, en la medida en que ésta tiene “vocación de poder”.

En el segundo caso, el balance es más bien crítico, tanto por el poco espacio político real como por las trabas burocráticas ya analizadas.

Cada vez que dimos la discusión para abordar áreas de gestión en el Estado, siempre planteamos que lo hacíamos en función de apostar al crecimiento de un proyecto de país, desde la experiencia y con la impronta con que llegábamos y apostando a que crezcan las alternativas. Favorecer a los desfavorecidos, no estamos para hacer equilibrio sino para favorecer a un sector, no para ocultar la lucha de clases

Pero estas expectativas chocaron con las posibilidades reales, por lo cual la situación concreta de los sectores populares no se vio sustancialmente modificada, ni mucho menos. Incluso los entrevistados dan cuenta de que entre las propias organizaciones populares que ocuparon espacios de gestión (muchas de ellas aún lo hacen) no pudo construirse una relación positiva que permitiera posicionarse de mejor modo al interior del ministerio. Por el contrario,

primó la competencia y la división, quizá en honor a una cultura política de la izquierda argentina, que no es tema de este análisis pero que, evidentemente, tampoco le escapa.

Algunos elementos del proyecto de gestión del MBP quedan como interrogantes necesarios para reflexionar sobre la posibilidad de apertura de las políticas públicas a la participación de los sectores populares. El problema central es el de la naturaleza del Estado y las potencialidades de las organizaciones populares para plasmar allí contradicciones sociales y abrir de ese modo instancias de socialización de las políticas estatales. Aparece asimismo la cuestión de la “inercia estatal” y las posibilidades y dificultades de contrarrestarla, tanto “por arriba” (iniciativa política) como “por abajo” participación y militancia territorial). Volveremos sobre ellas en las conclusiones del trabajo.

(5) Algunas reflexiones sobre el llamado “kirchnerismo”

Antes de avanzar hacia las conclusiones (más bien, los interrogantes finales) acerca del problema de la autonomía y la institucionalización, nos tomaremos este breve apartado para realizar algunas consideraciones acerca del “kirchnerismo”. Consideramos imprescindible hacerlo en virtud de que se trata de un fenómeno que ha producido una enorme perplejidad y ciertamente reviste dificultades para analizarlo. Ya adelantamos algunas lecturas del proceso que no han ahondado de manera sistemática en el mismo, sino que lo han leído desde un prisma atrapado precisamente en la dificultad para hacerlo. Quizá por ello algunas de sus argumentaciones redundan en recursos más sencillos que la propia realidad, quedando de ese modo atrapados entre un discurso “normativizante” (más cerca del “deber ser” –aún el de izquierda-) y cierto lamento por una nueva página de la historia argentina en que el peronismo se revela como ese fenómeno complejo y multiforme que produce perplejidad y aparece, en la última de las instancias, como *absolutamente incomprendible*.

El peronismo en el kirchnerismo: ¿vigencia de una identidad o farsa de la tragedia?

Aunque de manera algo esquemática, esta pregunta puede ser visitada desde dos dimensiones distinguibles analíticamente, a las que ya aludimos a la hora de hablar de la productividad del Estado en Argentina y América Latina y que no casualmente retornan para este tema: el par material-simbólico. Con la primera de las dimensiones nos referimos –sucintamente– al modo en que la producción y reproducción de la vida de los sectores populares en la Argentina se relaciona efectivamente con el peronismo y a las transformaciones en esa relación en las últimas décadas. Dicho de otra manera, la pregunta sería ¿en qué sentido el peronismo estructura hoy a la sociedad argentina? (si es que lo hace y bajo la hipótesis de que, con matices y diferencias, sí lo hizo durante las últimas seis décadas). La segunda dimensión alude más bien al modo en que el peronismo sigue siendo central a la hora de producir un movimiento político, cualquiera sea la fisonomía y los objetivos explícitos de éste. En este caso, el interrogante gira en torno de la capacidad de la “simbología” peronista de interpelar a los sectores populares y a sus organizaciones con el fin de construir un proyecto político; traducido a nuestro problema: ¿qué elementos de la retórica peronista persisten y de qué modo reaparecen en el discurso del

“kirchnerismo” (esto es, no sólo –ni principalmente- de Néstor o Cristina Kirchner sino de quienes son parte del proceso político que lleva tal nombre)?

De algún modo, el peronismo es la experiencia fundacional de la relación entre sectores subalternos y Estado. No porque antes no haya existido tal vínculo, sino porque se trata de un momento histórico que funda una relación *de nuevo tipo* y que, además, es constitutivo del acervo de tradiciones de las luchas sociales que se dan posteriormente. La fuerza del vínculo que se estrechó entre las organizaciones sindicales (alrededor de las cuales se nucleaba la abrumadora mayoría de la clase trabajadora argentina) y el Estado no fue sólo de orden económico, sino que abarcó la sociabilidad cotidiana de los trabajadores (Merklen, 2005). De esta manera, la identidad de los sectores populares fue forjada al calor de la relación con el Estado y de la interpelación que de este emergía hacia el “pueblo trabajador”. Al margen de las incontables interpretaciones en torno del peronismo, hay dos elementos a rescatar para el desarrollo de este trabajo: en primer lugar, no podemos leerlo como una mera concesión desde arriba a fin de canalizar el peligro que suponían las masas activadas sino, tal como expresamos antes, como un proceso conflictivo y dialéctico entre la irrupción de los sectores subalternos en la escena pública y sectores dominantes que pugnaban por canalizarla productivamente -en términos capitalistas-. En segundo lugar, la articulación de la identidad popular en relación con el peronismo y el Estado es una clave todavía imprescindible para la lectura de los procesos actuales. Por ello, todavía pesan como factor de interpelación a la hora de construir proyectos políticos en la Argentina.

El peronismo es un momento que sintetiza la productividad material y simbólica de los Estados periféricos. Siguiendo los aportes de Daniel James (2006), aquél sustenta su fuerza simbólica en el *reconocimiento* de los trabajadores como clase. La expansión de la vida popular al espacio público y el discurso plebeyo y -diríamos hoy- “políticamente incorrecto” supusieron un quiebre con el pasado (fundamentalmente con la “década infame”, caracterizada por la exclusión y la represión de los sectores populares) y una auténtica irrupción de un sector social antes invisible en el pacato orden constituido. En términos materiales, no debe soslayarse que esto se sustentó en una importante ampliación de los derechos sociales y laborales, constituyendo una noción de ciudadanía que excedía los rasgos procedimentales considerados hasta el momento (incluso por voces que expresaban luchas sociales, como el irigoyenismo, más acotado a la disputa por derechos políticos). El peronismo, sobre todo una vez instalado en el poder estatal, se movió en la tensión entre la radicalización de los trabajadores y la institucionalización de sus

canales de participación. La dimensión eminentemente cooptativa estuvo ligada a los sindicatos, que constituyeron una fuerza política de gran peso político en las décadas sucesivas. En cualquier caso, dicha tensión es la forma específica que tomó en nuestro país la relación entre el conflicto social y el Estado.

Hoy, sin embargo, deberíamos hablar de una tradición “en crisis”: la identidad peronista perdió densidad a partir de que el Partido Justicialista tendió a minar sus propias bases en las últimas décadas. Cuando se dice que éste pasó de ser “sindical a clientelar” (Levitsky, 2005), no se debe acotar a la cuestión de las bases de apoyo del peronismo en el poder (del sindicato al barrio) –también importantes, desde luego-, sino abarcar centralmente el giro político-ideológico allí involucrado. Quizá la estructura poco institucionalizada del peronismo explica en parte la flexibilidad y los márgenes de autonomía de las figuras ocasionalmente dirigentes para torcer el rumbo político-ideológico del PJ. En cualquier caso, lo central es que su forma de “arraigo social” cambió radicalmente en la década del noventa: si durante el período “clásico” del peronismo, el pueblo trabajador era integrado al Estado por medio de sus organizaciones sindicales y políticas y una serie de mediaciones ligadas con “derechos adquiridos” (James, 2006), hoy nos encontramos con demandas asistenciales en el territorio: el barrio tiende a remplazar al ámbito laboral como espacio de socialización de los sectores populares. El Estado cede su lugar de garante de derechos, para ser proveedor de asistencia en el marco de políticas sociales focalizadas con mucho de estigmatización y clientelismo. La falta de recursos potencia éste último y el peronismo construye así su estructura, ahora segmentada y en competencia interna permanente y caótica (Merklen, 2005; Auyero, 2001). No pretendemos ahondar en esta compleja problemática, la conclusión que sí es central para nuestros planteos es que la propia identidad peronista tiende a vaciarse. Se instrumentaliza en función de su fuerza para ser inscripta en las redes clientelares, a la vez que las mismas condiciones de carencia obturan cada vez más aquél viejo axioma de que “el pueblo es peronista” en un sentido sustantivo. De ese modo se debilita la fuerza popular que sustenta la identidad peronista y, de manera algo paradójica, ésta se acerca más a una opción ideológica de la militancia que a la genuina experiencia del pueblo.

Este último punto es interesante para pensar la validez que la simbología peronista tiene para los movimientos que antes analizamos, que se identifican, con sus matices y

particularidades, con el peronismo. La revista *Envido*³⁹ de mayo de 1973 –semanas antes de la asunción de Cámpora- dice en su portada: “Gobernar es movilizar”, aludiendo así a un elemento que consideramos central para pensar la compleja relación entre los procesos de transformación social y las instancias institucionales. Todas las medidas del “gobierno popular” serían revolucionarias en virtud de la movilización para defenderla y no tanto en función de su apego más o menos fiel a un programa que determina cuáles medidas son transformadoras y cuáles no. Nos permitimos una extensa cita, que nos parece que grafica la cuestión:

Esa capacidad de una medida y de su implementación para ser asumida y defendida activamente por el sujeto de la historia es lo que llamamos **movilización**. Es la movilización del pueblo la que puede darle a un acto de gobierno su carácter revolucionario, porque está asociada a los cambios cualitativos que se requieren en el nivel de la organización popular. Cada vez que un sector o la totalidad del pueblo –según el carácter del acto de gobierno- se movilice en torno a él se habrá dado un paso en la marcha hacia la meta de su organización definitiva. Y que alguien afirme que la organización del pueblo para la defensa de sus intereses y del gobierno liberacionista no es el principal objetivo revolucionario de este momento... (Editorial de la Revista *Envido* n° 9, mayo 1973, página 3)

Esta cita expresa, consideramos, el sentir histórico de la izquierda peronista, que es al mismo tiempo un interesante núcleo para problematizar la actualidad de esta cuestión: no hay radicalidad sin movilización. Si nos fijamos en los distintos documentos y declaraciones de los movimientos sociales más cercanos al kirchnerismo, encontraremos sin tardar demasiado una fuerte similitud con este planteo. De hecho, aunque escapa a los tiempos a los que se aboca este trabajo, el actual alejamiento del Movimiento Barrios de Pie del gobierno (sus dos principales referentes –Humberto Tumini y Jorge Ceballos-renunciaron muy recientemente a sus cargos) tiene que ver precisamente con una opción del gobierno por las viejas estructuras partidarias del PJ y no por la “movilización” de los sectores populares a través de sus organizaciones⁴⁰. Además, su participación misma en el gobierno está dada por la posibilidad de interpelar desde allí a los sectores populares a profundizar en sus formas de organización. Un documento del Movimiento Evita, redactado por el director de la revista de la organización, por su parte, reza:

³⁹ Revista característica de la Juventud Peronista que era parte de la llamada “tendencia” pero no participaba activamente de las organizaciones armadas. Entre su consejo editor se destacaban José Pablo Feinmann y Horacio González.

⁴⁰ Declara Jorge Ceballos en *Página 12* del 5 de diciembre de 2008: “Los motivos que nos han llevado a tomar esta decisión tiene que ver con que se han desvirtuado la convocatoria a la conformación de una fuerza política plural, transformadora, defensora de los principios nacionales y populares que se hizo por el 2003 cuando por entonces gobernaba el presidente Néstor Kirchner”. Esperamos en algún próximo trabajo dar cuenta de estos cambios –más que trascendentes para nuestro tema- que se están sucediendo mientras este texto se termina de redactar.

Quien no dé cuenta del cambio profundo que implica la irrupción de Kirchner en la política argentina es de una miopía considerable o una mala leche manifiesta (...) Ahora bien, el que crea que con la contundente victoria de octubre [de 2005] ya todo está resuelto es por lo menos un necio. La verdadera transformación social y política está aun pendiente. Lo que se hizo alcanzó para el plebiscito que demuestra que la esperanza está en marcha. Pero ahora es necesario el protagonismo popular, indispensable para cualquier cambio profundo

Unas líneas después, dice: “Es que nosotros creemos en la fuerza del movimiento. El movimiento no es otra cosa que una porción importante de nuestro Pueblo que se organiza para defender los intereses nacionales”. Lo mismo se espera hoy del movimiento y de sus líderes: los reclamos y diferencias con la conducción de Néstor Kirchner tienen que ver centralmente con los diferendos sobre la necesidad y los medios de fomentar la movilización de los sectores populares. Como decíamos, hoy las principales críticas al gobierno radican en que éste ha optado por recomponer el Partido Justicialista sobre la base de la vieja estructura duhaldista antes que priorizar la construcción de bases de apoyo sustentadas en movimientos y organizaciones sociales que provengan de otras experiencias.

Pero es necesario relacionar este problema con las transformaciones materiales de la identidad peronista: la crisis de aquello que se pretende *movilizar*. La vigencia de la interpelación que se espera de Kirchner encuentra su límite en que la correlación de fuerzas es absolutamente diferente (más desfavorable) a la de 1973. La pregunta que iniciaba este apartado no tiene, a nuestro juicio, una respuesta unívoca, sino que grafica una realidad compleja donde el peso simbólico de la tradición peronista encuentra sus límites en la dificultad para construir un escenario de fuerzas sociales activas apoyando la radicalización del gobierno.

El gobierno como nudo de conflicto

La misma editorial de *Envido* dice:

El gobierno, nuestro segundo gobierno, puede ser revolucionario. Y puede serlo en el principal sentido de ese calificativo, que luego retomaremos. Pero si nos colocamos en las típicas posturas **programaticistas** y **principistas** del “apoyo crítico” o “apoyo condicionado” estaremos concediendo al enemigo su triunfo y anticipando nuestra derrota. El signo revolucionario del gobierno hay que imponerlo, hay que pelearlo **desde adentro** y no sólo desde fuera. (Ibídem, página 2)

Esta cita es la puerta de entrada para un elemento crucial del peronismo que hoy se reedita en la relación entre los movimientos sociales y el gobierno: la cuestión de la disputa de un proyecto popular en el seno de las instituciones estatales. En los dos casos analizados esto aparece con una diferencia que parece un matiz pero en realidad tiene por detrás cuestiones sustantivas, sobre todo en lo referido al problema de la relación que se establece entre la organización y el espacio a disputar (el gobierno). Antes de ello, para hacer honor a la cita y a nuestra hipótesis del “parecido de familia”⁴¹ (pero con una grave crisis en el sustento político en términos de correlación de fuerzas) entre estos tiempos y la “primavera camporista”, es necesario decir algo acerca de esta “afinidad”. Se trata de un parecido que radica más en la posibilidad de inscribirse en una historia común –la historia de la izquierda peronista y su cercanía con el *poder real* en 1973- que en la fuerza política para realizarlo. Aún así, lo que resulta más interesante es que lo que el kirchnerismo estaría reeditando para estas organizaciones es la crisis de la dicotomía adentro-afuera del Estado para pensar la transformación social desde el punto de vista de los sectores subalternos. De este modo, es a través de la tradición como espacio simbólico que la relación entre Estado y conflicto social asume una forma específica en la Argentina actual. Lo cual refuerza nuestra hipótesis de que el vago concepto de cooptación necesita ser superado, no sólo porque no explica, sino, fundamentalmente, porque no es operativo *políticamente*. En este sentido, lo importante es preguntarse por las consecuencias de las relaciones establecidas entre kirchnerismo y movimientos sociales en términos de construcción de alternativas políticas superadoras. Y allí es donde las propias organizaciones coinciden en que la incorporación al gobierno ha supuesto un crecimiento cuantitativo y una potenciación para su palabra pública, pero al mismo tiempo reconocen en la coyuntura de hoy serias dificultades para tener un peso relativo importante en las decisiones políticas estratégicas del gobierno.

⁴¹ Cotejando algunas citas de la mencionada revista y otros documentos de la época con entrevistas y declaraciones del presente, también es posible encontrar formas sutiles de reedición de la vieja “teoría del cerco” que en la década del setenta, bajo el argumento de que estaba rodeado de “traidores”, permitía seguir creyendo que Perón no era responsable del giro a la derecha del peronismo en el poder. En un breve editorial de julio de 2006 (que lleva por título: “Cómo apoyamos el proyecto nacional del Presidente”), Humberto Tumini enumera los desacuerdos de la organización con una serie de medidas y alianzas políticas del gobierno (la persistencia de figuras como Barrionuevo y Saadi; las alianzas con intendentes ex – duhaldistas, el giro de Borocotó, el guiño al radicalismo en lo relativo al rectorado de la UBA, etc.) para concluir: “A nosotros no nos parece que, con el argumento de no debilitar al gobierno de Kirchner, haya que barrer la basura debajo de la alfombra. Seguramente, *nada más alejado del pensamiento y de la acción del propio Presidente*”. Las cursivas son nuestras, para preguntarnos quién *piensa* y *decide*, entonces, tales rumbos.

El kirchnerismo ha supuesto ante todo, un desafío al campo popular. Sobre la base de lo trabajado con las organizaciones analizadas, vimos que sus políticas abrieron un espacio simbólico para trabajar temas que en las últimas décadas no habían sido recuperados por los gobiernos. De ese modo, institucionalizó la iniciativa social de una serie de reclamos ya históricos de los sectores subalternos. Más allá de cuán fiel fuera a esos reclamos, lo central es que quedaron de ese modo instalados en la agenda oficial. Es allí donde se manifiesta la plasmación institucional y contradictoria del conflicto social, en tanto el orden estatal funciona *suturando* el conflicto abierto, que, a su vez, imprime su *huella* en el aparato estatal (O'Donnell, 1984; Poulantzas, 1991). Por esto, nuestra preocupación está centrada en ese procedimiento más que en la diferencia entre el discurso y la práctica que el gobierno lleva adelante. Porque es a partir de esa “oficialización” de estas problemáticas que se estructura la relación con las organizaciones populares.

En este sentido, vimos cómo se produjeron divisiones y re-configuraciones al interior de los movimientos piqueteros, a partir de su posición política respecto del gobierno. El gobierno ha ido produciendo, en este punto, una suerte de polarización que obligó a las diferentes fuerzas a tomar posición al respecto. Logró correr el eje, típicamente “noventista”, adentro-afuera (del gobierno y del Estado) para pensar la potencialidad de las organizaciones sociales. En su lugar, inscribió una idea de “proyecto nacional” cara a la historia del peronismo que permitió que los espacios más identificados con ese significante lo asumieran como propio contra las diversas fracciones de una derecha argentina que fue tomando una forma cada vez más definida a partir de los últimos dos años del gobierno de Néstor Kirchner y, obviamente, en el marco de los conflictos suscitados en el primer año del gobierno de Cristina⁴².

En lo relativo a los movimientos sociales que no asumieron como suyo el proyecto del gobierno, el problema de la mencionada polarización es que ha socavado enormemente su peso político. Entrampados en la necesidad de ser oposición sin identificarse con las posiciones de la derecha, ha resultado sumamente complejo incorporar una voz crítica que tenga alguna relevancia a nivel social. De este modo, el gobierno se aseguró un nivel mínimo de críticas “por izquierda” a la par que estimula sin rodeos la construcción de un discurso reaccionario que se le opone desde

⁴² No sólo la cuestión de las retenciones ha supuesto una voz común por parte de la derecha. A partir de allí, logró estructurar una voz que, aunque por ahora limitada a criticar al gobierno y con pocas posibilidades en términos propositivos, interviene permanentemente en la escena pública, tanto a través de su representación política (Coalición Cívica, PRO, UCR, PJ “disidente”) como por vía de los medios masivos de comunicación.

lo más rancio de la política argentina. Tanto los entrevistados del MBP como los del ME mostraron, con algunos matices, la opinión de que el gobierno está a la izquierda de la sociedad, esto es, que propone iniciativas que suponen un nivel de confrontación y conflicto que la propia sociedad no está dispuesta a tolerar (el caso del conflicto del campo es muy gráfico al respecto: se terminó pidiendo la “pacificación del país”), acostumbrada todavía a concebir la política en términos “neutrales” de técnica y administración, discurso que en los noventa veló el carácter conservador del proyecto neoliberal.

Quizá habría que matizar la afirmación de los entrevistados, a fin de hacerla un poco más amplia en función de un análisis de la correlación de fuerzas sociales que es condición de posibilidad del kirchnerismo. Lo que efectivamente se ve es que no existe una fuerza social de relevancia –con aspiraciones concretas de disputar poder en la Argentina- que esté a la izquierda del gobierno. Ello tiene por consecuencia que el kirchnerismo puede construirse a sí mismo –de cara a las organizaciones populares que lo apoyan- como aquello más allá de lo cual sólo hay retroceso. Aquí habría que pensar, por un lado, que los espacios políticos que imaginaron poder construir con el kirchnerismo algo que lo trascendiera han encontrado muchos más problemas de los esperados (el caso de Libres del Sur es muy gráfico al respecto). Pero además es necesario reflexionar sobre las energías sociales del 2001 y su devenir en los últimos años: ¿A dónde está ese *poder constituyente* que todo lo derribaba? En las conclusiones ensayamos algunas ideas sobre la autonomía y la cuestión estratégica del poder que intentan contribuir a pensar (auto) críticamente la política de los sectores subalternos luego del 2001.

(6) Conclusiones e interrogantes finales

Kirchnerismo y movimientos sociales

Para iniciar las conclusiones de este trabajo, revisemos –como habíamos prometido- la diferencia de percepción de la disputa dada entre el MBP y el ME, ya que consideramos que ella aporta a la reflexión sobre el problema de la autonomía política y organizativa al que hicimos referencia reiteradas veces a lo largo de este trabajo. El MBP consideró que se trataba de un *gobierno en disputa*, mientras que el ME considera que estamos frente a un *gobierno de orientación popular que permite disputar el Estado*. Ambos ubicaron el momento fundante de su actual relación con el gobierno en la apertura de partes de la gestión –principalmente de desarrollo social- a organizaciones sociales, en el marco de las coincidencias generales que se tenían con el proyecto del gobierno. De ese modo, la ocupación de cargos en el Estado es una implicancia y una consecuencia de la opción política por acompañar el proyecto gobernante. Allí se cristaliza una disputa de poder y, al mismo tiempo, se acceden a recursos materiales y simbólicos antes ausentes en las organizaciones.

La diferencia de la que hablamos radica en cómo se inserta esa decisión política dentro de la estrategia y la historia de la organización. El MBP toma una decisión muy ligada con una afinidad ideológica pero con la idea de rebasar las oportunidades que el gobierno brinda. En ese sentido, considera que se trata de un *gobierno en disputa* en la medida en que expresa una serie de proyectos contradictorios en su interior. En ese marco, el Movimiento se lee a sí mismo inscripto en ese conflicto y expresando la necesidad de *radicalizarlo* en el sentido de las aspiraciones de los sectores populares. Sin embargo, el MBP –igual vale para Libres del Sur en general- lee la coyuntura en función de las aspiraciones históricas de la organización. Vimos que la lectura de la realidad política argentina realizada por CPL en los últimos años suponía un retroceso del campo popular que obligaba a pensar en frentes amplios de construcción que estuvieran incluso hegemonizados por sectores de la burguesía. Así, el kirchnerismo es concebido como un momento táctico dentro del horizonte político general de la organización. Dentro del llamado “nacionalismo revolucionario”, se trataría de una etapa transicional hacia la construcción de un sujeto popular capaz de transformar radicalmente la sociedad. Por todo esto, aunque de manera compleja y con vaivenes, MBP expresó siempre la necesidad de pensar su *autonomía*

política como un elemento a sostener aún en su relación con el gobierno. Ello supuso algunos desacuerdos importantes y hoy la retirada casi total del proyecto kirchnerista. De este modo, la cuestión de la *autonomía* operó como la otra cara de la figura del *gobierno en disputa*, ya que el MBP preservaba para sí algo que no lo identificaba plenamente con el kirchnerismo y que le supuso la salida del mismo. Cabe preguntarse, de todas formas, por la fuerza de la noción de autonomía manejada. Pues si ella se expresa solamente en términos de algunos desacuerdos con el gobierno al punto de decantar en la ruptura de la relación, parece un concepto *débil*, ya que no es una capacidad positiva de imponer y construir en función del rumbo general del proceso sino más bien una reserva que permite cambiar las decisiones tomadas a condición de revelar la poca inserción en los resortes de poder *real* de la organización. Es claro en este punto que el kirchnerismo nunca cedió los lugares estratégicos de poder a los movimientos sociales, así como también parece claro que la disputa de éstos por alcanzarlos es cada vez más desfavorable.

Como dijimos, el ME lee este proceso como un gobierno popular, o de orientación popular que abre espacios para la disputa del Estado en su conjunto. Son varios los factores que separan estas consideraciones de las del MBP, principalmente de orden ideológico y organizativo, distinguibles en este caso sólo de manera analítica. Si el ME se articula fundamentalmente como base de apoyo para el kirchnerismo, no es errado decir que éste constituye su dimensión estratégica o, dicho de otro modo, para el ME como tal no hay otra política que no sea la de apuntalar y sostener el proceso del actual gobierno, en tanto considera que es la condición necesaria e indispensable para el crecimiento de las organizaciones populares, por dentro y por fuera del Estado. En términos organizativos, la propia estructuración del ME como tal es prácticamente un producto de las necesidades del kirchnerismo y, en términos ideológicos, el ME responde de manera más clásica a la cuestión del peronismo sin detenerse tanto en los matices ligados con el nacionalismo revolucionario: aunque su núcleo de figuras centrales pueda ubicarse en esa tradición, el carácter movimientista y la amplitud táctica dan cuenta de una organización que excede ampliamente ese pensamiento y se ubica en un sentido más pragmático como base de apoyo del gobierno. De este modo, la cuestión de la *autonomía* no es problematizada porque, en los hechos, no necesita serlo: el ME es consciente de que su final es el final del kirchnerismo, por lo cual no hay lugar de disenso sin la cancelación de su propia existencia, al menos en su actual modalidad.

Hemos recorrido diversos modos de relación con la institucionalidad y la lógica estatal, al menos al interior de los movimientos que han acercado sus posiciones a las del gobierno. Quizá sería apropiado tomar un caso opuesto, lo cual no descartamos para el futuro, pero en este caso no lo hicimos para no confundir(nos) la categoría de autonomía con la decisión política de no adscribir al proyecto kirchnerista. Lo interesante de los casos tomados es la posibilidad de profundizar al máximo la tensión en que tal concepto se encuentra en el marco de una sociedad por definición heterónoma como es la capitalista.

Vimos entonces que una de las dimensiones a través de las cuales las políticas del presente gobierno afectaron la organización de los movimientos piqueteros es el eje de lo que podríamos denominar *tradicón*. Los movimientos que provienen del amplio espectro (casi indefinible, por cierto) del “nacionalismo de izquierda”, que incluye parte del peronismo, cuentan con otros condicionantes a la hora de acercarse a un gobierno. Dicho de otro modo, la especificidad de sus análisis coyunturales se asienta más en el eje Imperialismo-Nación que en la confrontación clasista en sus términos tradicionales. Si bien se trata de una presentación esquemática de la cuestión (y de estos grupos), lo central es que este tipo de lecturas redundan en una toma de posición respecto del Estado que dista de la que toma la izquierda más ortodoxa. En este trabajo, por el alcance que pretende, no desarrollamos las consideraciones sobre el Estado de los diferentes grupos que reconocen precedente en diferentes vertientes del nacionalismo de izquierda. Alcanza, por el momento, con aclarar que no se lo sopesa prioritariamente como un factor que coadyuve a la dominación capitalista *per se*, sino más bien en su relación con el imperialismo (cuán penetrado se encuentra, etc.). Al mismo tiempo, se reconoce su productividad histórica en la vida de los sectores trabajadores de los países periféricos (material y simbólicamente), por medio de la reivindicación, más o menos intensa según el grupo, de los procesos “populistas”. De allí que no sólo no se rechace al Estado de antemano, sino que se lo considere una instancia privilegiada de articulación y construcción de un proyecto alternativo de país, incluso en términos de socialismo (amén de que el lenguaje de los documentos y declaraciones públicas de estos espacios haya perdido tal significante en los últimos años).

Como mencionamos en el cuerpo del trabajo, la noción algo difundida de “cooptación” nos parece insuficiente para el análisis de los movimientos que se han acercado al gobierno de Kirchner. Ella supone ante todo una profunda subestimación de dichos espacios y anida en una crítica *externa* que no se detiene en los condicionantes de esa relación sino en valores propios de

quien caracteriza. Es cierto que la afinidad pone en movimiento mecanismos de transferencia de recursos materiales, básicamente en términos de cargos y agencias estatales ocupadas por estas organizaciones. Sin embargo, no debe derivarse de ello una idea simple de intercambio de favores. No al menos si no partimos de una oposición binaria entre Estado como instrumento de opresión y organizaciones como expresión emancipatoria. Los aparatos estatales expresan correlación de fuerzas a nivel social y, en tal sentido, constituyen la dimensión *contradictoria* del Estado. Esperamos haber dejado claro que no son neutrales, pero que tampoco es irrelevante quién los ocupe y el modo en que sean gestionados. En todo caso, allí es donde se inscribe la disputa dada por estas organizaciones.

Como dijimos al principio, la productividad de los Estados periféricos tiende a ubicarlos como centro de las disputas simbólicas y materiales en el seno de la sociedad, lo que complejiza el problema, también mencionado, de la autonomía como *garantía* de los procesos de transformación social. La hegemonía civil de los sectores dominantes es históricamente escurridiza, dada la recurrencia con que los sectores económicamente dominantes no logran una representación política que los contenga, en buena medida por la fuerza con que allí se producen enfrentamientos entre sectores burgueses locales y extranjeros. Cuando los segundos dominan en desmedro de los primeros, pocas veces logran construir una hegemonía civil, a ello también pueden atribuirse las constantes irrupciones del “partido militar”. Por su parte, las burguesías locales cuentan con una menor fuerza pero con una capacidad infinitamente mayor de interpelar a los sectores populares. La disputa por el poder político, entonces, supone la búsqueda de mayor independencia respecto de sectores foráneos, máxime en momentos en que los intereses de ambos parecen irreconciliables. En esos casos se evidencia lo que Trotsky (2000) denominaba “carácter bonapartista *sui generis*” de los gobiernos populistas latinoamericanos –analizando el caso particular del cardenismo mexicano-. Ellos requieren la activación de las masas para llevar adelante proyectos que tensan la relación con sectores antes económicamente dominantes⁴³. A esta altura de la historia latinoamericana, esto parece un hecho de la realidad. Por ende, la pregunta no es del orden de lo deseable sino de las condiciones en que esto sucede. Lo cierto es

⁴³ Lo interesante del análisis de Trotsky es, a nuestro juicio, la constante que se ha demostrado como dinámica de movilización desde los gobiernos populistas. El problema de cómo trascender el carácter burgués de estas experiencias parece hoy más complejo que con el mero reaseguro de la organización política partidaria, que le parece la garantía última y suficiente al autor ruso. En todo caso, planteamos la cuestión de la *autonomía* como garantía de la radicalización del proceso porque nos parece más amplio que una forma organizativa determinada, remitiendo más bien a una política a sostener desde los sectores subalternos.

que esta interpelación supone siempre una potencialidad, pero al mismo tiempo un límite, pues dicha activación tenderá siempre a tener un carácter *controlado*. Así, llegamos nuevamente a la autonomía. Ella no supone rechazar estas condiciones sino problematizarlas. Las alternativas no deben reducirse al aislamiento del acontecer social, por un lado, o la plena integración al Estado, por el otro.

Antes de desarrollar este problema, es necesario extraer algunas conclusiones de la experiencia de participación del MBP en la gestión estatal. En primer lugar, es necesario remarcar que los propios actores involucrados admiten los límites de la experiencia en términos de su repercusión en los sectores a los que se apuntaba. Dicho de otro modo, los objetivos del MBP a la hora de asumir el desafío de la gestión estatal estaban centrados en contribuir a transformar las políticas sociales en la Argentina, particularmente en lo que se refiere a las formas en que éstas llegan a los sectores populares, poniendo énfasis en “territorializar” el Estado y alentar diversas formas de organización popular en el marco de un horizonte de apertura y participación creciente. En este sentido, puede hablarse de un efectivo incumplimiento de las metas del MBP, en la medida en que no se percibieron resultados concretos en tal sentido. Aún cuando la organización en sí misma no se vio debilitada, e incluso ganó en apariciones públicas, el interrogante más general que queda es el de la posibilidad de apertura de la gestión estatal y la potenciación de la participación popular en la formulación e implementación de políticas sociales (y, podríamos decir, de políticas públicas en general).

El problema que subyace aquí es, nuevamente, el de la naturaleza de clase del Estado. En el primer capítulo desarrollamos los elementos que hacen al carácter capitalista del Estado moderno, dando cuenta además del modo en que los aparatos estatales son expresión de la correlación de fuerzas sociales, vale decir, son contradictorios. La experiencia del MBP nos ayuda a comprender de qué manera esa cuestión es palpable en el orden concreto. La *lógica estatal* con que se encuentra el MBP es al mismo tiempo un objeto de disputa y un límite. Es un objeto de disputa porque se trata eminentemente de un proceso *político*, cuya fisonomía no será otra que la dada por el conflicto, las estrategias, las voluntades y las capacidades de transformar o conservar el orden. En ese sentido, aparecen reiteradas alusiones a la falta de iniciativa política del gobierno para producir cambios significativos en la distribución de recursos (materiales y simbólicos) en torno de las políticas sociales. En la misma dirección se menciona la determinación de la organización por pugnar al interior de las agencias estatales y por plasmar allí

su experiencia territorial. De este modo, el problema político, por arriba (iniciativa del gobierno) y por abajo (disputa territorial), parece encerrar la posibilidad de superar el núcleo del problema burocrático. A esto último nos referimos con la idea de *límite*. Ella remite a la existencia de un núcleo de problemas surgidos en el marco de la experiencia de gestión del MBP que no son inmediatamente reductibles a un orden político, sino que aluden más bien a una racionalidad burocrática que excede y sobrepasa la voluntad de quienes ocupan cargos en los aparatos estatales. Vimos cómo ella se expresa en circuitos administrativos interminables y bajo nivel de compromiso público por parte de la media de los agentes estatales, todo lo cual constituye la llamada –por buena parte de los entrevistados– “inercia estatal”.

La doble dimensión del Estado como objeto de disputa y como límite graficada en la experiencia específica de la participación de una organización popular en un gobierno es precisamente lo que quisimos desarrollar en este trabajo. El carácter capitalista del Estado no es un problema de orden teórico; por el contrario, allí se anudan las determinaciones estructurales de la práctica política, estén o no conscientemente dirigidas hacia el Estado. La *lógica estatal*, ya se manifieste política o burocráticamente, supone un modo de delimitar los órdenes en que se puede estructurar una práctica emancipatoria. Al mismo tiempo, el carácter contradictorio de los aparatos estatales agrega mayor complejidad al problema. Si en ellos se materializa una correlación de fuerzas sociales que los excede, dirigir una política hacia ellos no es un asunto que esté en el orden de las decisiones: toda política impactará, de manera más o menos refractaria, en el armazón material del Estado. Pensar la política solamente por fuera del Estado supone despreciar las contradicciones que le son inmanentes y, por ende, abandonar una porción sustantiva de la disputa social. Del otro lado, aparece siempre el riesgo de la plena integración. Quizá sea esta la forma contemporánea de la vieja dicotomía socialista entre reforma y revolución, cuyas más agudas respuestas fueron siempre: “ambas”. *Estado, poder y socialismo*, obra de Poulantzas que hemos citado más de una vez en este trabajo, concluye con un capítulo donde aparece el problema de la relación entre democracia y socialismo. Allí, el autor griego dice:

El dilema del cual hay que salir es, en el fondo, el siguiente: o bien mantener en condiciones el Estado existente, atenerse exclusivamente a la democracia representativa en la que se hacen modificaciones secundarias, lo que lleva al estatismo socialdemócrata y al llamado parlamentarismo liberal, o bien atenerse exclusivamente a la democracia directa de base, o movimiento autogestionario, lo que conduce ineludiblemente, en un plazo más o menos largo, a un despotismo estatista o a una dictadura de los expertos. *Cómo emprender una*

transformación radical del Estado articulando la ampliación y la profundización de las instituciones de la democracia representativa y de las libertades (que fueron también una conquista de las masas populares) con el despliegue de las formas de democracia directa de base y el enjambre de los focos autogestionarios: aquí está el problema esencial de una vía democrática al socialismo y de un socialismo democrático. (Poulantzas, 1991: 313-314)

Suscribimos absolutamente a lo planteado por Poulantzas. Tanto más cuando la propia contemporaneidad latinoamericana a la que hicimos referencia más de una vez reclama para sí la necesidad de pensar una tensión dialéctica entre democracia real y democracia formal. La primera da cuenta de la capacidad autónoma de los sectores populares de organizarse y prefigurar el socialismo. La segunda implica el reconocimiento del carácter contradictorio de los aparatos estatales y, por ende, la intervención política en tal sentido. Se trata, en suma, de articular la lucha *exterior* (“una lucha a distancia de los aparatos del Estado, más acá o más allá de los límites del espacio físico dibujado por los lugares institucionales, es siempre, y en todo caso, necesaria, pues refleja la autonomía de la lucha y de las organizaciones de las masas populares” Poulantzas, 1991: 318) con la lucha *interior* (“desarrollar, reforzar, coordinar y dirigir los centros de resistencias difusos de que las masas siempre disponen en el seno de las redes estatales, creando y desarrollando otros nuevos, de tal forma que estos centros se conviertan, en el terreno estratégico que es el Estado, en los centros efectivos del poder real” Poulantzas, 1991: 316). Esta tensión es la que hemos planteado como un interrogante situado entre la autonomía y la institucionalidad. Es ante todo una pregunta, pues su propósito es la búsqueda de alternativas emancipatorias. Es una tensión, porque precisamente se sostiene sobre la condición de no definir esa búsqueda con una respuesta que resuelva la dicotomía, sino abriendo nuevos interrogantes. A la luz de esto, y a modo de cierre, en el próximo apartado buscaremos repensar el concepto de autonomía.

El problema de la autonomía

Quizá el problema de la emancipación tenga, bajo sus diversas formas, varios siglos de historia. Pero los interrogantes concretos acerca de los modos y sujetos que pueden encarnar dicho proyecto en el capitalismo son relativamente novedosos en la historia. Podemos encontrar sus primeras formulaciones en los trabajos de Marx de la segunda mitad de la década de 1840 y la primera mitad de la siguiente. Los primeros son años de producción de una fundamentación histórico-filosófica de la adhesión a la causa del proletariado. Según Michael Löwy (1972), si hay

que pensar un quiebre central en la obra de Marx es a partir de la noción de revolución como “autoemancipación del proletariado”. Esta aparece hacia el final de 1844 como una ruptura con concepciones idealistas que Marx arrastraba de su “espíritu alemán”, que enfatizaban en la fuerza activa de las ideas y desdeñaban la potencialidad transformadora de las masas, en sus diversas expresiones⁴⁴. Pues bien, esta idea puede pensarse como la primera expresión acerca de la necesidad de los sectores subalternos de constituirse a sí mismos de manera autónoma respecto de las clases dominantes. Problema que será profundizado luego de la experiencia de 1848, donde esto se plasma de forma trágica en la masacre de junio. Para Marx, 1848 es ante todo una enseñanza: la clase obrera debe tener autonomía organizativa y político-ideológica respecto de la burguesía, pues si no es ella misma quien lidera el proceso termina por ser una masa de maniobra de intereses que le son ajenos y, finalmente, antagónicos.

Este problema ha sido desarrollado, dentro de diversas tradiciones emancipatorias, en diferentes dimensiones pero siempre sobre esta base, ya que de lo que se trata es de no subordinar intereses de los sectores subalternos a una política externa a ellos. Así, visiones radicales afines al anarquismo plantean la autonomía como la reconstitución de la sociedad a partir del autogobierno y la autodeterminación permanentes en oposición a la heteronomía que supone la ley dictada desde fuera (por caso, por el Estado). Estas lecturas se emparentan también con el rechazo de las formas organizativas propias más ligadas a la clase obrera del siglo XX (partido y sindicato) por portar ellas elementos reificantes de la lógica que se quiere desarticular (estas posiciones abarcan un amplio arco de autores entre quienes sobresalen Castoriadis, Negri, Holloway, etc.). Por su parte, tradiciones más afines al leninismo clásico plantean este problema en términos de “independencia de clase” y muy centrada en la cuestión de la organización o, lo que es lo mismo en este caso, el partido revolucionario.

Pues bien, ¿cómo pensar la autonomía en relación con el Estado y el gobierno? En este caso, se trata de un problema acuciante con arreglo a los procesos que se suceden actualmente en América Latina, incluyendo, naturalmente, el caso argentino. Coincidimos con Elías (2006) en que “para dar viabilidad a un proyecto alternativo es necesaria la movilización, participación y autonomía de movimientos sociales, viejos o nuevos, respecto a los gobiernos definidos como

⁴⁴ Es conocido el final de la Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho, texto de 1844, en que el concepto de “proletariado” es utilizado por primera vez por Marx. Dice el autor: “La cabeza de esta emancipación es la filosofía; su corazón, el proletariado” (Marx, 1965: 48). Persiste aquí un dualismo que el autor sólo romperá meses después, superándolo por medio del concepto de praxis, a partir de la experiencia del propio proletariado y no de una misión a él adjudicada por la filosofía.

progresistas”. Proponemos, entonces, considerar este criterio como la demarcación entre la construcción de un proyecto alternativo, crítico e incluso anticapitalista y, por otro lado, un cambio, aunque progresivo, en el carácter y el contenido de los sectores dominantes que no trastoca los pilares más profundos de una sociedad. La cooptación del conflicto y los múltiples mecanismos clientelares pueden inscribirse en este modelo de, en términos de Gramsci, revolución pasiva (Gramsci, 2003:83-90). El autor meridional piensa esta idea en relación con los movimientos de masas que, en el desarrollo del proceso del *Risorgimento*, fueron finalmente dirigidos por los partidos tradicionales, frente a la debilidad de las fuerzas radicales populares de tener clara conciencia de los objetivos propios y su antagonismo respecto de los partidos “del orden”. De esta manera, la fragmentación de las organizaciones populares y su dificultad para articular un proyecto amplio que pueda contener la multiplicidad de aspiraciones de todas ellas, es un factor que facilita la aparición de sectores externos que capitalicen la fuerza movilizadora de éstas. La disputa se da, entonces, por la hegemonía del proceso político, cuyo logro por parte de los sectores subalternos sólo puede ser producto de la autonomía respecto de los sectores dominantes y del Estado en tanto instancia de concentración del poder de éstos.

¿Por qué es necesario que los movimientos guarden autonomía respecto de los gobiernos? Esta pregunta parece más que pertinente en una coyuntura latinoamericana donde algunos de éstos demuestran pretensiones realmente transformadoras (como puede ser el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia). Consideramos esta necesidad teniendo en cuenta la noción de *garantía* de los procesos transformadores, ya que la vitalidad de la construcción política de los movimientos sociales es el resguardo frente al carácter problemático de la transformación social por la vía estatal, particularmente en Estados periféricos. Allí, por la mencionada centralidad y complejidad que estos asumen en tanto articuladores de la formación social capitalista, la ocupación de cargos de gobierno no es garantía del manejo de resortes centrales de la actividad social. Este problema actualiza la clásica distinción marxista entre poder de Estado y aparato de Estado (Althusser, 1997). Una variedad de casos latinoamericanos confirman que la llegada de sectores populares a determinados aparatos de Estado, por más relevantes y centrales que parezcan, no garantiza la posesión efectiva del *poder del Estado* (quizá la experiencia histórica más demostrativa de este problema sea el caso del gobierno de Salvador Allende en Chile, entre 1970 y 1973), que fluctuó hacia sectores como las fuerzas armadas en connivencia con corporaciones empresariales y sindicales.

Asimismo, la capacidad estatal de internalizar el conflicto es siempre un condicionante de la acción de los movimientos, que se ven constantemente compelidos (pocas veces es una opción) a establecer lazos que hieren su capacidad de acción. Tales pueden ir desde la ayuda social supeditada a determinadas tareas, las formas impuestas de organización a la hora de acceder a subsidios (al margen de que no se las respete, las cooperativas, asociaciones civiles y demás introducen formas jerárquicas de división del trabajo) hasta la represión velada o explícita, que también es una forma del Estado de lidiar con el conflicto. Todas estas dificultades constituyen permanentes desafíos a los movimientos, y poseen una importante fuerza desarticuladora, sustentada en la asimetría de recursos materiales y simbólicos. La capacidad de sostener niveles de autonomía por parte de los movimientos es lo que asegura el establecimiento de tiempos y lenguajes políticos propios, sin que esto implique desconocer la existencia del Estado o negar la relación con él, sino la necesidad política de no subordinar el proyecto propio a la lógica estatal.

De manera que la autonomía de los movimientos es lo que garantiza que sigan siendo tales y que no *devengan* Estado, ya que ello implicaría el congelamiento de sus potencialidades en marcos institucionales, a través de la asunción de otras reglas de juego y, previsiblemente, la desarticulación de sus proyectos y formas de construcción primigenias. Sin embargo, la autonomía no debe significar aislamiento, ni rechazo *per se* a la relación con el Estado (dicho sea de paso, imposible) sino la posibilidad de sostener una tensión⁴⁵: no se puede ser puro movimiento, en la medida en que el Estado existe y su presencia atraviesa cualquier espacio político, a la vez que una integración definitiva es al mismo tiempo la desaparición del movimiento en cuanto tal. La tensión es, entonces, una capacidad estratégica inscripta entre las ventajas de la coyuntura y los condicionamientos que la misma impone. No es una mera decisión política, sino más bien una aspiración que se encuentra en relación dialéctica con las instancias institucionales.

Como decíamos al principio de este trabajo, luego de más de una década de virtual silenciamiento, al menos en un plano general⁴⁶, de los proyectos emancipatorios en la región, el

⁴⁵ Para profundizar en la idea de la autonomía como tensión respecto del Estado, ver Thwaites Rey (2004).

⁴⁶ Si bien el sandinismo gobernó en Nicaragua en los ochenta y el zapatismo chiapaneco irrumpió públicamente en México en 1994, es indudable que desde la década de 1970 la posibilidad de pensar una radical transformación social en América Latina se ha visto fuertemente disminuida a manos de la hegemonía neoconservadora en prácticamente todo el sub-continente, al menos hasta fines de la década de 1990.

nuevo milenio se vio asaltado por una serie de experiencias que reinstalaron el problema del cambio social radical en la experiencia latinoamericana. Con ello reaparecieron también una serie de problemas ya clásicos para los debates en torno de la transformación social, a saber: el sujeto del cambio, el problema del poder político, la relación entre reforma y revolución, etc.

Asimismo, un elemento también postergado se reveló como una característica saliente de los procesos más conflictivos de la región: *la cuestión del Estado*. Retornó la pregunta por el lugar del Estado en los procesos de cambio social, con las particularidades de las formaciones sociales latinoamericanas. En este sentido, quizá el mayor aporte de pensar específicamente –y desde una perspectiva crítica- la relación entre Estado y conflicto social en las regiones periféricas, es la posibilidad de habilitar una lectura no instrumentalista del Estado, como quizá ciertas corrientes “ortodoxas” hicieron (y hacen), que permita abordar la complejidad del problema político sin reducir las instancias estatales a meros apéndices de las clases dominantes, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo el carácter capitalista de las mismas.

Así, una *política*, en el sentido de Castoriadis (1996) –como institución de un orden no heterónomo que reconozca su origen en la práctica social que lo funda- debe contar con lo anterior como una determinación del ámbito sobre el cual pretende operar. ¿Cómo pensar la autonomía en tanto autoinstitución no alienante en dicho contexto?

En este sentido, al inicio de este trabajo hicimos referencia a un nuevo “espíritu de época” en las luchas sociales latinoamericanas que yuxtapone -no sin tensiones y de manera algo paradójica- prácticas subalternas ligadas con la idea de *autonomía* con gobiernos críticos del pasado reciente neoliberal de la región. De este modo, uno de los grandes interrogantes y desafíos actuales en América Latina para pensar la emancipación en un sentido fuerte parece ser la relación que se establece entre las prácticas de autoorganización y el Estado. Y no es éste un problema moral o un debate entre posiciones asépticas y negociadoras. El Estado es una cabal expresión del modo de existencia de la sociedad capitalista. Pero, en tanto instancia de articulación, es él mismo una forma institucional contradictoria. Su crítica, por ende, es bien compleja, pues las consecuencias políticas de la concepción de Estado que una organización tenga juegan un rol protagónico en las potencialidades transformadoras de la misma. Por ello, se trata de un juego de finas tensiones donde el concepto de *autonomía* debe jugar un rol central. La autonomía debe ser pensada como una tensión que no pretende resolverse sino inaugurar nuevas

tensiones (habría una *dialéctica de la autonomía*, una política que busca instituir novedad de manera permanente sin devenir institución). La plena autonomía de los sectores subalternos es, en última instancia, imposible de realizar en la sociedad capitalista (por su propio carácter de *subalternos respecto de*). Desde un punto de vista opuesto, el capitalismo produce modos de integración (políticos, culturales, etc.), que por definición no pueden nunca ser plenos, pues se trata de una sociedad, tal como decía Gramsci, “lacerada por contradicciones internas”. Por ello, la autonomía es un proceso permanente de disputa ante las tendencias integradoras del Estado y el capital. En cuanto tal, y al menos hasta la superación del sistema capitalista, sólo puede tener por objeto la apertura de nuevas preguntas, interrogantes y tensiones que pongan en duda la inexorabilidad del presente.

Bibliografía y Referencias

- Althusser, Louis 1997 “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, en Althusser, Louis *La filosofía como arma de la revolución*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Aricó, José 1982 *Marx y América Latina*, México DF, Alianza Editorial.
- Atorresi, Paua; Berhó, Fabián; Zelarayoun, Julia 2006 *Encuesta de Indicadores laborales: tres años de crecimiento del empleo privado formal*. Informe de la Dirección General de Estudios y Estadística Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Auyero, Javier 2001 *La política de los pobres. Las prácticas clientelares del peronismo*. Buenos Aires, Manantial.
- Benjamin, Walter 1995 *Para una crítica de la violencia*, Buenos Aires, Leviatán.
- Bonnet, Alberto 2008 *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*. Buenos Aires, Prometeo.
- Borón, Atilio 2005 “Reflexiones en torno al gobierno de Néstor Kirchner”, en *Periferias*, Buenos Aires, FISyP, N° 12.
- Bourdieu, Pierre 1993 “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”, disponible en www.politica.com.ar/filosofia_politica/espiritus_de_estado.bourdieu.htm
- Buhl, Kathrin y Korol, Claudia (orgs.) 2008 *Criminalización de la protesta y de los movimientos sociales*, Sao Paulo, Rosa Luxemburg Stiftung - Rede Social.
- Castoriadis, Cornelius 1996 “La democracia como procedimiento y como régimen”, en *Revista Iniciativa Socialista* N°38, Madrid.
- De Angelis, Massimo 1999 “Marx’s Theory of Primitive Accumulation: a Suggested Reinterpretation”. Extraído el 20 de enero de 2007 del Sitio Web de Massimo de Angelis: <http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/PRIMACCA.htm>
- Elías, Antonio 2006 “Ante la expansión capitalista y la retórica progresista: una agenda de cambio institucional”, en Gambina, J. y Estay, J. (comp.): *¿Hacia dónde va el sistema mundial? Impactos y alternativas para América Latina y el Caribe*, Buenos Aires, FISyP.
- Engels, Federico 1970 *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*, Buenos Aires, Cartago.
- Evers, Tilman 1989 *El Estado en la periferia capitalista*, México, Siglo XXI.
- Foucault, Michel 1991 “La gubernamentalidad”, en *Espacios de poder*, Madrid, Ediciones de La Piqueta.

- Foucault, Michel 1992 *Genealogía del racismo*, Buenos Aires, Altamira.
- Gramsci, Antonio 2003 *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Grüner, Eduardo 1994 *Las formas de la espada*, Buenos Aires, Colihue.
- Harvey, David 2006 *El nuevo imperialismo. Acumulación por desposesión. Texto y entrevistas*, Buenos Aires, Piedras de Papel.
- Holloway John 1994a “La ciudadanía y la separación de lo político y lo económico”, en Holloway, John *Marxismo, Estado y Capital*, Buenos Aires, Fichas temáticas de *Cuadernos del Sur*.
- Holloway, John 1994b “El Estado y la lucha cotidiana”, en Holloway, John *Marxismo, Estado y Capital*, Buenos Aires, Fichas temáticas de *Cuadernos del Sur*.
- James, Daniel 2006 *Resistencia e integración. La clase obrera y el peronismo 1943-1976*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Lechner, Norbert 1984 “Especificando la política”, en Juan Enrique Vega (coord.) *Teoría y política de América Latina*, México DF, Libros del CIDE.
- Lenin, Vladimir 1974 *El Estado y la Revolución*, Buenos Aires, Polémica,).
- Levitsky, Steven 2005 *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista. 1983-1999*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Löwy, Michael 1972 *La teoría de la revolución en el joven Marx*, México DF, Siglo XXI.
- Lozano, Claudio; Rameri, Ana; Raffo, Tomás 2007a *Desempleo de 1 dígito y final de la emergencia laboral y social. Un debate mal planteado*. Instituto de Estudios y Formación, CTA, Marzo.
- Lozano, Claudio; Rameri, Ana; Raffo, Tomás 2007b *Crecimiento y distribución: notas sobre el recorrido 2003-2007*. Instituto de Estudios y Formación, CTA, Octubre.
- Lukács, Georg 1985 “La cosificación y la consciencia del proletariado”, en *Historia y consciencia de clase*, tomo II, México, Grijalbo.
- Mármora, Leopoldo 1986 *El concepto socialista de Nación*, México, Cuadernos de Pasado y Presente.
- Marx, Karl, 1965: *Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción*, Buenos Aires, Ediciones Nuevas.

- Marx, Karl, 1967: *Introducción General a la Crítica de la Economía Política*, Córdoba, Cuadernos de Pasado y Presente.
- Marx, Karl, 2000: *El Capital*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, Tomo I.
- Mazzeo, Miguel 2004 *Piqueteros*, Buenos Aires, FISyP-Manuel Suárez editor.
- Merklen, Denis 2005 *Pobres ciudadanos*, Buenos Aires, Gorla.
- O'Donnell, Guillermo. 1984. "Apuntes para una teoría del estado". Oszlak. (comp.) *Teoría de la Burocracia Estatal*. Buenos Aires, Paidós.
- Oszlak, Oscar 1982 *La formación del Estado Argentino*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- Oszlak, Oscar; O'Donnell, Guillermo 1976, "Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación", Buenos Aires, Cedes.
- Perelmiter, Luisina 2009 "Militar el Estado. La incorporación de movimientos sociales de desocupados en la gestión de políticas sociales. Argentina (2003-2008)", ponencia presentada en el "Primer Congreso Nacional Sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, Buenos Aires, 30 y 31 de marzo. Disponible en el CD del Congreso.
- Poulantzas, Nikos 1991 *Estado, poder y socialismo*, Siglo XXI, México.
- Rajland, Beatriz y Campione, Daniel 2006 "Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de los últimos años: novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos", en López Maya, Margarita (comp.) *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.
- Roig, Arturo Andrés 2008 "América Latina y su identidad", en *El pensamiento latinoamericano y su aventura*, Buenos Aires, El Andariego.
- Salama, Pierre y Mathias, Gilberto 1986 *El Estado sobredesarrollado. De las metrópolis al tercer mundo*. México, Era.
- Schuster, Federico 2004 "Izquierda política y movimientos sociales en la Argentina contemporánea", en P. Barrett y C. González (comp.), *La izquierda latinoamericana* Buenos Aires, Norma.
- Selznick, Philip 1997: "El mecanismo de cooptación", en Shafritz, J. y Hyde, A. (comp.): *Clásicos de la administración pública*, México, Fondo de Cultura económica.
- Sonntag, H. R. 1977 "Hacia una teoría política del capitalismo periférico", en Sonntag, Heinz y Valecillos, Héctor (comp.): *El Estado en el capitalismo contemporáneo*, México, Siglo XXI.

- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2004 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Biblos.
- Therborn, Goran 1997 *¿Cómo domina la clase dominante?*, México, Siglo XXI.
- Thwaites Rey, Mabel 2004 *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*, Buenos Aires, Prometeo.
- Thwaites Rey, Mabel 2005 “Estado: ¿qué Estado?”, en M.Thwaites Rey y A. López (comp.): *Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas. Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino*, Buenos Aires, Prometeo.
- Tomada, Carlos 2007 *La recuperación del trabajo y sus instituciones rectoras*. Revista de Trabajo, Año 3, Número 4, Buenos Aires.
- Trotsky, León 2000 *Escritos Latinoamericanos*, CEIP, Buenos Aires.
- Vega, Juan Enrique 1984 “Política y Estado. Apuntes e hipótesis para una reflexión sobre sus interrelaciones” en Juan Enrique Vega (coord.): *Teoría y política de América Latina*, México DF, Libros del CIDE.
- Zavaleta Mercado, René 1988a “Las formaciones aparentes en Marx”, en *Clases sociales y conocimiento*, La Paz, Los Amigos del Libro.
- Zavaleta Mercado, René 1988b “La burguesía incompleta”, en *Clases sociales y conocimiento*, La Paz, Los Amigos del Libro.
- Zavaleta Mercado, René 1990a “Ni piedra filosofal ni summa feliz”, en *El Estado en América Latina*, La Paz, Los Amigos del Libro.
- Zavaleta Mercado, René 1990b “El Estado en América Latina”, en *El Estado en América Latina*, La Paz, Los Amigos del Libro.
- Revista *Envido*, mayo de 1973

Anexo: fuentes utilizadas

Para la realización de este trabajo se efectuaron doce *entrevistas en profundidad* con militantes del *Movimiento Barrios de Pie*, así como tres con miembros del *Movimiento Evita*. Las mismas involucraron tanto a cuadros dirigentes como a militantes de base, a la hora de analizar la dimensión política de las relaciones con el gobierno de Néstor Kirchner. Al mismo tiempo, algunas de ellas fueron realizadas con miembros de la organización con trabajo en las diferentes áreas de gestión a las que la misma tuvo acceso, con el objeto de contribuir al análisis de la experiencia del MBP en la gestión estatal.

Todas las entrevistas fueron realizadas entre el año 2007 y el año 2008. En algunos casos, los entrevistados prefirieron no dar sus nombres, razón por la cual algunos de los testimonios son consignados sin nombre en el cuerpo del trabajo. Optamos además por no referenciar cada testimonio con la entrevista correspondiente, a fin de hacer más amena la lectura.

En todos los casos, se trató de entrevistas semiestructuradas, que osciló entre una hora y una hora y media. Los ejes que estructuraban las entrevistas fueron, en el caso de los miembros del *Movimiento Barrios de Pie*:

1-Historia y estructura del movimiento:

Presentación del entrevistado

-¿Cómo está organizado el movimiento? ¿Cuál es la relación entre Patria Libre y el MBP? Breve historia de ambos.

-¿Qué implica en la historia de PL la creación de MBP?

(relaciones con la coyuntura y con la tradición del trabajo barrial en tanto forma de militancia popular en la Argentina)

-Definición ideológica del movimiento

2- Relación con el Estado

-Caracterización de la crisis y el estallido de 2001

-Caracterización del gobierno de Eduardo Duhalde

-Caracterización del gobierno de Néstor Kirchner

-Desglosar el proceso de acercamiento. ¿Pueden establecerse etapas desde el 2003 hasta 2007?

- Contradicciones internas en el gobierno: ¿Qué expresa cada sector?¿Qué posición debe tomarse al respecto?
- Cambios en las prácticas del movimiento desde el acercamiento al gobierno, fundamentalmente a partir de la asunción de cargos por parte de dirigentes
- Cambios en la relación con otras organizaciones

3- Relación con otras organizaciones

- Caracterización de la situación del campo popular: indagar en fragmentación, tendencias, potencialidades y límites de la situación actual
- Cómo fue el proceso de conformación de Libres del Sur ¿Cómo funciona? ¿Las distintas organizaciones tienden a disolverse allí o mantienen sus trabajos de manera autónoma?
- ¿Qué significa políticamente la creación de Libres del Sur? ¿Qué relación tiene con el gobierno de Néstor Kirchner?

Los entrevistados y las fechas fueron:

- Alejandro, 29 años. Militante de Patria Libre, luego Libres del Sur y del Movimiento Barrios de Pie, funcionario de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde el año 2006. Entrevistado el 4 de junio de 2007 en su lugar de trabajo
- Sebastián, 32 años. Militante de Patria Libre, luego Libres del Sur y del Movimiento Barrios de Pie, funcionario de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde el año 2006. Entrevistado el 9 de junio de 2007 en su lugar de trabajo.
- Daniel, 41 años. Miembro de la dirección de Patria Libre, luego Libres del Sur. Funcionario de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde el año 2006. Entrevistado en su domicilio particular el 16 de agosto de 2007.
- Rolando, 35 años. Militante de Patria Libre, luego Libres del Sur y del Movimiento Barrios de Pie, funcionario de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde el año 2006. Entrevistado en su domicilio particular el 28 de abril de 2008.
- Marcelo, 42 años. Militante de Patria Libre, luego Libres del Sur y del Movimiento Barrios de Pie. Funcionario entre 2005 y 2007 de la Dirección Provincial de Políticas Socio Educativas. Entrevistado en su lugar de trabajo el 28 de julio de 2008.

- María, 30 años. Militante de Patria Libre, luego Libres del Sur y del Movimiento Barrios de Pie, funcionario de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde el año 2006. Entrevistada el 10 de junio de 2007 en su lugar de trabajo.
- Militante 1. Varón, 21 años. Militante de base (Juventud del MBP) en el partido de Vicente López. Entrevistado luego del acto de lanzamiento de la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires de Jorge Ceballos, en el estadio de Ferro el 30 de octubre de 2008
- Militante 2. Mujer, 22 años. Militante de base (Juventud del MBP) en el partido de Vicente López. Entrevistado luego del acto de lanzamiento de la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires de Jorge Ceballos, en el estadio de Ferro el 30 de octubre de 2008
- Militante 3. Varón, 32 años. Militante de base en el partido de San Martín. Entrevistado en el marco de la Marcha del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Mayo de 2007.
- Militante 4. Mujer, 26 años. Militante de base en el partido de La Matanza. Entrevistado en el marco de la Marcha del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Mayo de 2007.
- Militante 5. Mujer, 25 años. Militante de base en el partido de La Matanza. Entrevistado en el marco de la Marcha del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Mayo de 2007.
- Militante 6. Varón, 31 años. Militante de Patria Libre, luego Libres del Sur y del Movimiento Barrios de Pie, funcionario de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde el año 2006. Entrevistado en su lugar de trabajo el 16 de julio de 2007.

En el caso del *Movimiento Evita*, los ejes de las entrevistas fueron los siguientes:

1-Historia y estructura del movimiento:

Presentación del entrevistado

- ¿Cómo está organizado el movimiento? Historia del Movimiento. Organizaciones que confluyen. Rol del gobierno en su conformación
- Definición ideológica del movimiento

2- Relación con el Estado

- Caracterización de la crisis y el estallido de 2001
- Caracterización del gobierno de Eduardo Duhalde
- Caracterización del gobierno de Néstor Kirchner

- Desglosar el proceso de acercamiento. ¿Pueden establecerse etapas desde el 2003 hasta 2007?
- Contradicciones internas en el gobierno: ¿Qué expresa cada sector? ¿Qué posición debe tomarse al respecto?
- Cambios en las prácticas del movimiento desde el acercamiento al gobierno, fundamentalmente a partir de la asunción de cargos por parte de dirigentes
- Cambios en la relación con otras organizaciones

3- Relación con otras organizaciones

- Caracterización de la situación del campo popular: indagar en fragmentación, tendencias, potencialidades y límites de la situación actual

Los entrevistados y las fechas fueron:

- Federico, 28 años. Miembro de la Mesa de Dirección de la Juventud del Movimiento Evita. Entrevistado en su domicilio particular el 19 de agosto de 2008.
- Militante 1. Varón, 26 años. Militante del Frente Juvenil del Movimiento Evita. Entrevista realizada luego del acto de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizado el 1 de abril de 2008 en Plaza de Mayo
- Militante 2. Mujer, 34 años. Militante del Frente Mujeres del Movimiento Evita. Entrevista realizada luego del acto de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizado el 1 de abril de 2008 en Plaza de Mayo.

Además de las entrevistas, la investigación involucró instancias de *observación participante* en plenarios y manifestaciones públicas de las organizaciones:

- Lanzamiento oficial del Movimiento Libres del Sur. 27 de abril de 2006, Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.
- Marcha del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. 18 de mayo de 2007, Ciudad de Buenos Aires.
- Plenario de organizaciones populares. Club Atenas de La Plata, 19 de septiembre de 2006
- Manifestaciones públicas por la aparición de Julio López, octubre de 2006.
- Lanzamiento de la Juventud de Libres del Sur. 10 de noviembre de 2006, Club Atlanta, Ciudad de Buenos Aires.

- Manifestaciones públicas del 24 de marzo de 2006, 2007 y 2008.
- Manifestaciones públicas del 20 de diciembre de 2005 y 2006
- Jornadas de lucha del MBP frente al Ministerio de Educación de la Nación, 12 de marzo de 2008 y 23 de abril de 2008
- Manifestaciones públicas en torno del conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández. Acto en Plaza de Mayo, 1 de abril de 2008. Acto en Plaza Congreso, 15 de julio de 2008
- Lanzamiento de candidatura de Jorge Ceballos para diputado por la provincia de Buenos Aires. Acto en el estadio de Ferro Carril Oeste, 30 de octubre de 2008

Asimismo, se analizaron *documentos* del MBP y del ME, algunos de ellos publicados en las respectivas páginas web, en las revistas *Patria Grande* y *Evita*, y otros de circulación interna, e informes de gestión de su participación en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en la Dirección Provincial de Políticas Socio Educativas de la Provincia de Buenos Aires:

Informe de Gestión:

- Informes internos del área de gestión del MBP
- “Informe de acciones 2006”. Subsecretaría de Organización y capacitación Popular, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
- “Experiencias de Organización y Capacitación Comunitaria”. Subsecretaría de Organización y capacitación Popular, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Documentos:

Movimiento Barrios de Pie/Corriente Patria Libre/Libres del Sur

- “Para luchar por la liberación”, noviembre de 1987
- “Por una Argentina popular y rebelde”, 1992
- Documentos para el 2º Congreso, 1996
- Documentos y publicaciones varias de la Agrupación Venceremos y de la Agrupación Universitaria Sur
- “Corriente Patria Libre: Estrategias para el 2004”. Documento Interno, 2003
- “Qué es Patria libre”. Documento Interno, 2004

- “Circular Interna (9 de junio de 2003)”. Documento Interno, 2003.
- “Un nuevo movimiento político, discusiones pendientes”. Documento Interno, Abril de 2005.
- “Movimiento Libres del Sur. Declaración de Principios”. 2005.
- “Cómo apoyamos el proyecto nacional del Presidente”. En Revista *Patria Grande*, julio de 2006

Movimiento Evita:

- “El Movimiento Evita en la reorganización del Partido Justicialista”. Documento Interno. 15 de febrero de 2008.
- “La verdadera madre de todas las batallas”. En Revista *Evita* N°2, noviembre de 2005.
- “Con Kirchner la esperanza en movimiento”. Documento Interno, 2004.
- “La militancia organizada, el cuadro y la conducción política”. Documento Interno, 2004

Se consultaron, además, las siguientes páginas web, con el fin de recabar información y acceder a notas y documentos relacionados con la investigación:

- Página Web Movimiento Evita www.movimientoevita.org.ar
- Página Web Movimiento Barrios de Pie www.barriosdepie.org.ar
- Página Web Libres del Sur www.libresdelsur.org.ar
- Página Web Diario Clarín www.clarin.com
- Página Web Diario Página/12 www.pagina12web.com.ar
- Página Web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación www.desarrollosocial.gov.ar